

# “Las chicas de la Dirección”: expertise, compromiso y negociaciones en la producción social del estatus de víctima en el Poder Judicial argentino.

Autor:  
Posadas, Paloma

Tutor:  
Zenobi, Diego

2021

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título de Licenciada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Antropológicas.

Grado



**Universidad de Buenos Aires**  
**Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Ciencias**  
**Antropológicas**

**Tesis de Licenciatura**

*“Las chicas de la Dirección”*: expertise, compromiso y negociaciones en la producción social del estatus de víctima en el Poder Judicial argentino.

Paloma Posadas  
Director: Diego Zenobi  
Noviembre 2021

## INDICE

Introducción .....	2
Las víctimas, sus expertos y el campo jurídico .....	5
Las transformaciones en el Ministerio Público Fiscal Nacional .....	9
Enfoque metodológico .....	14
Creación de la Dirección .....	20
1.1 La comisión: puesta en marcha de una <i>definición política</i> .....	20
1.2 Organización interna: ¿Campo de víctimas? .....	29
1.3 La interdisciplina como valor.....	34
1.4 Las “chicas de la Dirección” .....	42
El trabajo de la dirección: ¿Un “auxilio” a las fiscalías? .....	47
2.1 El Divorcio .....	47
2. 2 <i>Negociando</i> con las Fiscalías .....	51
2.3 “Hablar el mismo idioma” .....	56
El Programa Especial para Víctimas de Violencia de Género .....	66
3.1 El Programa .....	66
3.2 Las profesionales del equipo .....	74
3.2.1 Las trayectorias feministas .....	74
3.2.2 Las disciplinas.....	80
3.2.3 Profesionales vs. Trabajadoras .....	83
3.3. Compromiso y nociones de víctima .....	85
CONCLUSIONES .....	93
Bibliografía .....	101

## Introducción

Desde mediados del siglo XX la figura de la víctima ha cobrado una centralidad considerable en las sociedades contemporáneas. La entrada masiva de la víctima en el espacio público desde los años '50 en adelante (Wieviorka 2003, Garland 2005) se expresó, en parte, en el fenómeno relativo a la organización de individuos que sufrieron diferentes tipos de violencias y que pugnaron por introducir en la agenda pública reclamos de justicia y ampliación de los derechos. La movilización de las víctimas fue de la mano con demandas de reparación que movilizaron discusiones en el campo jurídico e impulsaron a los Estados a desarrollar políticas públicas centradas en el sujeto dañado.

La idea según la cual el daño y la violencia ejercida por parte del Estado debe ser reconocida y reparada simbólicamente y pecuniariamente, resulta novedosa en términos históricos, y se remonta al escenario abierto por las víctimas del holocausto tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial (Chaumont, 2000). Los estudios centrados en la difusión del lenguaje del trauma psíquico muestran que se trata de un modo de entender el sufrimiento que se vió cada vez más difundido desde entonces, moldeando y prefigurando una noción de víctima histórica y particular (Fassin y Rechtman, 2009).

En nuestro país, tanto el concepto de reparación como la figura de la víctima presentan un recorrido propio ligado fundamentalmente a los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante la última dictadura militar. Los grupos de interés, fundamentalmente organismos de derechos humanos integrados por familiares de personas desaparecidas, asesinadas, y torturadas, a partir de la década del 80 se movilaron para exigir el reconocimiento de estos crímenes por parte del Estado, la desclasificación de archivos, así como también para obtener pruebas y darle impulso y publicidad a los procesos judiciales contra los responsables.

La creciente demanda por parte de colectivos de víctimas, familiares y organismos de DDHH impulsó a su vez la creación de leyes, normativas y dispositivos estatales que pudieran dar respuesta. En este contexto, sumado al proceso que se estaba dando en la región a fines de la década del 90 en relación a los ordenamientos jurídicos, la Argentina se acopló a las discusiones sobre la necesidad de que la víctima pudiera participar con un rol más activo dentro de los procesos penales. Este proceso tuvo como resultado la promoción de leyes y de reformas que mostraban una preocupación creciente por ese lugar que las víctimas debían ocupar, pero también por ofrecer formas de atención y cuidados a un sujeto al que el orden penal había dejado históricamente a un lado. A partir de ello, florecieron dispositivos políticos, sociales, comunitarios, en donde el Estado centró su atención en la asistencia y el acompañamiento a las víctimas de delitos para reparar el daño.

Todo este escenario da lugar al proceso que enmarca el presente trabajo: las políticas públicas centradas en el sujeto dañado. En este marco, el presente trabajo pretende analizar cuáles fueron los cambios más recientes al interior del sistema de administración de justicia argentino orientados hacia los sujetos dañados y cómo, a través de la creación de dispositivos de asistencia, los expertos del derecho, la psicología y el trabajo social, movilizan distintas nociones de *víctima*<sup>1</sup> en función de ciertas expectativas e intereses, contribuyendo a un proceso de victimización contemporáneo. Específicamente, pretendo abordar el modo en que en el marco de esos dispositivos de asistencia, los expertos del derecho, la psicología y el trabajo social, movilizan distintas nociones de víctima en función de ciertas expectativas e intereses, contribuyendo a un “proceso de victimización” (Barthe, 2018) contemporáneo.

A fines de la presente investigación centré mi análisis en una de las oficinas de atención y acompañamiento a víctimas de delitos –a la que llamaré “la Dirección” - perteneciente al Ministerio Público Fiscal, y cómo los profesionales que la componen movilizan distintas ideas de víctima en función de sus expectativas,

---

<sup>1</sup> A lo largo de la tesis destaco en itálica la voz de los actores. La palabra *víctima* no irá en itálicas cada vez que aparece para no dificultar la lectura. Será destacada de esa manera cuando sea indispensable que el término sea leído como una categoría nativa.

disciplinas y trayectorias personales.<sup>2</sup> Aquí me interesa comprender los procesos de tensión, disputa y colaboración entre los profesionales de esos dispositivos de atención a víctimas dentro del Poder Judicial y los operadores de la justicia con los que articulan. En este marco, puede observarse que se movilizan y ponen en juego distintas “ideas de víctima” que están en disputa a partir de la acción concreta de las profesionales de las distintas disciplinas que expresan objetivos de transformación – o mantenimiento de un status quo- dentro del entramado del Poder Judicial, que las movilizan de acuerdo con sus trayectorias y compromisos personales con la erradicación de la violencia y de acuerdo a sus expectativas sobre cómo debe orientarse el trabajo de dichos dispositivos.

En el presente trabajo, tomé como punto de partida la perspectiva de Barbot y Dodier (2017) según la cual un dispositivo está ordenado como un conjunto de secuencias/etapas de interacción que se caracterizan por tener un carácter procesual y por estar compuestos por la combinación de distinto tipo de expectativas de quienes los habitan. Todas aquellas personas vinculadas a los dispositivos -en nuestro caso las profesionales y trabajadoras de los equipos, las funcionarias, los operadores judiciales de las Fiscalías y las víctimas que acuden al mismo- se organizan a partir de “*repertorios normativos*” (Barbot y Dodier 2014, 2017) donde movilizan sus expectativas, y a partir de los cuales se va redefiniendo la finalidad y objetivos del dispositivo. En este sentido, las evaluaciones morales y expectativas de los agentes que lo componen, como así también las personas que acuden al dispositivo -y lo critican o se apoyan en él para alcanzar sus fines- (Zenobi, 2020) van moldeando el funcionamiento del propio dispositivo a lo largo del tiempo.

Siguiendo esas orientaciones conceptuales aquí me pregunto sobre la perspectiva de los profesionales respecto de qué cosas pueden o no hacer las víctimas, quienes

---

<sup>2</sup> Con el objetivo de anonimizar he sustituido el nombre de la institución de la que se ocupa esta tesis al igual que el nombre de las titulares a su cargo y el de las profesionales que se desempeñan ella. Este propósito se ve limitado puesto que cualquier persona que conozca el campo sabrá de qué y de quienes estoy hablando, el nombre puede aparecer en la normativa y, finalmente, puede darse con estos datos a través de una sencilla búsqueda en internet. La preocupación por mantener el anonimato de los actores no ha sido el único motivo para modificar los nombres originales. Esa decisión me permitió tomar distancia de las posiciones sostenidas por aquellas personas con las que compartí horas de trabajo, con algunas de las cuales entablé relaciones de amistad, empatía y afinidad.

pueden habitar o no al propio dispositivo, cuál debería ser la función de la interdisciplinariedad en relación a los objetivos de la Dirección como dispositivo de víctimas pertenecientes al Poder Judicial, etc. Las secuencias de interacción (Barbot y Dodier, 2016) se desarrollan en términos procesuales, y las propias expectativas de quienes habitan el dispositivo van cambiando con el tiempo. A su vez, esas expectativas de las distintas profesionales que van mutando, podríamos pensar, portan algunas miradas sobre qué es una víctima y qué no. En el presente caso se verá cómo el dispositivo de la Dirección se irá transformando en relación a lo que esperan las Fiscalías del mismo, lo que estipulaba su resolución de creación en función del contexto de transformaciones en el Ministerio Público Fiscal, y las expectativas de las profesionales relacionadas con sus trayectorias, compromiso con la causa de la violencia y sus disciplinas.

A partir de ello, mi objetivo general en el presente trabajo es contribuir a la comprensión de los procesos de creación y puesta en funcionamiento de los dispositivos estatales orientados a asistir, y contener a las víctimas de diferentes formas de violencia. Para tal fin, busqué, como objetivos específicos, relevar y describir el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en cuanto a su estructuración interna, funciones y objetivos; describir el funcionamiento de la Dirección considerando su funcionamiento interno, el papel de las profesionales que la componen y el trabajo interdisciplinario de sus equipos; analizar las trayectorias de las profesionales que componen la Dirección en cuanto a los cruces entre saber profesional y compromiso, y por último, indagar en el trabajo del Programa Especial para la Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Dirección en lo que hace a las relaciones de conflicto/cooperación entre las profesionales de distintas disciplinas y las ideas de víctima que se ponen en juego a partir de sus estrategias de intervención.

## **Las víctimas, sus expertos y el campo jurídico**

La emergencia de la víctima como objetivo específico de las políticas públicas comenzó a surgir a finales del Siglo XIX como parte de la evolución de los Estados

de Bienestar, bajo la forma de mecanismos necesarios para proteger a la población frente a situaciones de riesgo. Recién en este siglo se comienza a utilizar el término víctima, para designar a las mujeres y los niños como “*población vulnerable*” que debía ser protegida por el Estado en el marco de las guerras, la violencia y los delitos en general. También se utilizó para referirse a los sobrevivientes de las guerras, y luego se extendió como categoría que incluía la protección de los civiles (Wieviorka, 2003).

Sin embargo, es desde mediados del siglo XX que la figura de las víctimas ha cobrado una centralidad considerable en las sociedades contemporáneas irrumpiendo en la arena pública (Gatti, 2017; Lefranc y Mathieu, 2015). Por un lado, a partir de la década de los 60’, los grandes genocidios motivaron la aparición de sus víctimas específicas y la movilización de los Estados para ofrecer protección y retribución frente a lo sucedido, como así también su reconocimiento como *víctimas* (Chaumont, 2000, Gatti, 2017). Por otra parte, desde 1980, con la caída de los Estados de Bienestar europeos y la transición hacia los “Estados penales” a través del “control del delito”, se buscó ponderar la figura de la víctima y sus sentimientos, para generar empatía en la sociedad y justificar así las medidas de segregación punitiva (Garland, 2005). Por último, la aparición de las “ciencias de la víctima” como la criminología –víctima y perpetrador formando una pareja indisoluble- y la victimología (más centrada en la víctima y su reparación), contribuyeron al reconocimiento de la condición de víctima por parte de la sociedad en su conjunto e hicieron hincapié en la importancia de brindarles asistencia y contención (Wieviorka, 2003).

En este contexto de ebullición de la víctima, surgen además, diversos estudios desde las ciencias sociales relacionados con la politización y los movimientos de víctimas. Un ejemplo de ellos fueron las demandas de justicia de las víctimas en tanto reconocimiento y reparación frente a situaciones de violencia política y transiciones democráticas (Lefranc, 2017, Gatti 2017). Al respecto, en el caso de Argentina, numerosos trabajos desde la década de los 80 analizan los procesos de demanda de justicia frente a la última dictadura militar y cómo los movimientos de derechos humanos tuvieron un papel central en la articulación de demandas contra la violencia estatal (Jelin, 2007, Vecchioli, 2005; Pita, 2005), a su vez que pusieron



el foco en la figura del *familiar* como figura legítima para impulsar la acción y como parte fundamental en los procesos de organización. Esta línea de trabajo se continuó con los estudios sobre la violencia institucional y policial (Pita 2004, Pereyra, 2010), donde a su vez se incluyó la articulación de las demandas de las víctimas y familiares-víctimas con el “activismo jurídico” (Tiscornia, 2008) compuesto por abogados, funcionarios judiciales, organizaciones y colectivos sociales que impulsan el litigio y la acción política con el objeto de fortalecer reclamos de justicia y visibilizarlos en la agenda pública (Pita y Pereyra, 2020).

Este escenario da cuenta de que la categoría de víctima no se puede pensar solamente asociada al daño y las discusiones sobre su reparación (Manikis, 2019, Luzzi 2015, Zenobi 2020), tampoco solamente en términos de movilización y activismo contra el Estado en la búsqueda de justicia (Pita y Pereyra 2020) y ciertamente no puede pensarse como una categoría individual y aislada (Zenobi y Marentes, 2020). La *víctima* es una construcción colectiva en cuyo proceso de “*victimización*” o “producción social de su estatus” (Lefranc y Mathieu, 2009) ciertas personas se definen como víctimas a la vez que son definidas -o impugnadas- por otras (Zenobi, Marentes, 2020). De hecho, en ocasiones son las propias personas damnificadas que pueden oponerse a ser clasificadas como víctimas. Un ejemplo de ello son los casos de trata y explotación que muchas veces disputan esa idea de víctima y se oponen a ser clasificadas como tales (Morcillo y Varela, 2017).

En este proceso, se involucran diversos agentes como expertos y profesionales abogados, psicólogos, trabajadores sociales (Barbot y Dodier, 2014) que a través de su conocimiento experto (Neiburg y Plotkin, 2004.) actúan como “victimizadores” (Barthe, 2018) y contribuyen a objetivar su condición a través de informes, certificados y oficios (Fassin y d’ Halluin, 2005). Estos expertos se desempeñan muchas veces en dispositivos estatales de distinto tipo -jurídicos, políticos, administrativos, entre otros- que se ponen en funcionamiento como parte del “gobierno de las víctimas” (Irazusta y Gatti, 2017; Fassin 2016) en donde los abogados a través de sus prácticas y representaciones (Sarrabayrouse 2011), a la vez que psicólogos, psiquiatras (Grinberg 2014; Zenobi, 2020) y trabajadores sociales desde sus saberes expertos y sus trayectorias contribuyen a la consagración de la condición de víctima (Dodier, 2009). En estos dispositivos, los

expertos se proponen gestionar y certificar su situación de vulnerabilidad y “riesgo” (Iyer, et. al. 2012; Grinberg 2008) asumiendo a la víctima como pasiva -en tanto no ha hecho nada para merecer el daño sufrido- y por ende pasible de ser asistida por el Estado (Barthe, 2018). Frente a esta supuesta pasividad de las víctimas, numerosos agentes como psicólogos, funcionarios, activistas feministas o profesionales con compromiso con las “causa pública” pueden considerar que ellas deben “pasar al acto”, “empoderarse”, o “ganar agencia” (Zenobi, Marentes, 2020) y justamente a través de la intervención del Estado y de ONGs se busca promocionar su “agenciamiento” (Roggeband, 2010).

Dentro de estos saberes expertos que contribuyen a la victimización, el derecho es uno de los más relevantes. Este campo se caracteriza por las tensiones y disputas que surgen en la división del trabajo entre los agentes y las instituciones comprometidas (Bourdieu y Teubner 2000) y entre los saberes “hegemónicos” como el derecho, y los saberes psi, que en los últimos años han ingresado y forman parte de oficinas y dispositivos relacionados con la justicia penal oficiando de “auxiliares” (Pita y Pereyra, 2020).

En el marco de este campo, es vasta la literatura sobre una discusión que será central para el presente trabajo: aquella que desde los años 70 puso el foco en las transformaciones del delito y de la justicia en relación al lugar que ocupa la víctima en el proceso penal (Barbot y Dodier, 2014).

Diversos especialistas del derecho han dado cuenta cómo, desde mediados del siglo XIX, el Estado se hizo cargo del conflicto contra el acusado, y la víctima fue excluida en gran medida del proceso penal (Manikis, 2019). En este marco, la víctima quedó relegada ya que lo que experimentó como resultado de la violencia y su consecuente trauma pasaron a un segundo plano en relación a lo que dicho delito representaba para la comunidad (Garland, 2005). Desde esta perspectiva, la víctima existe sólo porque ella marca algún tipo de relación con el orden social: si es necesario combatir la delincuencia se debe a que el crimen desafía a la comunidad y rompe el lazo o contrato. Es por ello que la víctima delega simbólicamente al Estado y a su sistema de justicia la tarea de “perseguir” al delincuente, a través de la *“expropiación del delito”*. (Foucault, 1991)

Esto provocó a su vez, que en literatura jurídica alrededor de la figura de víctima, esta aparezca siempre abordada desde la perspectiva del delito (Garland, 2005). Recién en las últimas décadas las víctimas de delitos han asumido un papel más activo en el proceso penal. (Barbot, Dodier, 2014)

Asimismo, en contraposición al rol que ocupan las víctimas en el proceso penal, la discusión sobre el derecho civil y la reparación (Zenobi, 2020) aparece como otra manera de abordar “la cuestión de las víctimas”. Mientras que para el primero el hecho dispara una intervención estatal tendiente a reparar el daño (resarcimiento a la víctima), para el segundo, el mismo hecho es visto como una ofensa al orden social establecido y el Estado tiene el deber de imponer una pena, no en términos de resarcimiento a la víctima sino porque el lesionado es el mismo Estado como garante del orden social. Es por ello que la víctima, en el derecho penal ha adquirido siempre un estatus marginal, como mero objeto del procedimiento penal (Esser, 1992). Es decir que el mismo hecho “antijurídico” tiene diferente estatus ontológico o “naturaleza jurídica” según sea enfocado desde la perspectiva del derecho civil o la del derecho penal (Roxin, 1992)

### **Las transformaciones en el Ministerio Público Fiscal Nacional**

Como fue mencionado anteriormente, a partir de la entrada masiva a la arena pública de las víctimas y la preocupación por las vidas precarias, los Estados comenzaron a ocuparse de generar respuestas en términos de reformas legales y de políticas públicas destinadas a los sujetos dañados. En el presente trabajo se indagará en aquellas políticas estatales orientadas a las víctimas de delitos que surgen en el seno del Poder Judicial. Para ello, es central detenerse en una de las instituciones más relevantes en torno a la relación con las víctimas del sistema de administración de justicia: el Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público Fiscal –MPF- es una de las partes centrales, junto con el Ministerio Público de la Defensa, que componen el Poder Judicial. En su conjunto, conforman las tres patas fundamentales en un proceso judicial (Fiscales que

“acusar” -investigan- Jueces que “dirimen” y Defensores que defienden a los acusados). Asimismo, el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente dentro del sistema de administración de justicia. Se encuentra a cargo del Procurador General, que es propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Nación. Es autónomo incluso del Poder Judicial, el cual está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Esa relación tiene sus orígenes en la Reforma Constitucional de 1994, que estableció la autonomía del Ministerio Público, ya que antes pertenecía al Poder Ejecutivo y su rol dentro del sistema de justicia era secundario.

La tarea que les corresponde a los y las fiscales que conforman el MPF tiene como fin y objetivo “defender los intereses generales de la sociedad”<sup>3</sup>: *“El Ministerio Público Fiscal interviene siempre que el ordenamiento jurídico estime que es necesario que una parte del Estado actúe en favor de los intereses de la sociedad. Ese es el trabajo de los profesionales que componen el organismo.” (Carta Orgánica MPF).*

En relación a la parte penal, el Procurador o la Procuradora a cargo del Ministerio tienen la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una “relevancia mayor en la defensa de los intereses generales de la sociedad”. La Carta Orgánica menciona como ejemplos, aquellos que atentan contra la vida, contra la humanidad, los vinculados al narcotráfico, a la violencia institucional, o al lavado de dinero.

Los y las fiscales, en los procesos penales, son quienes llevan adelante la investigación de los delitos. Esa dinámica (fiscal que investiga y juez que dirige) se corresponde con el denominado sistema “acusatorio”<sup>4</sup>, donde es el fiscal quien debe realizar la acusación durante todo el proceso. Esto, según sus defensores, garantiza

---

<sup>3</sup> Fuente: Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

<sup>4</sup> El sistema acusatorio es uno de los tres sistemas de enjuiciamiento que existen en la actualidad. Su lógica se inspira en la justicia griega y de otras civilizaciones clásicas de occidente. Se caracteriza por una división de las funciones dentro del proceso penal y a la vez se distingue por primar la oralidad, la desformalidad, publicidad, celeridad y simplicidad. Es el sistema que rige en la mayoría de los países de la región latinoamericana y en algunas provincias de la Argentina. En el caso de la Justicia Federal y Nacional hoy en día rige un Sistema Mixto, el cual contempla el Sistema Inquisitivo en la instrucción (etapa de investigación) y Sistema Acusatorio en la etapa oral (audiencia de juicio). Desde el 2014 se está dando un proceso en el que a partir de modificatorias al Código Procesal Penal se intenta ir hacia la implementación del Sistema Acusatorio en su totalidad, ya que el Inquisitivo y el Mixto son considerados sistemas vetustos, poco eficaces y en algunas oportunidades favorecen la corrupción judicial ya que al no haber una división clara de tareas, se concentra el poder en una misma persona: quien decide es a la vez quien investiga.

un juez imparcial que, a la hora de tomar decisiones, simplemente deberá valorar aquello que le presentan las partes.

Desde mediados del siglo XX Latinoamérica fue escenario de profundas discusiones alrededor de la justicia criminal y el rol del Estado como árbitro de la misma. En el caso de nuestro país, estos debates se cristalizaron en torno a la *eficiencia o ineficiencia* del proceso penal en la justicia federal argentina para cumplir con sus funciones básicas (Binder, 2002). Esto, puso a los Ministerios Públicos de toda la región en el centro del debate. Aparecieron tensiones en el campo jurídico alrededor de los dos tipos de sistema de enjuiciamiento: el sistema inquisitivo, reinante desde la Edad Media con el Derecho Canónico<sup>5</sup>, vérsus el sistema acusatorio, que venía ganando terreno en los países limítrofes.

Estos debates dentro del campo jurídico (Bourdieu y Teubner, 2000) mostraban fuerzas en tensión: una camada de jóvenes juristas proveniente de las universidades nacionales que promovían la aplicación del sistema acusatorio no solo en nombre de la mayor *eficiencia* en el proceso penal, sino también, en función de cuestionar el rol asignado a la víctima, en un proceso penal donde el Estado, al confiscar el delito, dejaba totalmente afuera a las personas damnificadas, sin ningún tipo de derecho de acceso a la información, ni de decisión durante las causas. Por otra parte, los defensores del sistema inquisitivo, eran aquellos jueces que se negaban a perder el poder que les confería tener el rol de investigar y dirimir.<sup>6</sup>

En nuestro país, criminólogos como Mayer, Baigún y luego Binder encabezaron los debates en las academias y universidades siendo Buenos Aires y Córdoba la punta de lanza para la discusión de la reforma del sistema inquisitivo reinante desde el 1800 en adelante y la necesidad de una reforma del Código Procesal Penal. Producto de estas discusiones, en 1992 se crea un nuevo Código Procesal Penal en

---

<sup>5</sup> El nombre de sistema inquisitivo nace en referencia a la “inquisición”, la antigua forma de juzgar en el Derecho Canónico -el derecho de la iglesia católica- creada en la Edad Media y que se extendería por toda Europa. Fuente: <https://estudiosjuridicos.wordpress.com/derecho-procesal-penal/el-sistema-inquisitivo-y-el-sistema-acusatorio/>

<sup>6</sup> Si bien no se profundizará este debate en el presente trabajo por una cuestión de recorte, menciono este debate ya que se trata de la antesala para las reformas en el MPF argentino, como así también, sobre la discusión del rol de las víctimas en el proceso penal.

Argentina que incorpora la oralidad y transforma el sistema inquisitivo reinante en un sistema mixto.

Luego de más de 20 años de debates, finalmente el 4 de diciembre de 2014 se sanciona un nuevo Código Procesal Penal de la Nación (Ley 27.063/14) que preveía definitivamente la adopción del modelo acusatorio como sistema de enjuiciamiento en la Argentina. Este cambio de paradigma, implicaba profundas transformaciones en la administración de justicia, en las funciones y los roles asumidos por cada uno de los sujetos que intervienen, como así también en las etapas del propio proceso penal. La sanción de este nuevo Código suponía el abandono definitivo del modelo procesal de corte inquisitivo que, pese a las reformas de los años 90, seguía siendo preponderante en la práctica del proceso penal en nuestro país.

Este proceso es relevante en tanto el nuevo código, por otro lado, hace hincapié en los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, y les otorgaba un lugar de mayor importancia dentro del mismo.

*“La víctima tiene derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal en forma autónoma y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva.” (Art. 12. Ley 27.063).*

Asimismo, introducía dos cambios significativos en relación a la participación de la víctima en instancias procesales donde antes no se la tenía en cuenta. Esto es, la incorporación de la víctima en cuanto al reconocimiento de su derecho a ser informada sobre el cumplimiento de las reglas de conducta en los casos de suspensión de juicio a prueba (probation) y, cuando hubiera condena, en la etapa de ejecución de la pena. Este cambio en el Código Procesal Penal orientaba a toda la justicia federal y nacional hacia la implementación gradual del sistema acusatorio, desde sus distintas agencias, direcciones, juzgados, hasta las prácticas de los propios operadores de justicia. En el caso del Ministerio Público Fiscal significaba un

cambio drástico ya que de allí en adelante tendría el monopolio de la acusación. Esto requería que los fiscales se comprometieran no solamente con las víctimas sino también con la defensa de los imputados a quienes se les debería garantizar el acceso a toda información que posean en sus legajos de investigación.

Es por ello, que durante los años 2014 y 2015 se dieron en el Ministerio Público Fiscal una serie de transformaciones que apuntaban a aggiornarse a una nueva política criminal “que pudiera abordar específicamente los ámbitos de criminalidad de mayor complejidad y trascendencia social”<sup>7</sup>. A su vez, la adopción del sistema acusatorio y los nuevos puntos del Código Procesal Penal que ampliaban los derechos de las víctimas supuso la necesidad de crear distintas áreas destinadas a la protección y acompañamiento de las mismas durante el proceso<sup>8</sup>.

En ese sentido, mediante las Resoluciones PGN N° 914/12, 208/13, 455/13, 805/13, 1442/13 y 533/12 se crearon las Procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Combate de la Trata y la Explotación de Personas (PROTEX), de Violencia Institucional (PROCUVIN), de Crímenes contra la Humanidad y el Programa de Género. Cada uno de estos ámbitos de criminalidad vuelve visible un tipo de problemática particular, definida tanto por las características de los hechos delictivos como por los padecimientos concretos de las personas afectadas.

Como parte de la preocupación por darle relevancia a las víctimas de delitos en la política criminal, en el marco de las modificaciones mencionadas, se crea entonces en 2014, mediante la Res N°1105/2014, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (“la Dirección”) para continuar con la labor desarrollada por la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI). Previo a su creación, se conformó una “Comisión para la elaboración de un diagnóstico acerca de la situación de atención a víctimas del delito” compuesta por el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, el doctor Alberto Binder, académico experto en la materia, el doctor Eugenio Freixas,

---

<sup>7</sup> Resolución creación de la Dirección

<sup>8</sup> A estos puntos de ampliación de derechos del CPPF se sumó luego la Ley de Víctimas, sancionada en 2016 que resulta una nueva modificatoria al Código vigente.

titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI), las doctoras Analía y Laura, secretarías de dicha Oficina y el doctor Ivan Polaco, secretario de la Secretaría de Coordinación Institucional. El objetivo de dicha comisión era elaborar un diagnóstico de situación, que se logró a través de un proceso que involucró entrevistas con asociaciones que nuclean a víctimas y familiares de víctimas, y con instituciones públicas y privadas. De ese proceso nos ocuparemos en los siguientes capítulos de esta investigación.

## **Enfoque metodológico**

La presente investigación parte de la idea de que la etnografía se constituye como un método privilegiado para dar cuenta de los sentidos y representaciones puestos en juego por los actores sociales, ya que consiste en una mirada analítica que da por supuesta la diversidad de lo real y trata de aprehenderla a través de un análisis centrado en las perspectivas de los actores (Balbi; 2007, en Balbi y Boivin; 2008). Un enfoque preocupado por reconstruir la perspectiva nativa, interpretarla y presentarla en tanto una descripción unificada, no implica meramente la recopilación o descripción de datos de la realidad, sino que consiste en una operación analítica. En términos de Guber, la perspectiva del actor es una construcción teórica orientada por el investigador. (Guber, 2004). Este enfoque es a su vez el que permite hacer inteligible un conjunto de relaciones que aparecen fragmentadas y caóticas, y documentar lo no documentado de la realidad social (Rockwell 2009). Pero la finalidad no es algún tipo de “reconstrucción” de un punto de vista nativo, que nunca es uno sólo, sino contribuir a la explicación de los procesos sociales que nos interesa abordar, tomándolo como puerta de entrada.

El enfoque etnográfico resulta de especial utilidad para el trabajo sobre concepciones políticas y problemáticas de la propia sociedad a la que pertenece el investigador. *“La etnografía permite dotar de contenido a esas abstracciones imprecisas, polisémicas y ambiguas, que son los conceptos de ‘política’, ‘Estado’, ‘Gobierno’, etc. (...) permite dotarlos de múltiples sentidos que, además, no resultan*



*de la especulación teórico-normativa de quien escribe, sino del examen detallado de sus usos por parte de actores socialmente situados” (Balbi y Boivin; 2008).*

Debido a que la perspectiva de los actores -y los sentidos que éstos atribuyen a las categorías- son el centro de la investigación, fueron necesarios algunos recaudos epistemológicos para evitar confundirlos con mis propias valoraciones y conceptualizaciones.

*“Resulta indispensable apelar a los recaudos epistemológicos necesarios con el objetivo de evitar la confusión entre el modelo interpretativo del analista y el modelo nativo; cuestión que cobra especial relevancia cuando el objeto a ser analizado forma parte de la propia sociedad del etnógrafo. En ese caso el esfuerzo que debe realizar el antropólogo nativo para llevar a buen puerto su trabajo desnaturalizador, debe ser doble” (Zenobi, 2011).*

Esta alerta epistemológica cobra especial relevancia para el caso que analizaré, ya que la Dirección de Orientación a Víctimas, además de ser el referente empírico en el que baso mi ejercicio de investigación, es mi lugar de trabajo. Es por ello que, con mucha “prueba y error” este trabajo es un esfuerzo constante por intentar extrañarme de una cotidianeidad que me es muy familiar, y un ejercicio de eliminar muchos supuestos que traía auestas al inicio del trabajo de campo.

En este sentido, resultó prioritario para mi realizar una *ruptura epistemológica* (Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1968) con el sentido común. Para intentar comprender los procesos sociales, esos autores sugieren entonces analizar qué preconceptos encierra determinada categoría y complejizar las relaciones que operan en el campo que las rodea. En el presente escrito, esto resultó de gran utilidad, especialmente teniendo en cuenta las múltiples dimensiones de algunas de las categorías que atraviesan el trabajo de campo como *víctimas*, *política*, *compromiso*, entre otras. Un ejemplo de ello es la categoría de *interdisciplina*. Al comienzo de mi ejercicio de investigación, la valoración positiva que yo misma tenía como un a priori sobre el término, me impedía la posibilidad de entender qué otras nociones aparecían en los relatos y acciones de las propias profesionales. Fue

recién cuando logré romper con ese a priori analítico, que pude extrañarme del término y encontrar distintas valoraciones nativas en función del contexto en el que se utiliza. Como se verá, aparecen dos formas distintas de entender la *interdisciplina*, una valorada positivamente y la otra de forma negativa.

Siguiendo con el rol del investigador, es interesante recuperar la noción de “etnógrafo implicado” de Althabe y Hernandez (2005). Esto quiere decir, que, los investigadores a la hora de hacer trabajo de campo no somos invisibles, es falsa esa “*presencia-ausencia, un tanto fantasmática, que suponemos nos caracteriza una vez en el campo*” (Althabe, Hernandez, 2005, p. 82). Al contrario, una vez que comenzamos nuestra investigación estamos inmersos completamente en un “juego de reglas que desconocemos” y nuestros interlocutores nos imponen un rol, un lugar en su mundo y desde allí construimos nuestra orientación en la investigación. En mi caso, esa *implicación* transformó inevitablemente las relaciones con mis compañeras de trabajo, ya que pasé de ser una *trabajadora* de la Dirección a una trabajadora, próximamente profesional, que además analizaba su trabajo cotidiano, y las entrevistaba.

Por otra parte, considero que el haber encontrado en el camino nuevas discusiones y variables, haberme cuestionado, y poder analizar la propia práctica como profesional inmersa en el dispositivo desde el lado de la “etnografía” enriquecerá mis tareas allí y espero que, aunque sea desde mi pequeño lugar, sirva para seguir pensando los aportes de nuestra disciplina en ámbitos de gestión de las víctimas.

Finalmente, con respecto a los materiales que aportó aquí, además de las observaciones de campo, el presente trabajo de investigación combina por un lado de fuentes del derecho penal, como fallos, oficios, expedientes de causas, informes de gestión de la Dirección de Orientación a Víctimas, guías de actuación de UFEM y reglas internacionales sobre los derechos de las víctimas. Por otro, entrevistas a la Directora de la Dirección, la coordinadora del Programa Especial para la Atención a Víctimas de Violencia de género, y por último a profesionales de la Dirección de distintas disciplinas. Asimismo, incluyo conversaciones informales con profesionales y trabajadoras de los Programas Especiales, información producto de reuniones de equipo, supervisiones del Programa de Género y entrevistas y acompañamientos a

juicios con las víctimas. A la vez, inevitablemente, apporto un poco de condimento propio, ya que yo también estoy investida por un campo que habito todos los días dentro de un dispositivo en contacto con las víctimas.

Finalmente cabe mencionar aquí la estructura de la tesis. La misma está conformada por un primer capítulo donde se describirá la creación de la Dirección por parte de la Procuración General de la Nación como un organismo de “auxilio” a las fiscalías. Se verá cómo la creación de la Dirección fue, en palabras de su Directora, el resultado de una *decisión política* de otorgarle mayor relevancia a la víctima dentro del proceso penal y cómo esta “gran clasificación estatal” nos permite pensar en términos de “campo de víctimas” (Gatti, 2017). La experiencia de la vulnerabilidad como algo que no puede ser erradicado y la necesidad de reconocer a las víctimas desde los dispositivos estatales responden a una nueva “*semántica performativa*” (Martuccelli, 2017) en la que se impone la necesidad ética y política de atender a las víctimas y para ello asumir que todos los sujetos que han sufrido daños son vulnerables. Sin embargo, se observará cómo el dispositivo delimita quiénes son pasibles de ser atendidos y quiénes no. Por otro lado, se indagará en la composición del cuerpo profesional y en los valores atribuidos al trabajo interdisciplinario. Se observará qué nociones sobre la interdisciplina aparecen entre las funcionarias y las profesionales de Dirección relacionadas con el contexto en el que la utilizan –un dispositivo jurídico-penal-.

En el segundo capítulo, se tratarán las relaciones de tensión y negociación entre Dirección y las Fiscalías en cuanto a las expectativas de cada una en las causas penales. Como se verá, las profesionales se encuentran muchas veces atrapadas entre dos mandatos: por una parte la exigencia institucional de “auxiliar” a las Fiscalías y por otra, su compromiso con la erradicación de la violencia de género y la construcción de nuevos “proyectos de vida libres de violencia” que muchas veces no están asociados a la continuidad de la causa penal. Estos mandatos morales contrapuestos se recrudecen cuando la estrategia de las Fiscalías no se condice con la de las víctimas, pues en esos casos las profesionales de Dirección optan por realizar intervenciones *divorciadas* de las expectativas de las Fiscalías tomando posición por las víctimas. Para analizar esta contradicción se utilizará la idea de “crisis moral” propuesta por Gluckman. Según el autor, la crisis moral remite a

cuando “las personas son movidas por reglas sociales y valores diferentes pero igualmente estimados, hacia cursos de acción opuestos” (1972:25). Esto es así ya que al estar inmersas las profesionales en el contexto específico del dispositivo Dirección, están atravesadas por motivos y valores que influyen sobre ellas y su accionar, que en otro contexto podrían ser distintos.

Finalmente, en el tercer capítulo, se hará foco en el Programa Especial para las Víctimas de Violencia de Género: “*las chicas de la Dirección*” como “victimizadoras” profesionales (Barthe, 2018) en tanto certifican la condición de víctima a la vez que jerarquizan el sufrimiento padecido y valoran el riesgo y en ese camino se vuelven una “*voz autorizada*” para hablar el “*lenguaje de las víctimas*”. Asimismo, se indagará en las apreciaciones que aparecen entre las propias profesionales al respecto de la interdisciplina y en las tensiones y cooperaciones entre las trabajadoras y profesionales y los compromisos con la causa de la *erradicación de la violencia de género*. A su vez, se buscará entrecruzar una tipología sobre los compromisos de las profesionales en cuanto al feminismo, con las distintas ideas de víctima que movilizan las mismas en su accionar cotidiano. Para ello se analizarán informes elaborados por profesionales del Programa, oficios de casos en los que se ha intervenido y entrevistas con algunas de las protagonistas del Programa. Asimismo se utilizará la información de las Guías de actuación elaboradas por la Dirección e indagaré en el vínculo que mantiene el Programa con las Fiscalías. El recorte de un Programa en especial responde a una comodidad metodológica, para poder realizar un análisis más exhaustivo de las variables mencionadas anteriormente.



## Capítulo 1

### Creación de “la Dirección”

#### 1.1 La comisión: puesta en marcha de una *definición política*

La experiencia de la vulnerabilidad como algo que no podrá ser erradicado, asociado a su vez a la irrupción de las víctimas en la arena pública en nuestro país, impone un nuevo imaginario colectivo que subraya la necesidad de “cuidar”, “acompañar”, “reparar” los daños (Martuccelli, 2017) de las víctimas. Para acompañar a las víctimas, es preciso reconocerlas como tales desde los dispositivos estatales. Como veremos en los siguientes apartados, a partir de la evaluación de riesgos, las mediciones, y pericias psicológicas, se intentará reconocer a las víctimas como tales, aunque muchas veces estas mismas pueden impugnar esa condición. Se trata según Martuccelli de una nueva “semántica performativa” en la que se impone la necesidad, ética y política, de reparar y acompañar a las víctimas, y para ello asumir que potencialmente, todos los individuos, en cuanto sujetos, son vulnerables.

En este apartado se verán los antecedentes que llevaron a la constitución de la Dirección de Acompañamiento a Víctimas como un dispositivo que, como acabo de señalar, se propone la necesidad de “cuidar”, “acompañar”, “reparar a diversos tipos de víctimas. Para recolectar la información, se realizaron diferentes entrevistas con la actual titular del área, combinadas con un trabajo de análisis de la resolución de creación de la Dirección, como así también la carta orgánica del MPF.

La OFAVI (Oficina de Atención a Víctimas, también dependiente del MPF) es el antecedente más directo de la Dirección. Esta Oficina funcionó desde el año 1998 hasta el 2014 y funcionaba con un equipo general que atendía principalmente

delitos contra la integridad sexual tanto de niños, niñas y adolescentes como de adultos.

En el año 2014 se decidió evaluar el trabajo de la OFAVI. Se conformó una “Comisión para la elaboración de un diagnóstico acerca de la situación de atención a víctimas del delito” compuesta por el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, el doctor Alberto Binder, académico experto en la materia, el doctor Eugenio Freixas, titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI) y el doctor Ivan Polaco, secretario de la Secretaría de Coordinación Institucional del MPF. Asimismo formaban parte de esa comisión dos abogadas a quienes llamaré Analía y Laura –actuales encargadas de la institución a la que se dedica esta investigación-, que eran en ese momento secretarías de dicha Oficina.

El objetivo de dicha comisión era elaborar un diagnóstico de situación, que se logró a través de un proceso que involucró entrevistas con asociaciones que nuclean a víctimas y familiares de víctimas, y con instituciones públicas y privadas. En particular, se analizó el trabajo realizado por la OFAVI (Oficina de Atención a Víctimas, también dependiente del MPF) durante sus años de funcionamiento como antecedente. La tarea abarcó además, el relevamiento y determinación de la competencia y capacidad de intervención efectiva de los diferentes sistemas de atención implementados en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, la Defensoría General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y los Poderes Ejecutivos de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires<sup>9</sup>.

Se estudiaron algunos sistemas de atención y orientación a víctimas que ya se encontraban en funcionamiento dentro y fuera del país, y se obtuvo el aporte de las experiencias y las necesidades de los fiscales de diferentes instancias y fueros, las distintas Procuradurías, Unidades y Programas especiales del Ministerio Público Fiscal. El desarrollo del trabajo de la Comisión permitió extraer las siguientes conclusiones generales:

---

<sup>9</sup> Resolución PGN 1105/14

- Existe una amplia demanda proveniente de delitos que se investigan en el fuero ordinario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundamentalmente en torno a hechos ilícitos relacionados con violencia de género, intrafamiliar, doméstica y crímenes contra la integridad sexual de mayores, niñas, niños y adolescentes.
- Se observa poca federalización de las labores de asistencia a víctimas, por lo que se requiere una descentralización del sistema.
- Existen dispositivos ajenos al Ministerio Público Fiscal que asisten al inicio a la víctima, pero su acompañamiento se va diluyendo con el avance de la investigación.
- El asesoramiento e información general a las víctimas es limitado durante la investigación y juicio, y prácticamente inexistente en etapas de ejecución de la pena. Estas últimas circunstancias dejan en evidencia la necesidad de trabajar sobre los siguientes ejes temáticos:
  - (i) Implementar un dispositivo de trabajo en red que alcance a todo el Ministerio Público Fiscal y que brinde asistencia a todos/as los/as magistrados/as de este organismo para efectivizar, extender y generalizar el goce de los derechos de orientación e información de las víctimas y testigos desde su primer contacto con la institución y de manera sostenida a lo largo de todo el proceso;
  - (ii) Concentrar los esfuerzos para garantizar un abordaje intensivo y especializado frente a víctimas de ciertos grupos de fenómenos delictivos complejos que, por diferentes factores, quedan situadas en condiciones de máxima vulnerabilidad y desamparo. En este plano, resulta imprescindible levantar todas las barreras que en estos casos suelen entorpecer el acceso de las víctimas al sistema de justicia y aventar los riesgos de que su contacto con el proceso penal conlleve nuevas experiencias traumáticas. Ello, a la vez, alentará la participación de la víctima en el trámite judicial y facilitará la reducción de los índices de impunidad registrados en estos segmentos de la criminalidad compleja;
  - (iii) Descentralizar el funcionamiento de la estructura de atención, con bocas de acceso en todas las provincias en permanente diálogo



- con los/as fiscalías coordinadores/as de distrito, las Procuradurías y demás estructuras especiales de la PGN;
- (iv) Difundir y aplicar metodologías de tratamiento determinadas a partir de un enfoque interdisciplinario de los casos;
  - (v) Impulsar un plan de formación y capacitación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal encargados de interactuar con víctimas y testigos, y guiar la actividad de todas las dependencias a partir de la formulación de protocolos de actuación acordes a los rasgos comunes de los diferentes grupos de víctimas;
  - (vi) Procurar brindar espacios adecuados —a nivel edilicio— para atender a las víctimas y elevar la visibilidad del servicio;
  - (vii) Articular un circuito de coordinación institucional responsable ante requerimientos de víctimas que excedan la competencia específica y la capacidad de respuesta autónoma del Ministerio Público Fiscal.<sup>10</sup>

Luego de las mencionadas conclusiones se decidió la creación de una nueva área y se crea en 2014, mediante la Res N°1105/2014, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas. Esta dirección fue una de las tantas transformaciones que tuvo el Ministerio Público Fiscal entre el 2014 y el 2015, basadas en un diseño que pudiera adaptarse a lo estipulado por el entonces nuevo Código Procesal Penal Federal, diseñado para la implementación del sistema acusatorio mencionado en el apartado precedente.

La Dirección, según la Resolución mencionada y la Ley Orgánica del MPF se pensó como dispositivo orientado a potenciar el vínculo que el fiscal del caso debe mantener con la víctima. También se estipuló que en la elaboración del proyecto encomendado a la Comisión, intervengan todas las Procuradurías y Programas dedicados a los distintos fenómenos delictivos involucrados, con el propósito de que el trabajo se apoyara, con la mayor precisión posible, en las características concretas de cada tipo de victimización, las experiencias recogidas y las dificultades detectadas.

---

<sup>10</sup> Fuente: Res. 1105/14

Una de las funciones encomendadas al Procurador/a General de la Nación, tal como figura en el Capítulo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es la de diseñar la política criminal del organismo. Esto es, “Diseñar y fijar la política general del Ministerio Público Fiscal de la Nación y, en particular, la política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción penal pública.”<sup>11</sup> En ese marco, la creación de la Dirección tuvo que ver con una decisión en relación a la consolidación de un rol activo y amplio respecto de la protección y el acompañamiento de las personas que han sido víctimas de delitos. Ello pues el Ministerio Público Fiscal, además de procurar investigaciones eficientes y respetuosas del debido proceso, está obligado a atender la situación de las personas afectadas directamente por la comisión de ilícitos penales.

Así, la Res. PGN N° 1105/14 de creación de la Dirección explica que en su momento se habían adoptado una serie de decisiones de relevancia en materia de política criminal, orientadas a abordar con especificidad los ámbitos de criminalidad de mayor complejidad y trascendencia social. En ese sentido, mediante las Resoluciones PGN N° 914/12, 208/13, 455/13, 805/13, 1442/13 y 533/12 se crearon las Procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Combate de la Trata y la Explotación de Personas (PROTEX), de Violencia Institucional (PROCUVIN), de Crímenes contra la Humanidad y la Dirección de Políticas de Género. Estas Procuradurías especializadas en distintos temas intervienen al inicio de la causa penal colaborando con la investigación que realiza la Fiscalía, o muchas veces directamente se le deriva a las procuradurías la totalidad de la etapa de instrucción.<sup>12</sup>

Cada uno de estos ámbitos de criminalidad vuelve visible un tipo de problemática particular, definida tanto por las características de los hechos delictivos como por los padecimientos concretos de las personas afectadas. *“Es una firme convicción de la suscripta que, a la vez que se profundiza y especifica la política criminal para cada*

---

<sup>11</sup> Fuente: Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación. [https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2018/08/Ley\\_organica\\_2018.pdf](https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2018/08/Ley_organica_2018.pdf)

<sup>12</sup> La etapa de instrucción es la etapa inicial de la causa penal, donde se recolectan pruebas y se investiga para decidir si hay suficientes elementos como para avanzar o no.

*uno de estos fenómenos delictivos, se deben adoptar medidas de atención a las víctimas de estos hechos, que permitan brindar respuestas adecuadas y acordes con este tipo de delitos*<sup>13</sup> versa la Resolución de Creación de la Dirección, firmada por la entonces Procuradora, Alejandra Gils Carbó.

A esta determinación de construir una respuesta institucional que le de mayor relevancia a la víctima en el proceso penal, Laura, actual Directora de la Dirección e integrante de la Comisión mencionada, la denomina una *decisión política*. Según ella, la creación de la Dirección fue una consecuencia de la definición de la entonces Procuradora General de la Nación, de darle mayor entidad a la víctima en la justicia penal, y de conjugar la estrategia de las fiscalías y la “*teoría del caso*,”<sup>14</sup> con los intereses de la víctima y la reparación de los derechos afectados.

Es interesante pensar qué sentidos le da Laura a la categoría de “decisión política”. Un ensayo podría ser pensar además de lo expuesto, que esta decisión es “política” porque se enmarca en un posicionamiento determinado con respecto a las discusiones que se venían dando en las últimas décadas acerca de cuál es el mejor sistema de justicia. ¿Había que buscar eficiencia? ¿Respetar el debido proceso? ¿Sostener un sistema que en sí mismo encierra una mirada punitivista del delito? ¿Qué consecuencias tendría para la población penitenciaria? ¿Qué derechos se ponderan: los de las víctimas o los del imputado? ¿Esos derechos son necesariamente contrapuestos y el Estado debe tomar partido? ¿La confiscación del delito implicaba que la víctima no formara parte del proceso penal más que como testigo o su cuerpo como prueba del delito? Estas preguntas eran algunas de las que desde el comienzo del milenio atravesaban las discusiones sobre el sistema inquisitivo vérsus el acusatorio en el derecho penal. (Binder, 2000, 2014; Griffiths, 2014; Alvarado Velloso, 2002, Rua 2009).

Así, esta decisión se da en consonancia con un proceso que recorría toda la región en la que los Estados estaban pensando institucionalmente cómo poner el foco

---

<sup>13</sup> Fuente: Resolución creación de la Dirección.

<sup>14</sup> Se denomina “Teoría del Caso” al relato que construye cada parte -fiscalía por un lado, y defensa por el otro- sobre lo que sucedió en el hecho que está siendo investigado. Está fundamentada con las pruebas que fueron recolectando, jurisprudencia anterior y otros elementos del orden de lo jurídico. El objetivo de cada parte será en definitiva “convencer” a los jueces de que su teoría es la cierta.

respecto a lo que le pasaba a la víctima en el proceso penal. Todos los países latinoamericanos -menos Argentina y Uruguay- ya contaban con un sistema acusatorio habiendo dejado atrás el inquisitivo. El sistema acusatorio tiene casi por exclusión a la víctima como protagonista y, en gran medida eso toma forma con la oralidad y la inmediatez. *“No es lo mismo salir a buscar una víctima y no encontrarla e igual continuar con el proceso penal, o presentar un informe sobre cómo está, que citarla un día a una audiencia y que la víctima “desembuche” todo lo que cambió su vida a partir del delito y la afectación que tuvo”* explicaba Laura.

Por otro lado, a nivel nacional la mayoría de las provincias ya tenía un sistema acusatorio en sus justicias locales o proyectos pilotos para implementarlo. Esto confirmaba que la única desacompasada era la Justicia Federal -aún con el inquisitivo-, que quedaba por fuera de un sistema de justicia que tenía a la víctima en un lugar de mayor protagonismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión tuvo como propósito dar forma a esa *“decisión política”* definiendo qué agendas se trabajarían y cómo se haría, siempre teniendo como norte el sistema acusatorio. Al ser una comisión del Estado encomendada a caracterizar la situación de las víctimas en el proceso penal y a la vez a delinear institucionalmente cómo debería ser la Dirección de Orientación a Víctimas a crear, se pensó desde la óptica de las políticas públicas. Lo primero que se tuvo en cuenta, comentaba Laura, fue no superponerse con organismos ya existentes.

Las agendas de trabajo se pensaron a través de entrevistas con grupos de víctimas pero también con actores del Estado que venían trabajando respecto de cuáles eran los delitos que había que atender. Asimismo se trabajó con distintos operadores judiciales: fiscales de instrucción, de juicio, de procuradurías que para ese entonces ya existían (PROTEX, Lesa Humanidad, Apropiación, UFISEX, PROCUVIN). Por último, con todas las oficinas que tenían la agenda de víctimas en el Poder Ejecutivo a nivel municipal y provincial relevando qué instituciones había, y sobre todo dialogando con las áreas del Ejecutivo de CABA porque allí reside la territorialidad con la que trabajaría la Dirección, exceptuando los delitos federales.

A partir de ese trabajo conjugado entre instituciones, informes de las Procuradurías Especializadas en determinados delitos y el trabajo que ya había realizado la Oficina de Atención a las Víctimas (OFAVI), la antecesora de Dirección, se dirimieron los cuatro grandes grupos de víctimas. Por un lado, se decidió no trabajar por delito sino por grupos de víctimas. Esto según Laura, fue un gran acierto, ya que como los delitos están tipificados de una manera muy específica, esto hubiera restringido mucho los casos que ingresarían a la Dirección. En cambio, trabajar por grupos de víctimas ampliaba el universo de acción de esta nueva Dirección que pretendía instalarse en el mundo jurídico.

En ese sentido, por ejemplo, se podía trabajar con Trata y Explotación y no necesitaban que se dirima el delito para acompañar a la persona en una situación que podía ser ambigua o que a medida que avanza la investigación se termina de tipificar. Asimismo, si la persona que llegaba a la Dirección no se reconocía como víctima de trata sino como trabajadora sexual, se la podía seguir acompañando, orientando la intervención hacia la explotación laboral, más allá de cómo terminara tipificada la causa penal.

De igual forma se pensó el trabajo con violencia de género, donde no se ceñía sólo a femicidios, tentativa de femicidios o abusos sexuales -los delitos con mayor pena- sino que se definió acompañar además casos de violencia intrafamiliar y lesiones, hasta incluso atender a aquellas personas que todavía no habían realizado la denuncia, y por ende, no tenían un delito ya tipificado. Siempre y cuando, el denominador común fuera la violencia con motivo de género.

Con la agenda de niñez sucedió algo similar: decidieron no trabajar por tipo de delito, sino transversalmente dividiendo las intervenciones de las profesionales por edades: primera infancia, niñez y adolescencia. Por otro lado, se definió trabajar con violencia policial y no institucional, porque el relevamiento que se hizo a partir de la Comisión mostraba que ya había mucho trabajo sobre la violencia intramuros, mayormente a partir de lo realizado por la Defensoría General de la Nación donde había áreas específicas que abordaban el tema. Mientras tanto, desde la Comisión observaron que la violencia policial, -específicamente con los delitos de apremio, cohecho, mal desempeño- muchas veces no se investigaba o las causas no

avanzaban y las víctimas quedaban invisibilizadas, lo mismo sucedía con el armado de causas por parte de las fuerzas policiales. Había entonces muchas situaciones que quedaban sin acompañar y por eso se definió poner el foco allí. Al respecto de cómo fueron orientando y definiendo las áreas de trabajo, Laura explica:

*“Todo eso nos lo dio el informe con actores claves: desde quienes reciben a las víctimas en las instituciones hasta grupos de esas víctimas, más o menos organizados. Así fue como se fue definiendo el objeto de trabajo de la dirección.” (Entrevista a Laura, mayo 2020)*

Todas estas características fueron modificándose, ampliándose o mutando a través de la práctica. Un ejemplo de ello fue que algunos de los delitos contenidos en esos grupos de víctimas cambiaron de fueros y de jurisdicciones, como es el caso de maltrato infantil y lesiones por violencia de género, que ambos migraron al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la justicia de CABA. Asimismo con el tiempo algunos “tipos de víctimas” que antes acompañaba un Programa Especial luego pasaron a otro, como algunos casos de abuso sexual de larga data -personas adultas que fueron abusadas cuando eran menores de edad-, que en los inicios de la Dirección eran casos de Niñez y en la actualidad pasaron a ser abordados por el Programa de Violencia de Género. A lo largo de los años, en definitiva, ocurrieron numerosas transformaciones al interior de la Dirección producto del andar, de su relación con las Fiscalías y de la modificación en términos de su trabajo interdisciplinar.

A partir de todo lo mencionado, la Comisión entonces, en función del diagnóstico realizado y con el fin de poner en práctica estos lineamientos de trabajo, definió la creación, en el ámbito de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas, a cargo de un/a Director/a que conduciría tres ámbitos de trabajo: a) un Área de Información y Orientación a Víctimas, destinada a trabajar en la guía e información general del universo total de víctimas que se hallara en contacto con las dependencias del Ministerio Público Fiscal, b) cuatro Programas Especiales, abocados a las labores vinculadas con grupos de víctimas

especialmente vulnerables y c) la Secretaría Ejecutiva, que actuaría como área de apoyo de la Dirección.

Pareciera entonces que, retomando las ideas expuestas por Martuccelli, lo que Laura denomina una *decisión política* tiene que ver justamente con una nueva “semántica performativa” pensada desde los dispositivos estatales-jurídicos en la que se intenta otorgar un sentido ético y una función política a la vulnerabilidad. Esta *decisión política*, tal como se ve en el diagnóstico de la Comisión y lo resaltado por la directora, respondería a un compromiso ético y moral de atender a los grupos vulnerables como misión primordial.

Esta “experiencia de la vulnerabilidad” primero se toma como algo que existe y es imposible de erradicar, y luego se elaboran respuestas posibles para atender a aquellas personas afectadas en pos de paliar la injusticia que acarrea. En esta nueva semántica performativa, la vulnerabilidad se “humaniza” y se la percibe desde la experiencia y a escala de las víctimas (Martuccelli, 2017).

En la óptica de sus protagonistas, el paso del inquisitivo al acusatorio, y con ello, la creación de la Dirección sugiere un nuevo rol para las víctimas en el que la exposición de su sufrimiento es un valor en sí mismo. La escena de una víctima declarando en un juicio oral a partir de la instalación del sistema acusatorio, sugiere que la movilización de sus emociones, la exposición de su vulnerabilidad y utilización de su cuerpo como instrumento de reivindicación (Fassin, 2016) las favorecerá a la hora de constituirse como víctimas.

Para finalizar, la vulnerabilidad entonces aparece como denominador común de todos los Programas especiales, y a priori pareciera ser aquello que justifica el aglutinar víctimas de delitos tan distintos en un mismo dispositivo. A continuación se verá en profundidad cómo se organiza la Dirección internamente en función de los programas especiales y sus víctimas específicas.

## **1.2 Organización interna: ¿Campo de víctimas?**

Al intentar entender cómo un dispositivo jurídico-estatal piensa y nuclea a las víctimas, el aglutinamiento de tipos de víctimas tan distintos en una misma dirección, provoca pensar en si el Estado concibe a las víctimas como parte de un todo en donde las especificidades de cada caso no importan tanto como el hecho de haber sufrido un daño. ¿El Estado debe asistir y contener a todos los tipos de víctimas? ¿Hay jerarquías en relación a quiénes son más importantes y quiénes no? ¿Cómo se construyen estos criterios?

Para ello, en esta sección se verá, a partir de cómo están conformados los programas internos de la Dirección de Orientación a Víctimas, cuáles son las víctimas reconocidas como tales y por ende las que son asistidas.

A raíz del diagnóstico realizado por la Comisión y con el fin de poner en práctica sus lineamientos de trabajo, se definió la creación de la Dirección, compuesta por las áreas mencionadas en el apartado anterior. Con el entonces creado Programa Integral, quedaron conformados los cinco programas que existen al día de la fecha: Trata y Explotación, Maltrato y Abuso Sexual Infantil, Violencia de Género, Violencia Policial y el Programa integral.

Esta organización dentro de la Dirección nos habla de una gran clasificación estatal nucleada en la figura de “la víctima de delitos” que responde a una moral relacionada con el daño que debe ser reparado (Fassin, 2014), donde conviven víctimas de distinto tipo de delitos: desde secuestros extorsivos, hasta abuso sexual infantil y femicidios.\_A partir de ello aparece la pregunta sobre si el Estado está aportando en cuanto a sus políticas públicas destinadas a reparar el daño, a la construcción de un “campo de víctimas”(Gatti y Martinez, 2017) para lo cual es central indagar no sólo en cómo los dispositivos estatales identifican, clasifican y jerarquizan los casos (Pita y Pereyra, 2020) y por ende los tipos de víctima. La idea de campo en principio, supone pensar en tensiones, lucha, pugna por el sentido dentro del propio “mundo” de quienes se identifican como víctimas. A priori, esta gran clasificación de “víctimas de delitos” nos habla del Estado como un constructor de relaciones y diferencias entre víctimas.



Al consultarle a Laura por esta gran clasificación de “víctimas de delitos” y por qué puede una Dirección contener tipos de víctima tan distintos, explica que dicho diseño tuvo que ver con un requerimiento institucional relacionado con que en las fiscalías se reciben todo tipo de delitos, desde una estafa, a un abuso a un niño, a un femicidio, y como su Ley Orgánica lo determina, la Dirección es un auxiliar de las Fiscalías. Según ella, la creación de los Programas Especiales de Dirección respondió además a una decisión institucional de que dialogaran con las Procuradurías especializadas que se estaban creando, producto de los cambios en el MPF de aquel entonces. Así, Niñez dialogaba con Ufisex, Policial con Procuvin, Trata con Protex, y Género con la entonces Dirección de Políticas de Género que después se transformó en Ufem. Esa definición respecto de la especificidad y qué tipos de víctimas abarcar tuvo que ver según ella con un proceso mucho más integral en términos de diseño de política institucional del MPF.

Es interesante observar en la respuesta de Laura, cómo el aglutinamiento de distinto tipo de víctimas pareciera estar relacionado únicamente con un pedido institucional, con las jurisdicciones correspondientes y con el vínculo con las Procuradurías especializadas. Sin embargo, vemos que en el trabajo cotidiano de las profesionales, en el que se ahondará en profundidad en los próximos capítulos, hay una especie de jerarquización o ranking propio de aquellas víctimas que son pasibles de ser atendidas por la Dirección, en especial, aquellas que según el propio dispositivo son consideradas *vulnerables socialmente*. Esta idea de vulnerabilidad es la que podría cohesionar el “mundo de víctimas” que atiende la Dirección.

Rastreando los objetivos, funciones, diagnóstico de la Comisión y la resolución de creación de la Dirección, aparece en efecto este denominador común: la *vulnerabilidad* de las personas afectadas. Esto quiere decir, como fue mencionado en el apartado anterior, que no son todas las víctimas de delitos pasibles de ser asistidas por la Dirección, sino que hay una especial atención a aquellas que presentan algún tipo de vulneración. Asimismo podríamos identificar una noción nativa sobre la vulnerabilidad. Al respecto, Laura comenta:

*“Yo asocio vulnerabilidad siempre con clase pero son grupos vulnerados en general por clase, raza, género. Las Reglas de Brasilia lo nombran, la nueva Ley de Víctimas habla de la especificidad de*

*determinados grupos y no tanto de la situación económica, pero eso después repercute necesariamente". (Entrevista a Laura, mayo 2020)*

La categoría de vulnerabilidad está delimitada por la identificación de cierta fragilidad en la figura de la víctima: mujer, niño, anciano (Sarti, 2009) -a la que hoy podríamos agregar identidad diversa, colectivos travestis-trans-. La tendencia es reconocer en la figura de la víctima a alguien que pueda sufrir el acto violento, por corresponder a un lugar definido de antemano como de vulnerabilidad, como el caso de la violencia sexual (Suárez et al, 1995). Esta cristalización de la idea de vulnerabilidad como una característica constitutiva de la identidad, hace que su contrapartida sea que otros grupos sociales o sectores sociales no sean reconocidos como vulnerables y por lo tanto, pasibles de recibir asistencia del Estado. Un ejemplo de ello son los varones (Sarti, 2009) o incluso las mujeres de estratos sociales altos. Esto se ve en la clara diferenciación que realiza Laura en relación a las mujeres de las "elites argentinas".

*"Empezamos a pensar en trabajar las violencias de géneros en las elites argentinas por fuera de los estereotipos de vulneración, que es algo que a Dirección no llega. Para mí al momento de hablar de grupos vulnerados hablas de clase, y cuando hablas de clase hablas de la necesidad de un Estado más presente a priori". (Entrevista a Laura, mayo 2020)*

La vulnerabilidad se construye de diferentes maneras, a veces entendida como un atributo individual relacionado con la incapacidad "natural" de discernimiento/racionalidad, a veces como una categoría relacional que evoca las nociones de asimetría o desigualdad de poder, articulada a la imposibilidad de ofrecer resistencia, y a veces como una construcción moral asociada al ideal de pasividad e inocencia en oposición a las ideas de agencia, responsabilidad y culpa (Lowenkron, 2015)

A la vez que se jerarquizan aquellas víctimas vulnerables socialmente de las que no, se identifica otra jerarquización al interior de los propios Programas que podríamos pensar, responden a las tensiones que proponen Gatti y Martínez en relación a los

estatus de víctima. Según los autores, las distinciones entre víctimas dentro de su campo no se localizan en la causa que las convierte en tales, ni en el sufrimiento padecido, sino en los “grados de reconocimiento social”. En este caso, producto del contexto social y político y de la ebullición del feminismo como causa pública, las víctimas de violencia de género podrían calificar de “víctimas referentes” o incluso “dueñas del campo” (Gatti, Martínez, 2017) no solo en la Dirección sino en términos de políticas públicas en todos los niveles<sup>15</sup>. Asimismo, si bien no se trabajan en la Dirección, las víctimas de terrorismo de estado en la Argentina podrían compartir el podio como “dueñas del campo” o “víctimas legítimas” en tanto han sido incorporadas y consagradas como víctimas por el Estado, que al hacerlo asume la responsabilidad por su sufrimiento (Zenobi, 2020).

Al comienzo de este apartado nos preguntamos si el Estado, en la construcción de dispositivos de atención a víctimas, está colaborando a la creación de lo que podríamos pensar como un “campo de víctimas”. Según los autores mencionados, es posible hablar de campo ya que al interior existen tensiones y disputas alrededor de su reconocimiento como víctimas, las conquistas en términos de derechos y las jerarquías entre las mismas. A su vez, porque el elemento común a todas ellas es el sufrimiento. Se construye así una “*narrativa del sufrimiento*” (Gatti, Martínez, 2017) en la que todo aquel que sufre es susceptible de ser reconocido como víctima, y en donde confluyen y se movilizan diversos conceptos que las atraviesan: dolor, sufrimiento, contención, asistencia.

Sin embargo, al interrogante propuesto podríamos contestar con otra pregunta: ¿Qué tipo de víctima formaría parte de ese campo construido? Porque, contrario a lo que proponen los autores, pareciera que el denominador común del *sufrimiento* no es suficiente para que el Estado asista a esas personas. Habría que sumar una variable que atraviesa indefectiblemente tanto los protocolos, como en las entrevistas con las directoras y coordinadoras: la vulnerabilidad. En este caso, la Dirección circunscribe su asistencia y jerarquiza a aquellas víctimas con especial vulneración, en palabras de Laura: “*de clase, de raza, de géneros*”. Asimismo dentro

---

<sup>15</sup> Para ilustrar ello, en 2019 se creó por primera vez un Ministerio de Mujeres y Diversidades cuya agenda se ocupa en gran parte de generar políticas públicas para prevenir y paliar la violencia de género. Un ejemplo es el Programa “Acompañar” que se trata de un subsidio por seis meses para mujeres y disidencias en situación de violencia.

de este recorte de víctimas pasibles de ser atendidas por la Dirección, entre los programas, aparecen jerarquías vinculadas a las víctimas más importantes o “dueñas del campo” (Gatti, Martínez 2017) que son aquellas víctimas de violencia de género. Sería interesante ver en un futuro trabajo, cuáles son los agentes que contribuyen a esa jerarquización, pues como ya se dijo, no se trata de una priorización aislada en la Dirección sino que está legitimada socialmente y dentro del propio poder judicial.

La experiencia de la vulnerabilidad como algo que no puede ser erradicado y la necesidad de reconocer a las víctimas desde los dispositivos estatales responden a una nueva “*semántica performativa*” (Martuccelli, 2017) en la que se impone la necesidad ética y política de atender a las víctimas y para ello asumir que todos los sujetos que han sufrido daños son vulnerables. Sin embargo, se observa cómo el dispositivo delimita quiénes son pasibles de ser atendidos y quiénes no. Como hemos visto, la experiencia del *sufrimiento* no es suficiente para que el Estado asista a esas personas y a su vez, aparece una idea nativa sobre la *vulnerabilidad* que dista de considerar a todos los sujetos que han sufrido delitos como tales.

Aparecen allí dos grandes ideas en relación al sufrimiento: por un lado, una especie de “ranking” de lo padecido y, por otro lado una especie de descarte como Oficina del Estado de lo que no entra dentro de sus parámetros de la vulnerabilidad. Esto nos hace pensar en la idea de “Estado protector”: ¿A qué tipo de víctimas debería destinar el Estado su asistencia, protección y presupuesto? Esta *vulnerabilidad* es la que justificaría esa “gran clasificación estatal” de víctimas de distinto tipo en una misma Dirección. Es decir, el denominador común que atraviesa a todos los Programas y permite pensar en términos de “campo” o “mundo de víctimas” (Gatti, Martínez, 2017).

### **1.3 La interdisciplina como valor**

Como ya se mencionó, la antecesora de la Dirección de Orientación a Víctimas fue la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI), dependiente del

Ministerio Público Fiscal, que fue creada por Res N° 58/98<sup>16</sup> del Procurador General de la Nación, y funcionó desde el 8 de septiembre de 1998 hasta el 2014. Asistía a víctimas de toda clase de delitos, tomando como punto de partida la idea de que el éxito de la persecución penal no necesariamente agota el interés o la necesidad de los damnificados, cuando son los ciudadanos más *vulnerables socialmente*, aquellos que ostentan la mayor representatividad entre las víctimas.

Los trabajadores que integraban la Oficina eran profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social. Las funciones previstas en la resolución de su creación eran la de asesorar jurídicamente a la víctima de un delito sobre sus posibilidades de asistencia estatal, en particular a aquellas víctimas de menores recursos. Asimismo, acompañar a aquellas víctimas de delitos que presentaran cuadros sociales especialmente complicados a efectos de guiar a estas personas en los mecanismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial.

Por otro lado, se le encomendaba realizar estudios criminológicos que descubrieran sectores sociales con especial riesgo de ser victimizados, realizar sugerencias a los organismos competentes a efectos de disminuir esta situación de vulnerabilidad y desarrollar propuestas de estrategias que aumenten los índices de eficiencia en las tareas de investigación penal que tienen a su cargo los fiscales. Asimismo desarrollar campañas de comunicación social a efectos de informar de manera eficiente a la comunidad sobre cuáles son los caminos para acceder al Ministerio Público Fiscal y organizar los vínculos administrativos y jurídicos necesarios para el logro de una adecuada optimización de los servicios que determinadas ONGs prestan a ciudadanos que sufren las consecuencias del delito. Por último, también era de su competencia realizar tareas de coordinación de actividades con otras oficinas que expresen cometidos similares.<sup>17</sup>

Retomando el eje (i) de las conclusiones elaboradas por la Comisión, se comprende que con la creación de la Dirección se esperó que la interdisciplina vertebrase el trabajo con víctimas y se extendiera hacia todos los magistrados en forma de “red”. La

---

<sup>16</sup> <https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/1998/>

<sup>17</sup> <https://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/wp-content/uploads/sites/9/2014/06/PGN-1105-2014-001.pdf>

decisión de crear una oficina de víctimas con una entidad mayor a la que ya existía tuvo que ver entonces, según cuenta Laura, con corregir algunas de las cuestiones que la nueva gestión de la Procuración veía como *falencias* en el tratamiento a víctimas dentro del propio Ministerio Público Fiscal y lógicamente, de la propia OFAVI.

Según Laura, y las charlas informales que mantuve entre las trabajadoras de la Dirección que habían llegado a trabajar en OFAVi, la organización en cuanto al abordaje de los casos era totalmente compartimentada según la disciplina, a la vez que individualizante en los acompañamientos. Sólo las psicólogas podían tomar entrevistas con las víctimas, mientras que sólo las abogadas podían certificar causas<sup>18</sup>, a la vez que las trabajadoras sociales sólo estaban autorizadas a coordinar con dispositivos estatales para conseguir distintos tipos de subsidios para aquellas víctimas que lo necesitaran.

Era muy difícil para una profesional pensar un caso globalmente sin tener la información completa, o tenerla mediada por otra compañera, cuentan. La dinámica que se daba era casi un “pase de data” *“porque no podes repreguntar, porque no podes dar tu opinión, y ahí es donde el ida y vuelta con el operador judicial, la palabra, la persuasión, el análisis, la valoración, empieza a tomar forma. Eso en la Dirección ocurrió del momento 0.”* comenta Laura.

A este parcelamiento disciplinar que las propias informantes valoran como algo negativo, pareciera que le oponen un modo “interdisciplinario” deseable. Es interesante analizar la categoría de *interdisciplinariedad* como una categoría nativa a desnaturalizar, y no como un concepto analítico a priori, ya que eso permite analizar el proceso en función del significado que las propias protagonistas le atribuyen, y no como una categoría autoevidente (Zenobi, 2011). Esto quiere decir, que para indagar en lo que significan estas *falencias* a corregir, en el paso de OFAVI a la Dirección, es importante tener en cuenta el significado del término “*interdisciplinario*” a la luz del contexto en el cual lo sitúan (Pitt-Rivers, 1973).

---

<sup>18</sup> “Certificar” en lenguaje jurídico significa conocer el estado de la causa (en qué etapa procesal se encuentra, si hubo avances o novedades, si hay alguna fecha relevante, etc.)

La creación de la Dirección entonces, fue según Laura una oportunidad de modificar, a partir del trabajo interdisciplinario, esas *“malas prácticas”* y aportar algo distinto a la justicia. Esto es, para ella, algo que aporte a la investigación. *“Qué le importa a un fiscal o qué le importa a una víctima es prueba que sirve para investigar, para dar cuenta del relato que se hizo en la denuncia. Sobre todo en la etapa de instrucción”*

El modelo de interdisciplinariedad que se planteó desde el vamos en la Dirección, no obstante, aclara Laura, no implica que haya casos en los que amerite que una disciplina tenga más protagonismo que otras, pero la diferencia es que eso lo delimitarán las características del propio caso y no la institución de antemano.

Esto, considera, también es poner en valor el trabajo de cada disciplina.

*“Por ejemplo si vos tenés una persona que llega a la Dirección con 3 tentativas de suicidio y en una situación de 15 años de violencia de género, claramente una psicóloga tiene que haber en esa escucha. O llega una mujer en situación de calle con un caso de violencia de género con un hijo de 3 años, Bueno ahí hay que darle protagonismo a una trabajadora social, porque hay un saber en ese abordaje que te lo trae la disciplina. Eso no quiere decir que lo lleve sola, o que no pueda cambiar. Por eso digo que es una interdisciplina mutante”* (Entrevista a Laura, mayo 2020).

Si bien la organización y distribución de casos entre las profesionales depende de cada Programa, hay una tendencia general en toda la Dirección en relación a que más de una profesional intervenga en cada caso. Dependiendo de la organización interna de cada Programa Especial, la distribución puede ser por un criterio de complemento disciplinar, por la especialización y el interés de cada profesional según el tipo de caso, o hasta por una cuestión etárea, como es el caso de niñez.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> La distribución y los criterios de asignación de casos a profesionales se verá con mayor detalle en el capítulo 3, donde se analizará particularmente el caso del Programa Especial para Víctimas de Violencia de Género.

El hecho de que en cada caso intervenga más de una profesional tiene que ver también, según la Coordinadora del Programa Especial para las Víctimas de Violencia de Género (en adelante CP), con *corregir* una lógica heredada de la compartimentación disciplinar e individualización, que a su vez favorecía la idea de “posesión” de cada caso: *“Mi caso”*. En general hay una profesional que lidera -determinada por la Coordinadora del Programa- o a veces, cuando se trata de casos particularmente complejos, también puede asignarlo la Coordinación General o incluso la Dirección.

Sin embargo, a lo “indeseable” de la compartimentación disciplinar, según las profesionales de los equipos -que rememoran la experiencia en OFAVI como fallida en relación a la puesta en práctica del trabajo interdisciplinario- se le suma su contraparte que es el *“aplanamiento”*. Esto, según la CP, es otro de los riesgos del trabajo interdisciplinario, y se refiere a que cuando *“todas hacen todo”* se termina muchas veces perdiendo la especificidad. Particularmente, ella observa una identificación o un aplanamiento más tendiente a la psicología que a las otras disciplinas: *“Todos nos creemos psicólogos”*.

Resulta interesante detenerse en esta cuestión, en función de los relatos de Laura y de la CP. Pareciera que dentro de la Dirección hay expectativas en relación a la función del propio dispositivo en que no solamente se pongan en valor las disciplinas alternativas al derecho -la hegemónica- dentro del poder judicial porque están asociadas a un “mejor” acompañamiento a la víctima (sus deseos en relación a la causa, darle información, derivarla responsablemente), sino porque hay una creencia en que esas profesiones pueden aportar a la *teoría del caso*.

Esto lo veo por ejemplo, en que por un lado Laura habla de un cambio entre lo que se pretendía de OFAVI y cómo fueron mejorando las intervenciones en la Dirección de Orientación a Víctimas -en relación a que no se redujera sólo a informes sino a pensar un “litigio estratégico” desde las distintas disciplinas-, al mismo tiempo que la CP sugiere la posibilidad de que en vez de un auxiliar fiscal para la etapa de investigación haya un auxiliar psicólogo; pero a la vez siguen codificando la intervención pensando en las reglas de lo pretendido por la justicia. La CP, cuya disciplina es la psicología, lo dice muy claramente, hablando del *aplanamiento*: “Yo



*tiendo a ser más judicial que psicóloga. Por ahí algo de eso me llevó a la coordinación tal vez, porque para mí es la visión más macro y la de la causa. Yo no puedo dejar de dialogar con eso.”*

Hay una especie de ambigüedad en relación a la jerarquización de las disciplinas - psicología y trabajo social- para construir prueba, relato de la víctima, litigio estratégico y a la vez que la mirada jurídica es la que te da la película general y te permite entender cómo debe ser una intervención estratégica. Creo que esos sentidos están en pugna. A partir de ello surgen algunos interrogantes: ¿La intervención es estratégica para quién? ¿En función de qué intereses? ¿Existe una contradicción entre las expectativas del dispositivo, la de las fiscalías y la de las víctimas? ¿Necesariamente en la práctica la expectativa de la víctima -o la que las trabajadoras de los dispositivos creen que es la expectativa de la víctima- va de la mano de las expectativas de las fiscalías y la justicia?<sup>20</sup>.

A partir de esto, aparecen las tensiones entre el tipo de dispositivo jurídico-penal y el tipo de saber –“psi” y del trabajo social- que se materializa en las tensiones entre las distintas disciplinas, a través de una jerarquización donde la abogacía –profesión hegemónica dentro del campo jurídico- no solo corría ventaja en los inicios de la OFAVI por ser justamente la disciplina que estructura la mayor parte del poder judicial, sino que se consideraba que las demás disciplinas solo jugaban un rol secundario porque no podían aportar a la teoría del caso, o elementos probatorios a las causas. Así, el modus operandi dentro de OFAVI, era que las fiscalías le pidan a las psicólogas y las trabajadoras sociales informes estereotipados sobre las víctimas, y pedir que la oficina intervenga en cualquier caso, sin analizarlo en profundidad sino para “sacarse a la víctima de encima”.

Tanto la CP como Laura ponen énfasis en la cuestión de los aportes de la Dirección a la teoría del caso de las fiscalías. Ambas ponen ejemplos en los que gracias al trabajo interdisciplinario se pudo explicar una retractación, se pudo mostrar rastros de ese “trauma”, donde gracias a informes se pudo dar cuenta de una situación de violencia que no se había registrado, entre otras. La Dirección hoy es, en ese

---

<sup>20</sup> Algunos de estos interrogantes se retomarán en el siguiente capítulo

sentido una “voz autorizada” como dispositivo certificante de la condición de víctima, a la vez que, a partir de las acciones de estas profesionales -acompañamientos, oficios, informes, certificados- las personas que han sufrido daños pueden llegar a ver objetivada su condición (Fassin y d' Halluin, 2005). A su vez, pareciera que esa “voz autorizada” es en función sobre todo, del orden de los aportes de lo PSI, desde donde construyen modos de establecer el carácter real y no dudoso de la condición de víctima, con elementos verificables a partir de la intervención de las profesionales que arman el diagnóstico (Fassin y Rechtman, 2009, Fassin, 2016).

Al respecto, comenta la CP:

*“Esos son los aportes y por eso digo que ahí tienen que ser específicos, a veces de psicólogos y a veces también de trabajadores sociales. En general, tengo que remarcar que no sé por qué pero tiende a ser... Todavía la prueba se basa mucho en el impacto psicológico o en la prueba pericial, todavía se sigue poniendo énfasis en eso. Para explicar una retractación, para explicar una no continuidad, siempre se buscan aspectos psicológicos, que también pueden ser sociales” (Entrevista a la CP, julio 2020).*

Pareciera a partir de lo analizado, que el valor de la interdisciplina para ellas tiene que ver con legitimar las intervenciones y darle un sentido y un valor a la Dirección. ¿Qué es lo que diferencia a la Dirección del resto de las procuradurías, y oficinas que abordan la cuestión de la víctima? Una de ellas, sin dudas, es que en sus intervenciones hay profesionales del derecho, de la psicología y del trabajo social, que son específicamente las que busca la Dirección a la hora de cubrir su planta. Y a su vez, estas tres disciplinas son las que están legitimadas dentro del poder judicial, aunque no sea necesariamente a partir de la intervención de la Dirección (como se verá en el siguiente apartado). Es posible, en ese sentido, “traducir” un acompañamiento, hablar el mismo lenguaje, pero sólo a través de los aportes de estas disciplinas que están valoradas dentro del campo jurídico. Podríamos pensar entonces, que para las protagonistas, la *interdisciplina* es una manera de intentar fortalecerse como una “voz autorizada” en términos del acompañamiento a víctimas en el proceso penal.

A priori, podría pensarse que la interdisciplina en una oficina de atención a víctimas se valoraría positivamente porque el trabajo coordinado de distintas disciplinas permitiría un abordaje integral en el acompañamiento a quienes han padecido violencia. Sin embargo, a partir de lo expuesto, vemos que aparece otra noción propiamente nativa acerca de la *interdisciplina* relacionada con el contexto del dispositivo jurídico-penal en el que desarrollan sus funciones. La idea de movilizar las disciplinas para aportar a la “teoría del caso”, es decir, a la construcción de pruebas que sirvan para el desarrollo de la causa penal (confección de informes psicológicos, valoraciones sobre las pericias, informes socio-económicos, entre otros) en la que intervienen, es una forma novedosa de entender positivamente a la interdisciplina que se da particularmente en el contexto de un dispositivo dentro del campo jurídico.

Indagando en el funcionamiento interno de la Dirección, se observa qué nociones sobre la interdisciplina aparecen entre las funcionarias y las profesionales de la Dirección. Por un lado en la creación del dispositivo se buscó corregir algunas cuestiones que consideraban como *falencias* en el abordaje interdisciplinario de la OFAVI, en la que la extrema compartimentación dificultaba según ellas la coordinación entre las profesionales y empobrecía las intervenciones. Por otro lado, en la nueva forma de construir interdisciplinariedad advierten sin embargo, un riesgo de “*aplanamiento*”, es decir que como “todas hacen todo” muchas veces se pierde la especificidad de los aportes disciplinares. Por último, se advierte una acepción de la categoría de interdisciplina relacionada con el contexto en el que la utilizan las protagonistas. Al ser un dispositivo jurídico-penal la valoración positiva está dada por la capacidad de construcción de prueba para aportar a las causas en las que intervienen, más que a la integralidad de los acompañamientos a las víctimas.

Asimismo el éxito en la construcción de prueba para las causas a partir del abordaje interdisciplinario, pareciera estar relacionado con la necesidad de constituir a la Dirección como una “*voz legitimada*” para hablar de las víctimas en el marco del campo jurídico.

## 1.4 Las “chicas de la Dirección”

El intento por legitimarse como Dirección a partir de la interdisciplina en tanto constructora de prueba y aportando en la teoría del caso -es decir, jugando el juego que propone el derecho penal- está relacionado con la mirada que tienen algunas Fiscalías acerca del trabajo de la Dirección. En este apartado se verá qué piensan del aporte que se realiza desde allí en el proceso penal.

Las profesionales que componen los equipos de la Dirección de Orientación a Víctimas comparten un perfil similar. En primera instancia, el 95% son mujeres (de las 50 profesionales que componen los equipos, sólo 3 son varones). Ese dato es relevante porque las propias profesionales notan que desde las fiscalías con quienes se trabaja en coordinación, se piensa a la Dirección con rostro de mujer. “*Las chicas de la Dirección*” de hecho, es una categoría que recorre los pasillos frecuentemente y que las profesionales utilizan de modo irónico. El término se originó a raíz de lo comentado por un Fiscal en la presentación de la Guía de Víctimas que elaboró la Dirección, en la cual agradeció enormemente el trabajo de la Dirección y festejó poder recurrir a “*las chicas de la Dirección*” cuando las víctimas estuvieran “angustiadas” y “vulnerables”.

El significado que le dan las propias trabajadoras a dicha categoría tiene que ver con que el rol de las profesionales de la Dirección es visto como el de “consolar” o “contener” a las víctimas. Tal es así, que, también a modo irónico, las profesionales suelen decir “*llevamos los pañuelitos y el vaso de agua*” como si fuera ese el único aporte de su trabajo. Según ellas, así lo ven efectivamente algunas Fiscalías, que recurren a la Dirección cuando no pueden contener a una víctima que está angustiada, llorando en el despacho de un Fiscal, o simplemente desbordada. Esto tiene que ver no solamente con una cuestión del orden de lo humano sino también con que a las Fiscalías “*no les sirve una víctima que no puede colaborar con el proceso penal por su condición emocional y por eso piden una psicóloga cuando una víctima se larga a llorar*”, afirma Laura.

Al respecto, una de las trabajadoras sociales del Programa especial contra la Violencia de Género, cuenta:

*“Bueno, la demanda es, por lo general: ‘por qué tiene esta reacción, está llorando y necesita una psicóloga que le traiga un pañuelo’. Eso lo puede hacer cualquiera, no necesariamente lo tiene que hacer DIRECCIÓN. Debería hacerlo cualquier oficial de justicia que esté trabajando en ese espacio” (Entrevista a una de las Trabajadoras Sociales del Programa, enero 2021)*

Otro de los supuestos que encierra la categoría “*Las chicas de la Dirección*” es el de las tareas de cuidado, históricamente asociadas a las mujeres. Esta idea junto con el “*maternazgo*” son algunas de las cuestiones que se discuten en los espacios que generan las propias profesionales tanto divididas en disciplinas -grupos de psicólogas y de trabajadoras sociales- como en las supervisiones y en las asambleas.

Sin embargo, las profesionales reconocen que a partir del paso del tiempo y con algunas conquistas acreditables – por ejemplo, casos famosos en los que intervino la Dirección- algunas fiscalías empiezan a respetar el trabajo de la Dirección y a considerar a sus trabajadoras, justamente, como profesionales en la materia. Esto se ve, según ellas, en la profesionalización del vínculo con las Fiscalías: desde la correcta derivación de casos hasta la capacidad de escucha de los operadores de la justicia de las necesidades de las víctimas a partir de lo sugerido por la Dirección.

Por último, otro elemento interesante que se desprende de la categoría es que devela la homogeneización de las disciplinas bajo un denominador común: que son mujeres, que trabajan con víctimas –sin problematizar qué tipo de víctimas aparecen- y que las contienen. Es decir, pareciera que a los ojos de las Fiscalías no hay diferencias entre el trabajo de las psicólogas, abogadas, y trabajadoras sociales.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Nombro a propósito sólo las disciplinas hegemónicas o aceptadas dentro del poder judicial, porque el resto de las ciencias sociales directamente están invisibilizadas por los operadores judiciales.

Más allá de las diferentes disciplinas, se podría decir que hay cierto perfil común en las trabajadoras de la Dirección de Orientación a Víctimas y tiene que ver con el compromiso con la tarea. En un comienzo, a la hora de mirar la composición de las trabajadoras de la dirección mi supuesto era que había una intencionalidad en la elección de profesionales que cumplieran con ciertos requisitos en relación a un compromiso político con la tarea, más allá de la disciplina de la cual vinieran. Asimismo, como en los últimos años la Dirección fue incorporando algunas trabajadoras de otras profesiones -como antropología, sociología e historia- asumí que había una búsqueda por ampliar el tipo de intervenciones y que no quedara solamente en las clásicas: abogacía, psicología y trabajo social. Este razonamiento estaba relacionado con la nueva mirada en cuanto a la interdisciplina que se plantea en la creación de Dirección: si la idea es ampliar el espectro de intervenciones intentando que todas las profesionales puedan abordar todas las tareas, tenía sentido que haya nuevas disciplinas que nutran ese proceso ya que también podrían realizar las mismas tareas que el resto.

Sin embargo, en la entrevista con Laura, ella explica que la incorporación de nuevas disciplinas tuvo que ver con la disponibilidad de recursos humanos. Dentro de la planta de trabajadores del MPF es muy común el “pase” entre áreas, ya que es poco usual que se contrate gente de “afuera”. Esto provoca que haya una disponibilidad limitada de trabajadores que ya son del MPF y cada titular de área “elige” entre ellos en función de lo que está buscando para cubrir determinado puesto.

En ese marco, frente a la pregunta por las características de los trabajadores que elige la Dirección, Laura explica que siempre se pondera la búsqueda de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Sin embargo, resalta una cualidad que para ella es fundamental a la hora de incorporar personas:

*“Buscamos gente que trabaje y pueda soportar la escucha del dolor. Después si es estudiante, si tiene 20 años de trayectoria en el Poder Judicial pero no se recibió, no es tanto problema”*

Y continúa:

*“Estereotipadamente yo difícilmente busque una historiadora, ahora si aparece un CV de una historiadora y cumple con el requisito*

*de capacidad de trabajo y escucha del dolor del otro, esta bien". (Entrevista a Laura, mayo 2020)*

Vemos, al contrario de lo que suponía previamente, que la principal búsqueda de recursos humanos tiene que ver con las profesiones de las que provienen - específicamente del derecho, la psicología y el trabajo social- y en segundo lugar con la capacidad de *escucha*<sup>22</sup>.

Esta escucha del dolor por parte de las profesionales es el punto de partida desde el cual codifican, clasifican y jerarquizan el riesgo y la victimización. Son las propias profesionales -que a su vez están inmersas en una estructura jerárquica encabezada por la Dirección y seguida por las Coordinadoras de equipos- las que pueden delimitar formas de inclusión y exclusión tanto en la Dirección como en otros dispositivos de atención definiendo cuando hay una "situación de vulnerabilidad" o de "riesgo" (Iyer, et. al. 2012). Asimismo, pueden rechazar la condición de víctima en el caso de quienes no responden al ideal de sujeto victimizado. (Zenobi, Marentes 2020), como fue tratado en el apartado 1.2 de este capítulo.

En este sentido, muchas veces las personas que acuden al dispositivo deben adaptarse a las expectativas e ideales de los agentes y operadores que contribuyen a producir modos de entender el sufrimiento (Zenobi, Marentes 2020), a la vez que los propios actores dentro del dispositivo tienen sus expectativas en relación al funcionamiento y los objetivos que tiene el mismo.

Para finalizar, la perspectiva de Barbot y Dodier en relación a las principales características de los dispositivos -secuencias en el tiempo y expectativas- resulta interesante para pensar el pasaje de OFAVI a la Dirección. Todas aquellas personas vinculadas a los dispositivos desde distintas posiciones se organizan a partir de repertorios normativos o un conjunto de expectativas (Barbot y Dodier, 2014). En general los tipos de expectativas tienen que ver con la definición de la finalidad del dispositivo y la dimensión del diseño, y terminan de definir los modos de

---

<sup>22</sup> Esta escucha del dolor por parte de los trabajadores del dispositivo y el hecho de ser testigos y depositarios de lo que Freud llamó "lo siniestro de la cultura" produce a la vez, efectos en la salud de los profesionales y operadores que se desempeñan en el área (Fridman, 2019). Esto implica muchas veces síntomas psicósomáticos corporales a la vez que despersonalización en el trabajo, lo que en la psicología contemporánea denominan "síndrome de Burnout"

funcionamiento del propio dispositivo. Estas expectativas de quienes participan y forman parte de los dispositivos están sujetas a variaciones a lo largo del tiempo, durante el cual aparecen negociaciones respecto al diseño y la finalidad del propio dispositivo.

Qué cosas pueden hacer y no las víctimas, quienes pueden habitan o no al propio dispositivo, cuál debería ser la función de la interdisciplinariedad en relación a los objetivos de la Dirección como dispositivo de víctimas pertenecientes al Poder Judicial. Las secuencias de interacción (Barbot y Dodier, 2016) se desarrollan en términos procesuales, y las propias expectativas de quienes habitan el dispositivo van cambiando con el tiempo. A su vez, esas expectativas de las distintas profesionales que van mutando, podríamos pensar, portan algunas miradas sobre qué es una víctima y qué no.

En el siguiente capítulo se verá cómo esas expectativas de los actores intervinientes fueron y siguen mutando a lo largo del tiempo y cómo eso fue modificando la finalidad del dispositivo, sus intervenciones y las nociones de víctima que aparecen en ese camino.



## **Capítulo 2**

### **El trabajo de la dirección: ¿Un “auxilio” a las fiscalías?**

#### **2.1 El Divorcio**

La Dirección aborda todos aquellos casos que tramitan ante las Fiscalías Nacionales con competencia correccional, instrucción, juicio y ejecución de condena dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, todas ellas con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, según el delito que se trate, los Programas Especiales asesorarán y abordarán posibles casos que surjan a requerimiento de Fiscalías Federales con asiento en todo el país.

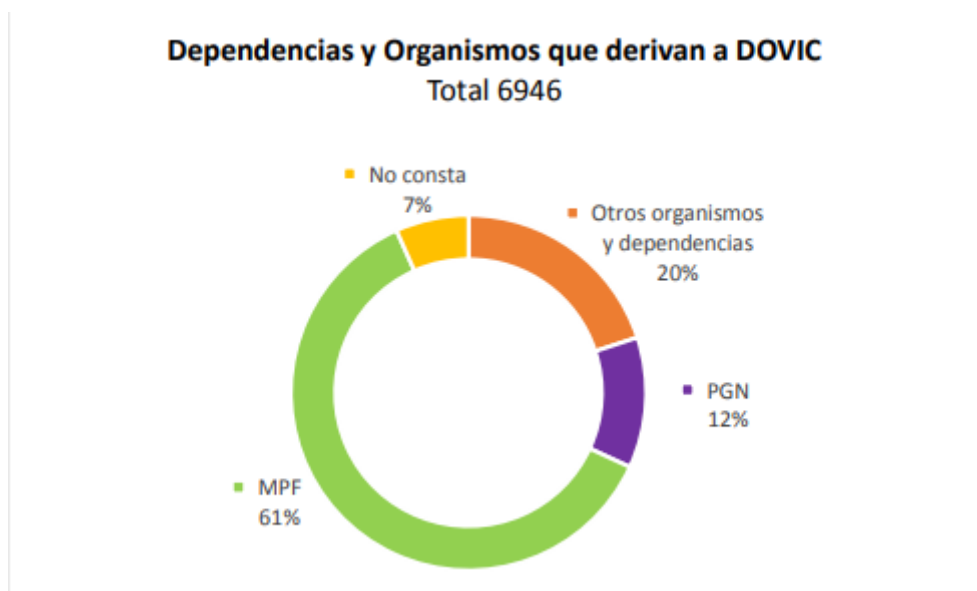
Según establece la Resolución de creación de la Dirección de Orientación a Víctimas<sup>23</sup> “Su objetivo institucional principal será el de brindar auxilio y colaboración a los/as fiscales del organismo para el desarrollo de los actos procesales que puedan comprometer derechos o intereses de las víctimas.” Esto quiere decir que la Dirección fue creada en el marco de las modificaciones ya consignadas en el MPF,

---

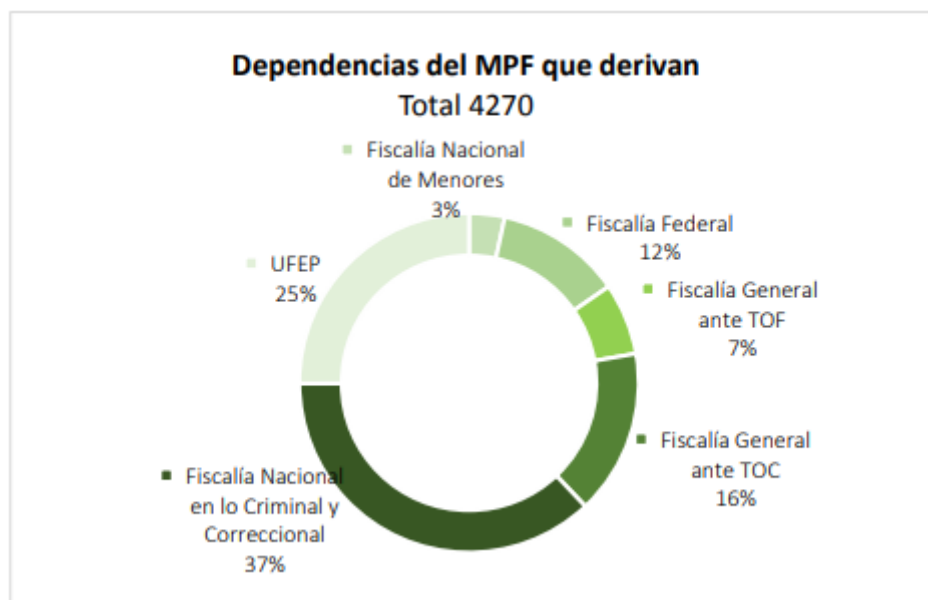
<sup>23</sup> <https://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2014/PGN-1105-2014-001.pdf>

como un órgano de colaboración con el trabajo de las Fiscalías. Es por ello, que la mayoría de los pedidos de intervención registrados en el período 2014-2019 corresponde a dependencias del MPF (esto es: Fiscalías de instrucción, orales, nacionales y federales, a la vez que procuradurías especializadas que colaboran en la etapa de investigación).

Cuadro 1<sup>24</sup>



<sup>24</sup> Fuente: Informe Estadístico DIRECCIÓN Agosto 2014- Noviembre 2019

Cuadro 2<sup>25</sup>

Desde los propios dispositivos se destaca el valor otorgado a las cifras como parte de la política pública (Varela y Gonzalez 2015). Recuperando lo señalado en los cuadros de arriba, la instancia en la que las Fiscalías derivan los casos es, según los Protocolos y el Informe estadístico, crucial a la hora de pensar la *estrategia de acompañamiento*. Esto quiere decir que no es lo mismo el seguimiento que se le puede realizar a una persona damnificada desde el momento inicial en el que realiza la denuncia y esta fue sorteada a una Fiscalía, que si el pedido de intervención se realiza ya en la etapa oral, donde cambia la Fiscalía y el Tribunal intervinientes y se prepara a la persona damnificada en función de una próxima resolución de su causa.

La *estrategia de acompañamiento*, según la CP, tiene que ver sobre todo con cuál es el pedido que realiza la Fiscalía. Al respecto comenta:

*¿El acompañamiento qué implica? informarle los derechos, sus obligaciones como testigo, cuáles son las etapas procesales,*

<sup>25</sup> A su vez, observando de forma desagregada las dependencias que solicitan la intervención de DIRECCIÓN, se visualiza en el siguiente gráfico que dentro del MPF en su mayoría son las Fiscalías de Primera Instancia quienes más derivan (49%), entre ellas, las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccional conforman el 37% (1571 casos) y las Fiscalías Federales en lo Criminal y Correccional el 12% (510 casos). Luego, un 23% de casos ingresan en etapa de juicio oral, sumando fuero nacional 16% (660 casos) y el federal el 7% (300 casos).

*trabajar la problemática de violencia tratando que modifique o intente alguna transformación en el proceso de la naturalización de la violencia, ponele. Entonces, eso por un lado, ahora, si a vos la Fiscalía, en el proceso penal, esta mujer atraviesa una situación de una evaluación psicológica donde tienen pocos elementos para avanzar y dicen que fabula o que tiene una valoración donde no hay indicadores de violencia o de abuso sexual, por ejemplo, entonces nos lo derivan a nosotros porque no pueden avanzar y piden colaboración” (Entrevista a la CP, julio 2020).*

Institucionalmente, aparece esta idea de que la finalidad del dispositivo es la de colaborar con el trabajo de las Fiscalías, entonces eventualmente se direccionarían las *estrategias de acompañamiento* en función de lo que ellas soliciten. Sin embargo, según las profesionales de los equipos, y la propia dirección, en el trabajo cotidiano aparecen algunas tensiones con respecto a las expectativas de las Fiscalías y las expectativas de la Dirección. Al respecto, la CP manifiesta:

*“Nosotros tenemos un objeto: que avance la causa penal en función de las expectativas de las víctimas. O sea, Fiscalía y víctima en un momento van juntas, después puede ser que se divorcien en ese punto: uno quiere una cosa y la otra, otra. Entonces, ahí nosotros también divorciamos un poco y ahí sí quedamos más del lado de la víctima.”* Manifiesta la CP

Y continúa:

*“Y el otro objetivo, además del acompañamiento que va en los términos de acompañarlo divorciado de la Fiscalía, es que esta persona que nos aparece a nosotros ha sido víctima de violencia de género, esa es la particularidad. ¿Nosotros qué queremos erradicar? La violencia de género, entonces en algún punto una intervención socio-educativa, psico-educativa, también es una buena intervención”* (Entrevista a la CP, julio 2020)

Aparece entonces una fractura entre lo que figura en los protocolos y los objetivos de la Dirección en relación al “auxilio” a las Fiscalías, y lo que sucede en la práctica. En el caso de que los intereses de las Fiscalías -es decir, la teoría del caso- vayan en contra de los intereses de las víctimas en relación a sus expectativas de resolución de la causa, la Dirección a priori estaría posicionada del lado de la víctima.

Se evoca, en pos de la “erradicación de la violencia de género” por primera vez, objetivos distintos de los relacionados estrictamente con un acompañamiento en el transcurso de la causa penal. Una intervención “socio educativa” o relacionada con el contexto socio económico de la persona damnificada se constituye como una intervención posible y deseable más allá de su paso por la justicia.

## **2. 2 Negociando con las Fiscalías**

En este apartado se verá cómo se intenta desde la Dirección dialogar con los pedidos de las Fiscalías en cuanto a sus estrategias, para responder a ellas pero a su vez ubicar en un lugar primordial “la voz de las víctimas”. En la entrevista, Laura hace mucho hincapié en que tanto la asignación de casos como el trabajo interdisciplinario, depende del tipo de caso y no tanto de una “bajada de línea” institucional de la Dirección que afecte a todos los Programas. A esto se le suma, según la CP, la derivación de la Fiscalía:

*“Si bien el enfoque es la expectativa de la víctima, yo no puedo dejar de dialogar con la Fiscalía. Antes (en los inicios de la Dirección) era como que la Fiscalía mandaba un caso y nosotros contestábamos lo que queríamos. Ellos te pedían chorizo y vos le mandabas papa. Ahora yo me esfuerzo por que sea un diálogo, cuando hay coherencia en el pedido de intervención. Esto es, que cuando nos pregunta algo (la Fiscalía), responder desde la Dirección si valoramos o no que algo de eso está sucediendo y si podemos aportar algo más en ese sentido, para que ayude a la causa -o para que ayude a la víctima- a que eso no siga porque ese es el posicionamiento y porque nosotros*

*entendemos que ya está, que ya hizo la denuncia y no quiere seguir". (Entrevista a la CP, julio 2020)*

Resulta interesante observar cómo al preguntar en las entrevistas, en un primer momento, la respuesta en relación al rol de la Dirección es institucionalmente la de auxiliar a las Fiscalías, pero luego aparece un objetivo que subyace, que no aparece en los protocolos, que tiene que ver con escuchar las expectativas de las víctimas. Esto remite directamente a la idea de reparación de la persona damnificada. Es en ese punto donde aparece la primera tensión en el trabajo del dispositivo que estamos analizando con respecto a lo esperado por las Fiscalías. Si las profesionales que componen la Dirección evalúan que la reparación no irá de la mano del avance de la causa penal, desarrollan y movilizan distintas estrategias para acompañar a esa persona “divorciadas” de la misma.

En función de ello, la *metodología de intervención* que en un primer momento parecía esquematizada -según muestra el Protocolo de actuación<sup>26</sup>- y orientada exclusivamente a la satisfacción de las expectativas de las Fiscalías, empieza a encontrar algunas fisuras, algunos márgenes por donde las profesionales satisfacen sus propias expectativas en relación al dispositivo que, por lo menos por ahora, parecerían tendientes a colaborar en la *reparación* de las personas damnificadas.

*“Hay gente que no sabe de lo que le estás hablando cuando llega ahí y no tiene idea de que otras personas, otras mujeres, otras poblaciones vulnerables, viven esa situación, entonces, al abrir eso, hace que produzca una modificación en... No sé si subjetiva o no, pero por lo menos un cambio. Algo que viene en una dirección, hay una intervención... La intervención en sí misma es estratégica. Eso va a pegar un codazo para que vaya para un lado o para otro y, si no produce nada, seguirá el mismo sentido. ¿Qué otras estrategias? No sé, también a veces es que asuma la persona denunciante la responsabilidad que implica el acto de denunciar. Eso también es*

---

<sup>26</sup> [https://www.mpf.gob.ar/Dirección/files/2019/09/protocolos-de-DIRECCIÓN\\_7-08.pdf](https://www.mpf.gob.ar/Dirección/files/2019/09/protocolos-de-DIRECCIÓN_7-08.pdf)

*importante porque la denuncia tiene sus efectos.” (Entrevista a la CP, julio 2020)*

A partir de la entrevista con la CP, mi preconceito fue que esa era una mirada muy “psi” del acompañamiento a víctimas dentro del dispositivo -más allá de que ella misma reconoció que en la “mimetización” que según ella produce la interdisciplina, se siente más judicial que psicóloga<sup>27</sup>-. Esto es así, en función de considerar que la psicología y el trabajo social, serían las disciplinas que empujan ese “divorcio” en relación a la causa penal. Es decir, buscar formas alternativas de acompañamiento que no se centren únicamente en el dispositivo penal. Sin embargo, al hablar de la relación con las Fiscalías, la propia Laura, abogada y Directora de la Dirección habló de *negociaciones* con las Fiscalías a la hora de pensar qué implica para ella un acompañamiento deseable:

*“Hay una negociación con las Fiscalías permanente. Buscamos que la voz de la víctima tenga un lugar primordial, a veces se logra y a veces no. A veces incluso nosotras buscamos eso y la víctima no quiere. Cuando les preguntas qué querés y la víctima no sabe y te dice “díganme ustedes qué tengo que hacer”. Es un proceso largo, la complejidad del caso, está atravesado por muchas variables, el tema es qué haces con esa intervención. Intentamos todo el tiempo que ese proyecto, esa búsqueda, ese proyecto de vida -porque autonomía es proyecto de vida, vida libre de violencia- tratar de construir junto con esta persona que se identifica como víctima - o no, porque muchas veces no se identifican como víctimas- qué significa este proyecto de autonomía (Entrevista con Laura, mayo 2020).*

En los dichos de Laura aparecen ideas como “autonomía” “proyecto de vida sin violencia” que considero nos hablan de una prefiguración de la idea de víctima que busca movilizar la Dirección frente al Sistema de Administración de Justicia. Eso se ve a su vez reflejado en oficios, informes y en las *intervenciones estratégicas* que abordan cuando las fiscalías les derivan casos.

---

<sup>27</sup> Esto aparece en el capítulo II

Esto puede ser analizado a la luz del concepto de “paradoja de la víctima” de Barthe (2018), según la cual se asume que la víctima es pasiva, en una sociedad que valora la autonomía. Sin embargo vemos cómo, en el proceso de producción del estatus de víctima (Lefranc y Mathieu, 2009) o de victimización (Barthe, 2017) aparecen distintos intereses y prácticas de los agentes y de las propias personas damnificadas que van moldeando esa tensión entre pasividad y agencia. Un ejemplo de ello es la idea que propone Laura de “*proyecto de vida autónomo*”, a partir del cual según ella, se busca dentro de la Dirección trascender lo “*asistencial*” propio de la urgencia en casos de violencia para pasar a construir la “*autonomía*” de las víctimas. Y ello es en nombre de jerarquizar “la voz de la víctima” cuando las profesionales consideran que no está siendo tenida en cuenta por las Fiscalías. Sin embargo, como fue expuesto anteriormente, muchas personas damnificadas no desean reconocerse como tales y quizás buscan la reparación de lo ocurrido en otras esferas de sus vidas.

Esta noción de “*proyecto de vida*” trae aparejada entonces otra gran discusión en torno a los estudios de las víctimas, que es la de agencia versus pasividad, en la cual frente a esta supuesta pasividad de las víctimas -asociada directamente con la idea de vulnerabilidad- los profesionales que intervienen en los distintos dispositivos vinculados a las personas que han sufrido delitos, pueden considerar que ellas deben “pasar al acto”, “empoderarse”, o “ganar agencia” (Zenobi, Marentes, 2020). En ese contexto puede surgir la inquietud acerca de la capacidad de acción de esas personas en situación de vulnerabilidad y de subalternidad (Châtel y Soulet, 2003; Nigri Veloso y Salgueiro Marques, 2018). Aparece entonces la idea de que es necesaria la intervención del Estado y organizaciones de la sociedad civil para promover ese “pasar al acto” o ese “agenciamiento” (Roggeband, 2010). En ese marco, el Estado se pararía como un “*tercero de apelación*” (Ulloa, 2005) que supera la “*encerrona trágica*” de víctima-perpetrador y permite a la persona afectada salir del lugar de pasividad.

Es interesante pensar estas tensiones entre las expectativas de quienes componen el dispositivo la Dirección (integrado por profesionales de distintas disciplinas y trayectorias en relación a los delitos que abordan) y las Fiscalías (al que podríamos



llamar dispositivo estrictamente jurídico) a la luz de la idea de “*repertorios normativos*” propuesta por Barbot y Dodier (2014, 2016). Estos están vinculados con las expectativas de los propios actores en relación al dispositivo, y van moldeando en su accionar la finalidad y el diseño de los mismos.

Esto se puede ver en lo manifestado por Laura, en relación a que el desarrollo de la Dirección es un “ida y vuelta”, un proceso que fue mutando a lo largo de los años en función de la experiencia y las expectativas de las profesionales y de las Fiscalías. Es decir, en función de estas *negociaciones* tanto desde el punto de vista del diseño y enfoque como la dimensión de la finalidad. Es en ese “ida y vuelta” que se moldean las cuestiones de orden normativo y de funcionamiento del dispositivo, como ya fue expresado.

Asimismo puede observarse en relación a la finalidad del propio proceso penal: cuál es el resultado del desarrollo de la causa y qué se espera que produzca en aquellas personas que sufrieron un delito. Al respecto la CP manifiesta:

*“Nosotros hacemos énfasis en eso. ¿No va a poder seguir la causa? Bueno, que no siga. Y ahí creo que está la frustración de la Fiscalía, porque quiere un juicio o algo efectivo como diciendo “qué hinchapelotez”, como si eso no hubiese tenido un efecto reparador o efectivo en la vida de alguien. Lo tuvo, por eso no sigue” (Entrevista a la CP, julio 2020).*

Estas negociaciones, según las propias protagonistas, aparecen relacionadas al lugar que adopta el dispositivo en función del interés que va a primar en cada caso: el interés de la Fiscalía o el interés de la víctima. Cuando aparecen situaciones en las que hay que tomar esa definición aparecen las tensiones. Hay veces que la fiscalía quiere avanzar con una causa, mientras que la persona damnificada no quiere. Aparece allí entonces una contradicción de las expectativas de quienes componen el dispositivo en relación a lo que debería hacer la Dirección frente a dichas situaciones. La Dirección tiene la instrucción institucional de “auxiliar” a las fiscalías, sin embargo muchas veces las profesionales e incluso aquellas que componen la Dirección consideran que el acompañamiento de la víctima, o lo

reparatorio frente a lo sucedido no tiene que ver con la continuación del proceso penal, porque eso puede revictimizar, abrir heridas viejas, o simplemente porque en ese momento la persona no puede encarar el proceso por motivos económicos, personales, de maternidad, entre otros. Por el contrario, en esos casos, se buscan intervenciones *divorciadas* de lo estrictamente jurídico que apunten a colaborar y orientar a aquellas personas consultantes en términos de *proyectos de vida* sin violencias.

Esto provoca que las profesionales estén atrapadas entre dos mandatos: “auxiliar” a las fiscalías como ordenan los protocolos y la carta orgánica, y por otro lado asistir a las víctimas, ya que como hemos visto, muchas veces estos intereses pueden no ir de la mano. Esto puede resultar contradictorio en términos morales (Gluckman, 1972), y serán las propias profesionales, respaldadas por la autonomía que gozan los programas especiales, las que a partir de sus propias técnicas morales (Gatti, 2017) evalúan qué hacer según cada caso, el contexto y su compromiso con la causa de la erradicación de la violencia. Asimismo, por sus trayectorias personales y sus disciplinas (retomando la disputa entre el dispositivo jurídico y los saberes “psi” y ts) pareciera que están atrapadas entre los procesos jurídicos tradicionales, y su compromiso en darle lugar a la víctima en ellos.

### **2.3 “Hablar el mismo idioma”**

Tal como hemos visto, las profesionales constantemente trabajan e intentan conciliar distintas expectativas, las de la justicia propiamente dicha y las de las víctimas. Parte de “estar en el medio”, provoca que desplieguen distintas estrategias para achicar la distancia entre unos y otros.

Una de estas estrategias tiene que ver con el lenguaje. No solamente en la intención de “traducir” el lenguaje jurídico a uno comprensible para las víctimas, sino también “jugar un doble juego”, acercando al mundo jurídico otras y perspectivas en relación a las causas. Para ello, por un lado, se trabaja en democratizar la información que circula en las causas penales hacia las víctimas y por otro, introducir dentro del mundo jurídico conceptualizaciones teóricas de otras disciplinas, y otras miradas

desde el compromiso, partiendo de la base de que son una “voz *legitimada*” de los deseos de las víctimas.

Resulta útil para pensar este doble juego, lo propuesto por Roseberry (2000) al respecto del proceso de dominación. El autor, con el fin de comprender las relaciones entre los grupos dominantes y los grupos subalternos, retoma el concepto de hegemonía de Gramsci planteando que no sirve para comprender el consentimiento de la dominación donde los grupos subalternos la aceptan desde la pasividad, sino para analizar la lucha; las maneras en que las palabras, imágenes, símbolos, formas, organizaciones, instituciones y movimientos usados por las poblaciones subordinadas para confrontar, acomodarse o resistir su dominación, son modeladas por el proceso de dominación mismo. Lo que construye la hegemonía, entonces, no es una ideología compartida sino un lenguaje común o una manera de hablar sobre relaciones sociales que expone los términos centrales alrededor de los cuales pueden ocurrir la impugnación y la lucha. A este lenguaje lo denomina el “lenguaje de la contienda” (Roseberry, 2000). En este apartado veremos cómo las trabajadoras de la Dirección quieren hablar un “*lenguaje de las víctimas*” analizándolo a la luz del concepto propuesto por el autor.

Al consultarle a las profesionales por su propia práctica y lo que entienden por estrategias de acompañamiento, una de las primeras cuestiones que sale a la luz es la idea de *traducción* del lenguaje jurídico a un lenguaje más coloquial, ya que según ellas la primer barrera y expulsión del sistema de administración de justicia para la democratización y el acceso a la información es el lenguaje:

*“El hecho de poder manejar una comunicación y un lenguaje que no continúe con la reproducción de asimetría de poder que tiene el Poder Judicial para con las personas que se conforman como víctimas, y sobre todo situaciones de violencia hacia las mujeres o hacia los niños, es algo fundamental y genera en las personas que acompañamos algo distinto, más allá de la decisión judicial después”.  
(Entrevista Trabajadora Social de la Dirección - En adelante TS-, marzo 2021)*

Por otra parte, las profesionales consideran que los aportes que realiza la Dirección de Orientación a Víctimas desde la interdisciplina y las trayectorias personales enriquecen a su vez a la teoría del caso, es decir, al trabajo de las Fiscalías. Un ejemplo de ello, consideran, es la complementación de sus intervenciones con bibliografía y conceptos de otras disciplinas y del feminismo que no son con los que está familiarizado el poder judicial: la perspectiva de derechos humanos de Fernando Ulloa, teoría feminista sobre los cuidados para pensar el consentimiento desde otra perspectiva, bibliografía sobre el círculo de la violencia, y un texto muy utilizado en el vínculo con las Fiscalías titulado *“Por qué las mujeres retiran las denuncias”* de Elena Larrauri:

*“En algún punto, intentar hablar el mismo idioma, pero al mismo tiempo incorporar nuevos conceptos, nuevas palabras y nuevas ideas que permitan pensar un poquito más allá de la idea básica de la conformación de ese hecho como un delito, que ese hecho además es un problema social que tiene muchísimas aristas desde donde observarlo” (Entrevista a la TS, marzo 2021).*

Para ellas es “como un doble juego” en el que por un lado “traducen” a la persona damnificada lo que ocurre en la causa, sus derechos y posibilidades, y por el otro intentan hablar el mismo idioma que los operadores judiciales para hacerles inteligibles otras miradas posibles sobre un determinado caso. En este camino además, intentan expandir las fronteras e incorporar nuevos conceptos e ideas que sirvan como precedente para otros casos. Al respecto, manifiesta la TS:

*“De ahí, hay que profundizar generando intercambios, poniéndonos nosotras también en un rol muchísimo más activo que no sea solo acompañar en ese momento de suma angustia a la mujer, sino intentar meter un poquito más la cuchara en cómo se encara esa investigación de esa situación en particular. “Meter la cuchara” digo meter la mirada de otras disciplinas que no sea sólo determinada concepción del ejercicio de la abogacía. Porque no todas las abogadas y los abogados piensan lo mismo, pero sí impera una lógica que no incluye la mirada de la víctima, que no incluye otras*

*problemáticas que puedan atravesar la situación. Entonces, me parece que esa es la estrategia principal que batallamos.” (Entrevista a la TS, marzo 2021)*

Aparece en esta idea de “*meter la cuchara*” otra vez las disputas de los saberes psi-trabajo social versus el dispositivo jurídico penal. Desde su lugar de trabajadora social, pareciera que “*meter la cuchara*” hace referencia a irrumpir en un espacio que no les es propio.

Laura coincide con la apreciación del rol activo de la dirección frente a las Fiscalías. Al respecto, ella menciona que desde la creación de la Dirección de Orientación a Víctimas a esta parte, se han desarrollado diversas herramientas y estrategias orientadas a la *profesionalización* de las intervenciones de las Fiscalías y la capacitación de los operadores de justicia en relación a las víctimas.

Como ejemplo de las herramientas que moviliza la Dirección para capacitar y *profesionalizar* el trabajo de las Fiscalías, Laura menciona algunas de las más importantes. La primera es la “*Guía práctica sobre la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos –Ley N° 27.372-*”<sup>28</sup>, elaborada por la Dirección, a partir de la cual, según Laura se realizó una “traducción sobre lo que dice la ley para operadores judiciales” con el objetivo de que puedan implementar la Ley en sus causas, avanzar en los derechos de las víctimas y que les sea inteligible aquello que no venía formando parte su accionar cotidiano.

La segunda es el Documento titulado “*La comunicación de la muerte en el marco de una intervención fiscal*”<sup>29</sup>, también elaborado por la Dirección. Según ella debería llamarse “*Cómo dar malas noticias*”, ya que todos los operadores judiciales trabajan constantemente dando *malas noticias*. La expectativa de la directora con este material es que se trabaje desde la formación en sus carreras de grado en cómo acompañar a un otro en un proceso doloroso de su vida.

---

<sup>28</sup> <https://www.mpf.gob.ar/Dirección/files/2019/10/Guia-Practica-sobre-la-Ley-de-Derechos-y-Garantias-de-las-Personas-Victimas-de-Delitos-1-1-1.pdf>

<sup>29</sup> [https://www.mpf.gob.ar/Dirección/files/2020/02/DIRECCIÓN-La\\_comunicacion\\_de\\_la\\_muerte\\_2020.pdf](https://www.mpf.gob.ar/Dirección/files/2020/02/DIRECCIÓN-La_comunicacion_de_la_muerte_2020.pdf)

Una tercera herramienta es, según su consideración, la planilla de derivación de la Dirección. Este documento, que solicita datos no solo de la persona damnificada sino también un resumen de los hechos para evitar *sobre-preguntar* en la entrevista y correr el riesgo de *revictimizar*, es condición sine qua non para aceptar un pedido de intervención de las Fiscalías. Si esa planilla no se envía completa, junto con copias de partes relevantes de la causa -como el informe de riesgo de la Oficina de Violencia Doméstica -OVD-, pericias psicológicas en el Cuerpo Médico Forense si las hubiera, o declaración en Fiscalía- el caso no entra a la Dirección.

Por último, otra de las herramientas de profesionalización identificadas por la Directora son los espacios de formación para el MPF. Estos se suelen realizar sobre distintas temáticas y en coordinación con distintas áreas del organismo. Un ejemplo de ello es un encuentro reciente sobre *“la víctima y el proceso penal”* que se realizó durante la pandemia de manera virtual, donde hubo 200 inscriptos. Asimismo, cuenta Laura que en el marco de la Ley Micaela<sup>30</sup> dictaron dos cursos: uno para el fuero Federal y otro para el fuero ordinario, con el objetivo de estos espacios es según Laura, expresar otras maneras de trabajar que escapen a la *“justicia más estricta y estereotipada”*.

Si bien por una elección de recorte en este trabajo se han resaltado las estrategias que tienen que ver con el acompañamiento al deseo de las víctimas cuando hay un *“divorcio”* con las Fiscalías, todas las profesionales, trabajadoras y autoridades de la Dirección resaltan cómo a partir de las intervenciones, los oficios y los informes elaborados, han podido en incontables ocasiones revertir el archivo de una causa, promover que se avance en la investigación aportando pruebas, y favorecer una condena cuando se consideraba que el caso lo ameritaba.

Un caso ejemplo de ello, lo comentaron en una reunión de equipo virtual de la que fui parte. Se trataba de una mujer migrante que vive en la villa 1-11-14 que había sufrido innumerables abusos sexuales por parte de su pareja y no había instado la

---

<sup>30</sup> La Ley Ley 27.499 “Micaela García” se sancionó el 19 de diciembre de 2018 y establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y prevención de la violencia para todas las personas que trabajan en la función pública. Se llama así en memoria de Micaela García, una joven de 21 años militante del Movimiento Evita que fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.

acción penal<sup>31</sup>. Desde la Fiscalía no la pudieron encontrar por la cuarentena y dejaron de seguir el caso. Frente a ello, y leyendo el potencial riesgo en el que se encontraría la damnificada, las profesionales del Programa de Género llamaron al Centro de Salud donde sabían que se atendía, e hicieron articulaciones para dar con la mujer. Luego, a través de una estrategia orientada a tomar contacto con la damnificada sin que se enterara su pareja, la Dirección logró entrevistarla.

Frente a ese escenario, las profesionales consideraron -a pesar de la voluntad manifiesta de la damnificada- que se encontraba en peligro y necesitaba la intervención de la justicia -otra vez, el *tercero de apelación*- para poder salir de esa situación. Según ellas, la mujer estaba atravesada por otras violencias, y sobre todo estaba en riesgo. Por eso decidieron presentar el informe a la Fiscalía y ésta decidió instar “de oficio” aunque la persona dijo que no. En la discusión sobre el caso, una de las profesionales manifestó:

*“Fue igual con contradicciones porque la mujer estaba diciendo que ella no quería, nosotros podemos observar desde otro lugar por qué no quiere, por qué no pude, qué representaciones tiene con eso, pero bueno, también valorar esto, que estaba en riesgo. El riesgo existe. Los delitos continuaban. Aparte eran violencias sexuales como bastante cotidianas, zarpadas. Discutirme internamente cuál es el lado, la víctima, acompañarla literalmente como ella lo está solicitando, brindarle esta información a la Fiscalía... La Fiscalía es finalmente quien toma la decisión, pero sí brindar esta información muchísimo más integral de lo que le está pasando para que eso tenga alguna repercusión en la causa. Después, lo que se vaya a decidir, ya es otro cantar, pero nosotras me parece que en eso podemos hacer la diferencia. Una mirada más amplia e integral de la problemática por la cual una persona llega a la justicia. Si se quedan con que la mujer hizo esta denuncia en el ATAJO de Bajo Flores y después no instó,*

---

<sup>31</sup> “Instar la acción penal” significa que la damnificada debe dar el consentimiento para que la causa penal avance mediante una declaración en la fiscalía para ratificar la denuncia. Esto se hace en aquellos delitos denominados “de instancia privada” que son los casos de violencia sexual y lesiones leves. Sin embargo, la Fiscalía puede avanzar con la causa “de oficio”, es decir, sin la necesidad del consentimiento de la damnificada cuando considere que existe un peligro para la persona damnificada o para terceros.

*bueno, es una lectura. Si podemos ampliar esa mirada, y sobre todo actualizarla, y entenderla de una manera muchísimo más integral, hay que tomar una decisión con toda esa información. Me parece que eso es algo de las cosas distintas que podemos hacer nosotras.” (Extracto extraído de una reunión del equipo de género, febrero 2021)*

No instó. ¿Por qué no instó? ¿Qué temores tiene? ¿Qué representación de la justicia tiene para con este agresor que es el padre y proveedor de esa casa? ¿Qué se pone en juego ahí? ¿Por qué ella toma esta decisión y qué se puede hacer desde este lugar? Son algunas de las preguntas que giraban en torno al caso.

Para ilustrar las discusiones por parte de las profesionales que atravesaron la intervención, se detalla una parte del oficio enviado a la Fiscalía a propósito del caso de referencia:

*“(…) En este sentido, cabe mencionar que según se infiere a partir de la información enviada por Ud., como así también de lo que surge de la lectura de la Historia Clínica del Centro de Salud correspondiente y de la evaluación de la entrevista sostenida con la damnificada y el posterior seguimiento remoto, se observa que la Sra. se encuentra en una situación de altísima vulnerabilidad social, atento a la interseccionalidad de distintas variables; mujer, migrante, asentada en una villa de esta Ciudad, con escasas redes vinculares e institucionales y una fuerte dependencia económica, así como también el sostenimiento de patrones culturales que ubican al varón en un elevado estatuto para ser obedecido en todos los órdenes de la vida cotidiana por la damnificada.*

*Al respecto y en relación a la negativa de la damnificada sobre la posibilidad de continuar por el momento con la denuncia penal que inicia la causa de referencia, cabe mencionar lo referido por la “Guía de Actuación en casos de Violencia Domestica contra las mujeres” elaborado por la UFEM; “por las características mismas de la violencia doméstica (que se comete entre personas cercanas que tienen una relación asimétrica de poder), muchas veces las víctimas deciden no instar la acción penal o se retractan de la denuncia formulada incluso por delitos de acción pública” para lo cual sugieren ciertas pautas de actuación especial para estos casos: “2.2 El deber del Estado argentino de prevenir, sancionar y*



*erradicar la violencia contra las mujeres puede resultar un interés público suficiente para justificar la continuación del proceso en ciertos casos. Para determinar cuándo corresponde impulsar la acción prescindiendo de la voluntad de la víctima se deben ponderar los siguientes factores: la gravedad de los hechos denunciados; (...) el carácter físico o psicológico de la violencia que sufrió la víctima; (...) la historia de la relación entre la víctima y el agresor, en particular si existieron otros hechos de violencia previos o posteriores, hayan sido o no denunciados; si la decisión de no instar la acción penal pudo derivarse de cierta justificación, minimización o naturalización de la violencia por parte de la víctima; (...) si la decisión de la víctima de no instar la acción puede obedecer a coacción o intimidación o al temor de sufrir represalias, a perder el hogar, el contacto con sus hijos/as, etc”.*

*En virtud de lo mencionado, se solicita a Ud., evalúe la posibilidad de tomar las medidas que considere pertinentes para proteger a la damnificada de la violencia que fue denunciada oportunamente y que según refirió continuó hasta el reciente distanciamiento de la pareja”*

(Fragmento del oficio dirigido a la Fiscalía interviniente a propósito del caso mencionado).

Es interesante observar cómo se plasma en este oficio lo que las propias profesionales consideran como estratégico en las intervenciones. Por un lado, certifican la situación de vulnerabilidad, pero fundamentando con variables que no le son cotidianas a los operadores de la justicia: que la mujer es migrante, que tiene una fuerte dependencia económica y que observan un sostenimiento de patrones culturales que ubican al varón en un lugar de poder que provoca una obediencia absoluta. Por otro lado, citan referencias de la Guía de Actuación de UFEM -una de las herramientas que Laura en la entrevista considera como parte de la profesionalización del vínculo con las fiscalías-. Esta referencia muestra también cómo intentan en ese *juego de traducción*, orientar la decisión de la fiscalía en función de que se avance con la causa, con sus propias reglas y términos jurídicos.

Este caso muestra además, las distintas contradicciones con las que deben lidiar las profesionales y trabajadoras de la Dirección en los acompañamientos, que tienen matices y aristas, no siempre son iguales y a veces son ellas quienes deben decidir

si la causa amerita continuar por una situación de riesgo, a la vez que certificar el daño sufrido. Y si bien ellas mismas, consideran que primero está el deseo de la víctima, no dejan de mantenerse en el lugar de expertas que determinan cuándo sí y cuándo no. Estas contradicciones muchas veces generan angustia en las profesionales, y hasta sintomatología asociada con la frustración.

Para finalizar, es interesante retomar qué sentidos puede adquirir la idea de “*intentar hablar el mismo idioma*”. Por un lado, puede ser el esfuerzo de la dirección de traducir a las víctimas el lenguaje jurídico, tal como se mencionó anteriormente, porque según ellas esto contribuye a democratizar el acceso a la justicia, tener información y conocer sus derechos, en definitiva, jerarquizar el lugar de la víctima en el proceso penal. Por otro lado, a partir de la mencionada *profesionalización*, las profesionales de la Dirección intentan traducir aquello que no solo tiene que ver con el saber experto de las psicólogas y trabajadoras sociales, en un rol de capacitadora, y hasta casi educativo para con el sistema de administración de justicia, en este caso particularmente las Fiscalías, sino también aquello que es propio de la experiencia y trayectorias de compromiso con las causas de las víctimas, para que sea inteligible para las Fiscalías y el mundo jurídico, a lo que podríamos denominar el “*lenguaje de las víctimas*”. Esto teniendo en cuenta que la Dirección se posiciona en el lugar de las mismas.

Retomando a Roseberry, el Estado en el marco del proceso hegemónico tiene “el poder de dar los nombres” es por ello que ciertas formas y lenguajes de protesta o resistencia deben adoptar las formas y lenguajes de dominación a fin de ser registradas o escuchadas (Roseberry, 2000). A esta relación entre el lenguaje de reconocimiento del Estado (o lenguaje de dominación) y el lenguaje de la resistencia la denomina “Lenguaje de la contienda”. En suma, expone que los subalternos muchas veces adoptan el lenguaje “aceptado” e “impuesto” por el Estado y sus instituciones y oficinas burocráticas para hacer “inteligible” o “adecuada” su resistencia. Los símbolos, palabras, imágenes, etc de la resistencia son moldeados por el proceso mismo de la dominación.

En la literatura sobre la movilización de víctimas, esta idea de “lenguaje de las víctimas” como el de la contienda, moldeada por el propio proceso de dominación,

podría referirse a las estrategias que adoptan las víctimas y sus familiares para hacer inteligibles sus reclamos<sup>32</sup>. Sin embargo, podríamos pensar en el presente caso de análisis, que este “*intentar hablar el mismo idioma*” que propone la Dirección de Orientación a Víctimas, desde el lugar auto adscripto de “representante de las víctimas” dentro de un campo de poder en disputa donde lo jurídico es lo hegemónico, aquello que tiene que ver con el orden de los aportes de las disciplinas “subalternas” y del feminismo, también desarrollan estrategias para construir su propio “lenguaje de la contienda”, moldeado por las reglas del poder judicial, para hacer inteligible la “voz de la víctima”.

---

<sup>32</sup> Un ejemplo de esto podría ser el proceso de organización y movilización del “Para que no te pase” que devino en una Ley de Víctimas, que es en definitiva, una modificatoria al Código Procesal Penal Federal.

## Capítulo 3

### El Programa Especial de Víctimas de Violencia de Género

#### 3.1 El Programa

La “victimización” es un proceso social y colectivo en la que intervienen distintos agentes favoreciendo la identificación de ciertas personas en el lugar de víctima. Esto quiere decir, que las víctimas no se construyen como tales de manera aislada sino que intervienen una serie de actores en su reconocimiento. A estos agentes, Barthe los denomina “*victimizadores profesionales*” (2018), es decir, aquellas personas cuya actividad (o profesión) está enteramente dedicada a la victimización.

En el presente caso de análisis, veremos cómo las profesionales de las disciplinas que componen el Programa, a través de las estrategias de intervención que se estipulan en el Protocolo que se describirá a continuación, como así también de lo que ocurre en los “márgenes” o “bordes” de los acompañamientos, contribuyen en efecto a producir socialmente el estatus de víctima.

El Programa Especial para la Atención a Víctimas de Violencia de Género dependiente de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal fue creado por Resolución PGN N° 1105 del 2 de junio de 2014.

La atención y abordaje del Programa Especial a Víctimas de Violencia de Género - en adelante “el Programa”- según consigna el “Protocolo de actuación de los Programas Especiales de Atención a Víctimas” de la Dirección elaborado en 2015, está dirigido a las *víctimas de violencia de género*. El Protocolo expresa que

*“Dicho concepto, es una categoría que comprende la violencia contra las mujeres, la forma más masiva y persistente de violencia de género, pero que no se limita a ellas. Comprende también, aquella dirigida, de la misma manera y por razones de género a quienes poseen orientación o identidades distintas a las dominantes en nuestras sociedades, como ocurre con lesbianas, homosexuales, personas intersex, transgénero o transexuales, así como cierta forma de violencia que incluso puede afectar a hombres que siguen o deben seguir los patrones de masculinidad dominante.”* (Extracto Extraído del Protocolo de actuación, 2015)

Y continúa:

*“Si bien este tipo de violencia afecta en buena medida a las mujeres, ello no implica que ellas sean el único grupo que la sufren. Así, siempre que esa violencia esté dirigida a reproducir los modelos patriarcales, se estará frente a un caso de violencia basada en el género. Existen otros casos de violencia de género donde no existe un vínculo previo entre víctima y victimario. Estos, en general están relacionados con delitos contra la integridad sexual aunque también se incluyen los casos de violencia discriminatoria contra las personas trans y/o contra cualquier integrante del colectivo LGTTBI”* (Extracto del Protocolo de actuación, 2015).

Este Protocolo, según me comentaba, la CP, se fue actualizando año a año, como así también otro documento que formará parte del presente análisis llamado *“Procesos de Trabajo”*. Según ella, ambos documentos sufrieron modificaciones en paralelo a los cambios que se observaban en la dinámica cotidiana del Programa, y fueron no solamente editados por las Coordinadoras, sino también por las profesionales que lo componen. Considero que esta superposición de modificaciones, convierte a estos documentos en herramientas etnográficas interesantes, ya que nos permiten rastrear los vestigios de lo que ya no se usa, o se

ha descartado porque las propias profesionales consideran que quedó viejo u obsoleto.

Retomando el texto del Protocolo, por otro lado aclara: que en base a “los instrumentos internacionales de la materia” y la Resolución PGN 1105/14, el Programa está dirigido a las víctimas de violencia conforme lo establece la Ley N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”<sup>33</sup> en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Esto, cotejado con las anteriores definiciones de lo que para el Programa significa el concepto de “*violencia de género*” permite sospechar que en un principio la población destinataria parecía más ceñida exclusivamente a las mujeres y la violencia en la privacidad del hogar. Algo parecido a lo que sucedió en el pasaje entre la idea de “violencia doméstica” a la nueva Ley 26.485 que contempla al género de manera más amplia, a la vez que visibiliza otros tipos de violencia que no son únicamente dentro del hogar y en relaciones de parejas heterosexuales.

Actualmente el Programa contempla todos los casos de violencia de género en adultas que ya están transitando alguna de las etapas del proceso penal<sup>34</sup>, a la vez que los recientemente incorporados casos de “*abuso de larga data*” (abusos sexuales ocurridos en la niñez pero que en la actualidad las damnificadas son personas mayores de edad), que antes eran parte de la órbita del Programa de Niñez.

En cuanto al ingreso de los casos, al igual que en el resto de los Programas Especiales que componen la Dirección, la mayoría de las derivaciones son por parte de las Fiscalías -de instrucción u orales- aunque también puede tener origen en

---

<sup>33</sup> <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm>

<sup>34</sup> Hasta el 2018, el Programa también incluía casos de abuso sexual de personas que no habían hecho la denuncia, sobre todo derivados por el 144. Sin embargo, a raíz de la denuncia pública de la actriz Thelma Fardin, fue tan exponencial la demanda hacia el Programa que la Dirección tuvo que crear un Programa especial aparte para contener las derivaciones del 144 y llamados espontáneos de personas que querían averiguar si su caso había expirado, consultar qué implica hacer una denuncia, o simplemente tener un lugar donde poder contar lo sucedido.

distintas instituciones y actores en los que se requiera la asistencia y/o acompañamiento de las profesionales que integran el equipo interdisciplinario<sup>35</sup>

Asimismo, existen los casos que ingresan como “*espontáneas*”, como les llaman las profesionales a aquellas entrevistas que realizan a las personas que se acercan a la Dirección presencial o telefónicamente sin haber sido derivadas por ninguna institución. Muchas veces esas personas todavía no han hecho la denuncia, y quieren obtener información de cómo es el recorrido de una causa penal. Muchos de esos casos “*espontáneos*” son de violencia de género, por lo cual entran en el Programa luego de un recorrido por la mesa de entradas y la Coordinación General.

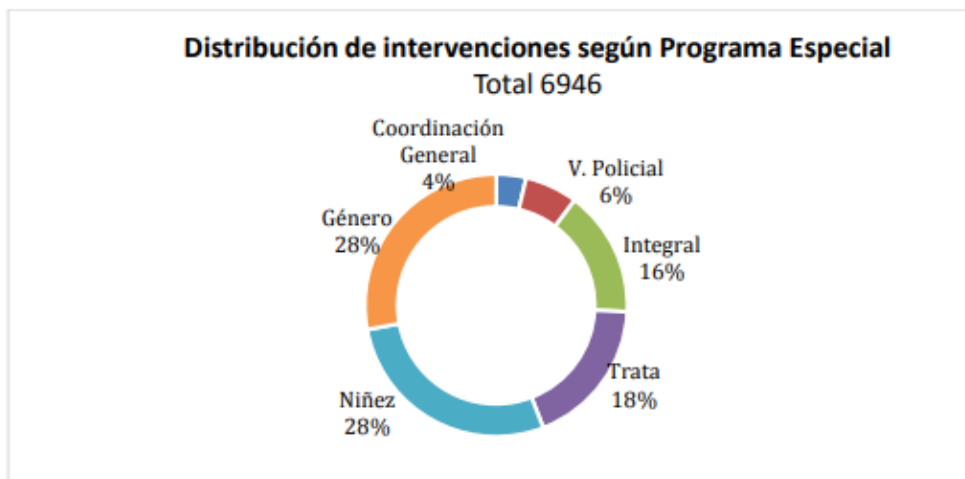
Por último, cabe mencionar que el Programa Especial de Violencia de Género es el que cuenta con más cantidad de casos activos de todos los Programas, según el Informe Estadístico de la Dirección que contempla desde el año 2014 al 2019. Del total de los casos en los que los que intervino (6946) un 28% (1942 casos) corresponde al Programa Especial para la Atención a Víctimas de Violencia de Género, y en un segundo lugar (con 1937 casos), el Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Maltrato y Abuso Sexual Infantil.

---

<sup>35</sup> Algunas de ellas son: Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal; distintas unidades fiscales o procuradurías integrantes del Ministerio Público Fiscal como por ejemplo UFISEX, UFEP, ATAJO, el Patrocinio Jurídico Gratuito de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Defensoría General de la Nación; la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD); el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación; los Centros Integrales de la Mujer (CIM); Organismos gubernamentales y no gubernamentales que se encuentren ante casos que requieran de la intervención del Programa Especial y hasta psicólogas particulares de la Red de Psicólogas Feministas.

### Cuadro 3

#### Pedidos de Intervención recibidos por cada Programa Especial



El Protocolo establece cuáles son los *principios de actuación*. Sus puntos principales son:

- Dignidad, trato humano y consideración frente a la situación de vulnerabilidad de la víctima.
- Evitar la revictimización o victimización secundaria.
- Respeto por la autonomía de la víctima.
- Garantizar el acceso a la justicia y empoderar a la víctima en miras a su participación en el proceso judicial
- Acceso igualitario, no discriminación y trato personalizado
- Abordaje interdisciplinario e integral
- Respeto por la privacidad e intimidad de la víctima y reserva de la información aportada por la víctima.
- Oralidad y desformalización.
- Acceso incondicionado a los recursos del Programa Especial, con prescindencia de la cooperación del consultante en la investigación.<sup>36</sup>

Asimismo, el Programa tiene como principales objetivos:

<sup>36</sup> Este último punto muestra cómo, el Programa que elabora el presente protocolo, considera como cotidiano ese posible “divorcio” mencionado en el capítulo precedente. Esto es así ya que contemplan dentro de sus principios de actuación la posibilidad de acompañar con los recursos y posibles derivaciones, a aquellas víctimas que no cooperen con la investigación que lleva adelante la fiscalía, o incluso no quieran continuar con la causa penal.



- Contribuir al empoderamiento de la víctima, brindando herramientas que permitan fortalecer su relato
- Garantizar el derecho al efectivo acceso a la justicia a través del acompañamiento de un equipo interdisciplinario,
- Coordinar con organismos e instituciones para brindar apoyo terapéutico, económico, social, habitacional y/o educativo
- Colaborar con la UFEM y el MPF para realizar intervenciones en búsqueda de evidencia que de sustento a la acusación en el marco del proceso penal (*colaborar con la teoría del caso*<sup>37</sup>)
- Elabora el plan de formación y capacitación para los y las integrantes del Ministerio Público Fiscal sobre el abordaje a víctimas de Violencia de Género.

Por último, el Protocolo, elaborado por el Programa, contempla también cuál es la metodología de intervención deseable para los casos en los que intervengan. Es decir, habla de las *estrategias de intervención* que deberán llevar adelante las profesionales del equipo. Estos son:

- a) Abordaje interdisciplinario: de tres tipos: información jurídica, promoción e inclusión social y acompañamiento psicológico. Para ello, el equipo estará conformado por abogadas/os, trabajadoras/es sociales y psicólogas/os. Los saberes y las prácticas profesionales serán complementarios, enriqueciéndose mutuamente en la interacción, partiendo del análisis de cada caso en particular y no desde la mirada fragmentada de cada disciplina.
- d) Entrevista a la víctima: el/la profesional responsable del caso pactará con cada una de las víctimas entrevistas en días y horarios determinados con el objeto de evitar toda espera innecesaria y evitar situaciones *revictimizantes*. Las entrevistas tendrán por finalidad informar sobre los derechos que le asisten en calidad de víctima
- e) Diagnóstico situacional El/la profesional que intervenga en el caso deberá identificar las necesidades de las víctimas a nivel individual, familiar, institucional y comunitario a los efectos de proponer líneas de acción y coordinar las intervenciones en función de las mismas. Se deberán

---

<sup>37</sup> Mis cursivas

considerar las posibilidades de intervención, procurando no someter a la víctima a instancias para las cuales no se encuentre preparada dada la particular situación de vulnerabilidad y de riesgo en la que podría estar inmersa. De acuerdo a la evaluación que de allí surja, se podrá aportar información a los actores/instituciones intervinientes que redunde en beneficio de la víctima.

- g) Acompañamiento del caso en el marco del proceso penal: Las/los integrantes del equipo interdisciplinario deberán realizar un seguimiento de los avances del proceso penal a los efectos de dar a conocer dicha información a la víctima y garantizar, de ese modo, la eventual participación en los actos procesales a los cuales se encuentra habilitada según la normativa correspondiente. La anticipación de esta información permitirá que la víctima ejerza su derecho a participar en el proceso y garantizará el efectivo acceso a la justicia.
- h) Revisión interna de las intervenciones: El equipo profesional del Programa Especial realizará reuniones semanales con el objetivo de analizar las intervenciones realizadas
- i) Finalización de la intervención: En aquellos casos en los que la víctima no desee la asistencia y acompañamiento que ofrece el Programa Especial, se evaluará el archivo del caso, sin perjuicio de hacerle saber a la parte interesada que podrá requerir la asistencia a futuro, durante la tramitación de la denuncia.

Es interesante observar las implicaciones que tiene este Protocolo a la hora del trabajo con víctimas, a la luz de la idea de “victimizadores” de Barthe (2018) como fue mencionado al inicio del presente apartado. Al respecto, el autor afirma:

*“Uno no se convierte en víctima solo; uno sólo se convierte en víctima en la interacción con otros actores. Entre estos actores se encuentran, por supuesto, en primer lugar otras víctimas potenciales, con quienes el intercambio de experiencias suele facilitar la labor de realización de la condición de víctima. Pero entre estos actores también hay quienes pueden ser descritos como "victimizadores". Estos últimos intentan construir vínculos causales que hagan visibles*

*los efectos de una causa y así pueden contribuir a la formación de un grupo de víctimas (...) Casi se podría definir la victimización como el encuentro entre victimizadores interesados en un problema que están tratando de denunciar y víctimas potenciales, directamente afectadas por ese mismo problema.” (Barthe, 2018 p. 6)*

En la misma línea, muchos estudios han analizado los dispositivos que actúan como certificantes de la condición de víctima a la vez que jerarquizan el sufrimiento padecido y valoran el riesgo (Beck, 1986, Douglas 1987)<sup>38</sup>. Esta evaluación del riesgo y vulnerabilidad se puede observar en el “Diagnóstico situacional” de la metodología de intervención del Protocolo anteriormente expuesto. Se pretende allí que las profesionales certifiquen o no esta condición a partir de lo cual se organizará la estrategia en relación al tipo de asistencia que necesita la víctima.

Esto tiene incumbencia en función de que se identifica ese mismo ejercicio de “gestión del riesgo” desde el dispositivo judicial, donde las profesionales pueden delimitar formas de inclusión y exclusión en distintos dispositivos de atención, definir cuándo es propenso que se avance en una causa y cuando no, y si la persona necesita un botón antipánico o una perimetral definiendo cuando hay una “situación de vulnerabilidad” o de “riesgo” (Iyer, et. al. 2012). Asimismo, vemos cómo en muchos casos la propia damnificada rechaza la victimización y la gestión de su situación de riesgo, en función de que, por ejemplo, no quieren avanzar con la causa y no se sienten reflejadas en un informe que muestra que están en una situación de violencia. Sin embargo, la autonomía relativa de los equipos y de los abordajes en el caso a caso, provocan que las estrategias de intervención sean diversas, y dependan de la orientación de cada equipo y, la mayoría de las veces, de las personas intervinientes.

---

<sup>38</sup> “Riesgo” como categoría de trabajo experto surge de los estudios sobre catástrofes entre la década del 70 y mediados de los 80 (Beck, 1986, Douglas 1987). Estos ilustran cómo se desarrollan, como respuesta a las catástrofes, dispositivos, organizaciones, e instituciones que intervienen sobre poblaciones afectadas, y potencialmente con riesgo a padecer catástrofes: “el gobierno a través de las catástrofes” “el gobierno humanitario” (Fassin, 2016). Otra línea de trabajos que discuten con Ulrich Beck, estudian la manera en la que las catástrofes como resultado de la movilización del trabajo experto victimizan, pero a la vez que uno analiza el efecto de las catástrofes y las poblaciones que sufren, lo que encuentra es más bien procesos de negociación donde las formas de intervención victimizante de los expertos ligados a la gestión del riesgo, son apropiadas por las poblaciones locales de una manera distinta. Miran cuáles son, frente a las formas de intervención de la gestión del riesgo, las estrategias de negociación de las poblaciones locales y cómo aparece ahí transformada la categoría de víctima.

Al respecto, muchos autores hablan de cómo la acción de los expertos y profesionales vinculados a las víctimas contribuye a delimitar escalas, gradaciones e intensidades diferentes de daño al evaluar, controlar y dimensionarlo a través de formas de medición (Houdart et al. 2015; Zenobi, 2017a). Esto se puede observar en oficios e informes de riesgo que producen las profesionales tendientes a delimitar la intensidad del daño sufrido, si existiera un trauma a partir de la violencia padecida y eso luego es determinante para el avance o no de la causa penal, o para la búsqueda de reparación.

## **3.2 Las profesionales del equipo**

### **3.2.1 Las trayectorias feministas**

Como en el caso de la Dirección, también se observa que más allá de las diferentes disciplinas, se podría decir que hay cierto perfil común en las trabajadoras del Programa y tiene que ver con el compromiso con la tarea. Como mencioné en el capítulo anterior, el supuesto a la hora de enfrentarme con el campo, quizás por mi rol de trabajadora de la Dirección, era que había una búsqueda consciente desde la Dirección por contratar profesionales con cierto compromiso militante con la tarea. Sin embargo, como vimos, la principal búsqueda de recursos humanos tiene que ver con las profesiones de las que provienen -específicamente del derecho, la psicología y el trabajo social- y en segundo lugar con la capacidad de *escucha* que como hemos visto en el primer capítulo, representa una característica de valor en las profesionales más allá de sus disciplinas para la Dirección de Orientación a Víctimas.

No obstante ello, a partir de mi participación en las reuniones del Programa de Género, las supervisiones y las entrevistas a las profesionales y coordinadora, aparece, entre las protagonistas, una idea de compromiso con la tarea que no necesariamente tiene que ver con lo *político* entendido como militancia partidaria.

Para ello fue fundamental realizar el ejercicio que proponen Boivin y Balbi (2008) de no asumir lo “político” como un a priori analítico sino intentar considerar a las propias categorías de los actores con los sentidos atribuidos por los mismos. Al respecto, en la entrevista con la CP planteé la siguiente pregunta:

P -¿Creés que hay un denominador común en términos de compromiso en las profesionales del equipo?

CP: *-Pienso que hay características particulares. Algunas personas identifican el trabajo como una asistencia, como un "ayudo a esta persona que ha sido vulnerada en sus derechos, pero no me conmueve lo político, no pienso en lo macro o que esto se traduce en una vulneración más a nivel político, económico, social, no, sino que es como 'pobrecita esta persona que está atravesando esto' y yo actúo desde mi buena fe ahí asistiendo. Si vos me decís que hay mucha población más con contenido ideológico en el acompañamiento, sí, la hay, de género la hay. No todas tienen el mismo sentido ideológico, pero por ahí hay cierto compromiso. Ojo, si no es por lo ideológico, compromiso hay igual, pero desde distintos lugares.” (Entrevista con la CP, julio 2020)*

El compromiso para ellas pareciera significar diferentes cuestiones: un compromiso desde el feminismo –que a su vez la mirada feminista de cada profesional tiene que ver con su trayectoria personal y a veces militante-, una apuesta por reivindicar los dispositivos estatales, un sentido del deber sobre la tarea, en relación a una creencia en lo público como garantía de derechos. Pero también reconocen como compromiso a aquellas que actúan desde el lugar más “asistencialista” y de “*pobrecita esta persona está atravesando esto*”.

Las trayectorias personales influyen necesariamente en el compromiso y la perspectiva desde la cual se posicionan las profesionales (Zenobi y Pereyra, 2016), a la vez que determinan el modo en el que consideran a las “víctimas”. Asimismo,

en una relación dialéctica, el tipo de víctima con el que trabajan también determina su posicionamiento frente a las mismas<sup>39</sup>.

En el primer capítulo del presente trabajo, expuse cómo es, a grandes rasgos, la composición de las trabajadoras de la Dirección en cuanto a sus disciplinas, trayectorias y compromiso. Es útil para pensar en términos de compromiso la propuesta de Vecchioli de “modelo de profesional comprometido” representante de la virtud moral de la profesión, que participa de la vida académica y que, al mismo tiempo, es un experto legitimado para desarrollar sus tareas en los dispositivos de víctimas. Según ella, estos profesionales comprometidos tienen un doble registro: el de atribuirse ser la conciencia moral de la profesión, y de ser los agentes cuya expertise profesional les permite ingresar a espacios privilegiados de actuación profesional (Vecchioli, 2009).

Tal como fue expuesto anteriormente, dentro de los equipos, no obstante, aparece, en palabras de las propias profesionales, un denominador común que tiene que ver con sus expectativas con la *erradicación de la violencia de género* y cómo su tarea contribuye a tal fin. Esto es visto por todas desde una perspectiva autoasumida como feminista, es decir que se comprometen en su labor cotidiana con una causa. Es interesante para pensar en este tipo de adscripción desde las distintas perspectivas feministas, que incluye formación y en algunos casos una trayectoria militante, el concepto de “feminismo profesionalizado” (Álvarez, 1998). Sonia Álvarez utiliza dicho término para denominar a los grupos de feministas que en su calidad de especialistas en género o “generólogas” protagonizan políticas enfocadas en los llamados grupos vulnerables -como las mujeres pobres y los grupos subalternos racializados. En este caso, esa especialización en temáticas de género se combina con la expertise de las distintas profesiones.

---

<sup>39</sup> Esto se observa por ejemplo en el trabajo de las profesionales del equipo de Trata y Explotación quienes, al igual que lo que ocurre en la mayoría de los dispositivos estatales anti-trata surgidos en las últimas décadas (Daich, 2015; Varela 2012), se enmarcan desde el abolicionismo en relación a la llamada “prostitución”. Esta perspectiva, que hoy es hegemónica dentro del Estado, muchas veces instala el planteo de que el consentimiento de las víctimas debe ser irrelevante en la legislación sobre trata de personas (Morcillo y Varela, 2017). Ello influye directamente en la perspectiva con la que abordan estas profesionales a las mujeres con las que trabajan, ya que muchas veces las consideran víctimas de trata cuando las propias mujeres rechazan esa etiqueta y se consideran trabajadoras sexuales. Pensándolo en términos del debate agencia-pasividad, el abolicionismo colocaría en el centro la pasividad, a partir de no reconocer la autonomía en estas personas cuyo consentimiento no sería libre, sino viciado.

Con un propósito descriptivo, se podrían definir tres grandes grupos dentro de las profesionales feministas del Programa<sup>40</sup> distinguibles en función del tipo de acompañamiento que llevan adelante y sus expectativas en relación a las causas.

En el primero, se podría ubicar a aquellas profesionales que tienen expectativas de resolución de las causas penales, esperando las condenas más altas posibles para los agresores, y que consideran que la labor de la Dirección debe orientarse en función de aportar insumos para que las causas lleguen a una sentencia condenatoria para el agresor. Ello a su vez coincide con quienes poseen más experiencia y trabajo con los colectivos de diversidad sexual y de géneros. Algunas de las profesionales que podrían formar parte de este grupo se consideran autonomistas o de izquierda, en relación a su adscripción político-partidaria. Dentro de este grupo podríamos ubicar por ejemplo, a quienes son abolicionistas en cuanto a la prostitución y a la vez son quienes suelen llevar los casos de travestitransfemicidios, y casos derivados de la homolesbotransfobia.

Para este grupo lo más importante en una intervención es la construcción de insumos que justifiquen una condena alta para el agresor de la víctima en cuestión. El *“buen acompañamiento”* es aquel que se centra en las características del caso, - subordinando a un segundo lugar las condiciones y características de la víctima- para generar la mayor solidez argumentativa posible en pos de conseguir la pena más alta para el agresor. Por eso a este grupo lo denominaremos “Feministas centradas en el caso”

En un segundo grupo podríamos ubicar a aquellas profesionales cuyo feminismo está asociado al ámbito académico y está fundamentalmente centrado en lo *psí*. Algunas de estas profesionales son las que llevan más tiempo trabajando en el Poder Judicial y se aferran a la categoría de víctima aceptada por el propio sistema ya que la consideran una conquista en relación a una época en la que la idea de víctima estaba invisibilizada y, por lo tanto, los derechos de las personas vulnerables también.

---

<sup>40</sup> Esta clasificación es a grandes rasgos. La intención no es generalizar las características y a partir de allí sacar conclusiones sino que dicha clasificación sirva a modo ilustrativo para pensar en las trayectorias de las profesionales y desde dónde aportan a la construcción de distintas nociones sobre la idea de víctima.

Al igual que el primer grupo, tienen posturas con altas expectativas en el castigo de los agresores en las causas penales, pero a diferencia de éstas, su estrategia de acompañamiento está centrada en las características y condiciones de la víctima para demostrar las violencias padecidas y así conseguir condenas altas. En definitiva podríamos decir que este grupo de profesionales no hablan tanto del “lenguaje del caso” sino el “lenguaje del trauma” (Zenobi, 2020). Creen que la función de la Dirección es entonces la de movilizar y exponer el sufrimiento de las víctimas como prueba del delito y así lograr la mayor sentencia condenatoria posible.

Tanto en el primer como el segundo grupo, una causa que no logra llegar a una condena alta o que termina en absolucón representa una intervención insatisfactoria. Pero mientras que para las primeras la forma de obtener éxito en el proceso penal estaría dado por la solidez argumentativa de informes y oficios en relación a los hechos y el contexto de la causa, para las segundas está en la capacidad de conmover y generar empatía en los jueces y operadores judiciales que toman las decisiones. En razón de ello denominaremos a este grupo “Feministas centradas en el trauma”

Por último, el tercer grupo de feministas es aquel que considera que un “buen acompañamiento” está asociado a escuchar los deseos de las víctimas y que centra sus intervenciones en conseguir la mayor satisfacción posible en términos reparatorios independientemente de la cuantía de la pena.

La formación de estas feministas se desarrolló dentro de la militancia gremial en Ministerios del Poder Ejecutivo, o político-partidaria en organizaciones sociales asociadas al kirchnerismo. Este grupo de profesionales, tiene una mirada más centrada en el rol de la mujer y la defensa de sus derechos y es quizás el mayoritario dentro de la Dirección, y del Programa de Género. Muchas de ellas tienen una mirada “garantista”<sup>41</sup> de los procesos penales.

---

<sup>41</sup> Se toma la idea de garantismo de quienes interpretaron a Ferrajoli, jurista italiano que en 1989 acuñó el término, en tanto “el derecho como garantía de limitación al poder”. Esto es: el derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos. Hoy por hoy se dice coloquialmente “garantista” a quienes velan por los derechos de todas las personas



Mientras que para las “feministas centradas en el caso” y las “feministas centradas en el trauma” la reparación hacia las víctimas va necesariamente de la mano de una sentencia condenatoria alta para sus agresores, para este grupo, la reparación toma un carácter integral abarcando no sólo los aspectos de la causa judicial sino también aspectos de índole emocional, socioeconómica, comunitarias, entre otras. Es por ello que este grupo muchas veces intenta sacarle peso a la resolución de las causas penales, haciendo foco en otros modos de reparar el daño sufrido. Denominaremos a este grupo “Feministas centradas en el deseo de la víctima”

Tabla 1

	<b>Expectativa en relación a la pena</b>	<b>Objetivo de la intervención</b>	<b>Disciplinas mayoritarias de las que provienen</b>	<b>Trayectorias</b>
<b>Feministas Centradas en el caso</b>	La más alta posible	Construcción de insumos argumentativos	Trabajo social	Activismo de géneros y organizaciones de izquierda
<b>Feministas centradas en el trauma</b>	La más alta posible	Exposición del sufrimiento de la víctima	Psicología	Feminismo académico y activismo de DDHH
<b>Feministas centradas en el deseo de la víctima</b>	No es lo más relevante	Escucha y reparación integral del daño	Abogacía, antropología y trabajo social	Militancia gremial en el Poder Ejecutivo y partidaria en el kirchnerismo

afectadas en un proceso penal (tanto damnificados como imputados), y por el “debido proceso”. También se suele usar con un valor negativo en los medios de comunicación o dentro del campo jurídico para mostrar que en realidad son garantistas quienes velan por los derechos de los imputados por sobre los de las víctimas. Esta idea de la garantía de los débiles frente a los más poderosos es compartida en gran parte por el peronismo y orientaciones progresistas.

### 3.2.2 Las disciplinas

Como fue introducido en el primer capítulo, aparece una disputa entre las disciplinas que atraviesa todos los equipos: ¿hay que diferenciar las tareas de las profesionales de cada disciplina, o “todas pueden hacer todo”? Ya hemos repasado la postura de la Dirección y la Coordinación del equipo de género, pero es interesante observar qué valoración tienen las propias profesionales de los equipos sobre el trabajo interdisciplinario.

Particularmente en relación al rol que ocupa el trabajo social, una de las profesionales entrevistada comentaba que se originó en 2016 un espacio informal donde todos los trabajadores y trabajadoras sociales de la Dirección de Orientación a Víctimas se juntan hasta el día de hoy para discutir entre otras cosas cuál es el rol deseable de su disciplina en su quehacer cotidiano. Originalmente, este espacio fue convocado por la Secretaría Ejecutiva, que les solicitó a todos los trabajadores sociales la elaboración de un “recursero”<sup>43</sup> para que todos los equipos y la mesa de entradas pudieran acceder y realizar derivaciones.

Frente a ese pedido, aparecieron distintas posturas en relación a la respuesta: por un lado, algunas trabajadoras sociales que rechazaban la idea de recursero porque suponía una mirada puramente *asistencialista* que cristalizaba su disciplina en el rol históricamente asignado al trabajo social de “ayuda” en lo inmediato o la urgencia. Por otro lado, otro grupo de profesionales creía que sí había que hacerlo, pero con un trabajo más profundo, sobre todo, con los trabajadores de la Mesa de Entradas para pensar *derivaciones responsables*, “y que no sea solo un excel que entrás y ya”. Luego ese espacio se sostuvo y comenzaron a darle forma a un planteo que

---

<sup>42</sup> Cuadro de elaboración a partir de lo relevado en entrevistas, reuniones de equipo, supervisiones y conversaciones informales con las profesionales y trabajadoras del Programa entre el mes de diciembre del 2018 al mes de junio del 2021.

<sup>43</sup> Las profesionales de los equipos de atención a víctimas utilizan mucho el concepto de recursero para referirse a una herramienta donde hay espacios información para acceder a espacios psi, hospitales, comisarías de la mujer “amigables” y oficinas del Estado donde realizar distinto tipo de trámites relacionadas a problemáticas sociales.

tenía que ver con la discusión sobre los aportes que realiza el trabajo social dentro de la Dirección en general y el Programa en particular y dentro del sistema de administración de justicia.

*“Nosotros somos todos equipos interdisciplinarios que trabajamos haciendo tareas bastante similares, que después podemos profundizar eso como para ver si es positivo siempre o no, pero tenemos sueldos muy dispares porque estamos en distintas categorías. Eso tiene que ver con cómo fue concebida la Dirección desde un principio, cuáles eran los objetivos o las tareas que iban a tener las psicólogas, cuáles eran las tareas que iban a tener las trabajadoras sociales y ni qué hablar las abogadas, que son como las tres disciplinas que iniciaron la Dirección”* (Entrevista con una de las Trabajadoras sociales del Programa -en adelante TSP- enero 2021).

Es decir, que a la jerarquización disciplinar ya mencionada, se le suma una cuestión remunerativa que no se da sólo en la Dirección sino en todas las áreas del Poder Judicial. Esto es para las y los trabajadores sociales una cuestión de reconocimiento sobre su tarea:

*“Se reproduce algo que también tiene que ver con la historia del trabajo social, que es invisibilizarlo como un rol de asistencia y de hacer un aporte totalmente mínimo, priorizando otras disciplinas ante el abordaje. Entonces hicimos una presentación en la Dirección sobre un pedido de recategorización para tener otras condiciones laborales, no solo por el ingreso económico sino más bien por el reconocimiento de nuestra disciplina en la Dirección”* (Entrevista TSP, enero 2021).

A medida que pasó el tiempo, y sobre todo, a partir de las quejas de las propias profesionales (las psicólogas porque querían hablar con las fiscalías, las abogadas y trabajadoras sociales porque querían tomar entrevistas con las víctimas) eso se fue modificando y hoy se podría decir que *“todas hacen todo”*. Sin embargo, muchas de las profesionales –sobre todo aquellas que llevan más años trabajando en el poder judicial y particularmente las psicólogas-, no terminan de coincidir con que esta

modalidad sea la mejor. Según ellas, es importante mantener la especificidad para mantener la *calidad* de las intervenciones, aunque otras interpretan que se trata de cierta desconfianza en que el resto de las disciplinas pueda abordar a las víctimas correctamente.

Esta discusión acerca de la especificidad vs. la homogeneización del trabajo hacia el interior de los equipos, desnuda tensiones entre derecho, psicología, y trabajo social que son propias del campo jurídico. Dentro de este campo -privilegiado además en cuanto a objetivar la categoría de víctima- la división del trabajo entre los agentes y las instituciones comprometidas se configura muchas veces en términos de disputa (Bourdieu y Teubner, 2000):

*“Hay una disputa de hegemonía de profesiones. Eso sí, eso se pone en juego. O sea, estamos en un lugar en donde el espacio hegemónico es el Derecho. ¿Está mal que lo sea? No, probablemente no. Ahora, en la DIRECCIÓN no tiene por qué ser así. Después, en la Fiscalía, por ejemplo, la OVD<sup>44</sup> es del Poder Judicial, de la Corte y, sin embargo, son equipos interdisciplinarios que toman la entrevista. Eso podría replicarse en las Fiscales, y ahí la hegemonía cambia, en el sentido de la orientación de la investigación, que tiene que ser un fiscal y el fiscal tiene que ser abogado. Eso es una cosa, pero así como a un auxiliar abogado lo ayuda, también lo puede auxiliar un psicólogo en la investigación y en la orientación en la confección de informe”* (Conversación informal con una de las Psicólogas del Programa. Febrero 2020).

Las disciplinas “secundarias” cuestionan a su vez la hegemonía del derecho, teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo de atención a víctimas. Sin embargo, dentro del MPF y por la tradición de lucha por los derechos humanos en la Argentina, el rol de los y las abogadas defensoras de causas de lesa humanidad y la historia militante en relación a la dictadura militar ha aportado una legitimidad en el ejercicio de la profesión que traspasa las fronteras de lo estrictamente jurídico-

---

<sup>44</sup> Oficina de Violencia Doméstica

penal. Esta legitimidad se ve sobre todo reflejada en las jefaturas de las Procuradurías especializadas y Direcciones dentro del MPF, quienes a su vez tienen el capital moral acumulado para elaborar políticas -en este caso para las víctimas- en condición de “expertos” (Vecchioli, 2009)

### 3.2.3 Profesionales vs. Trabajadoras

Otra de las tensiones que aparecen en todos los equipos y, en particular, en el Programa de Género, surge a partir de la pregunta por si todas están en condición de *acompañar*. Para Laura y la CP, como hemos detallado anteriormente, la principal cualidad de una trabajadora de la Dirección debe ser la capacidad de *escucha* del dolor ajeno. Sin embargo, dentro de los equipos surgen discusiones en las que las diferentes disciplinas cuidan sus “incumbencias” o su *especificidad* y miran con recelo que una estudiante o incluso una profesional de alguna disciplina que no es de alguna de las tres principales, tomen entrevistas, acompañen a las damnificadas a declarar, o participen de un juicio.

Como ya se dijo, en un comienzo, la Dirección estaba compuesta por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social. Pero el aumento de casos y la necesidad de ampliar la planta de trabajadores hizo que se contraten, en función de los recursos humanos disponibles, muchos trabajadores y trabajadoras que, o bien están estudiando alguna de esas carreras, o directamente no cursaron estudios superiores. Eso provocó que cada equipo desarrollara distintas estrategias para incluir en los acompañamientos a esas *trabajadoras*<sup>45</sup>.

En el caso del Programa, la coordinadora realizó una división de tareas en la que las *trabajadoras* se dedican al estudio de los legajos, la certificación y, según su trayectoria dentro de la Dirección de Orientación a Víctimas, a realizar algunos acompañamientos. Hubo, según la CP, una adaptación a esa realidad con la incorporación de las *trabajadoras* que modificó la manera original en la que derivaba los casos para su seguimiento, lo cual se agravó por el aumento desmedido de casos de los últimos años. En un comienzo, explicaba ella, por ejemplo, se derivaba

---

<sup>45</sup> Así le llaman a las “no profesionales”

por temática, y los casos de abuso sexual los tomaba una psicóloga que había trabajado en un hospital público con víctimas de violencia sexual, a la vez que los casos de violencia intrafamiliar los tomaba una psicóloga experta en violencia doméstica.

A su vez, así como considera que no hace falta ser psicólogo para determinar si una persona está en condiciones de declarar o para calmarla si está angustiada, considera que no hace falta ser abogada para poder acompañar dando información sobre la causa penal. Según ella, existe una base de conocimiento general que le da el oficio y la práctica laboral. Sin embargo, dentro del equipo aparecen cuestionamientos -sobre todo de parte de las psicólogas- en relación al rol de las *trabajadoras*, ya que consideran que no es responsable por parte de la coordinación mandar a una persona sin título a acompañar una declaración, elaborar un informe o entrevistarse con una fiscalía. Eso, según ellas, lo tienen que hacer las *profesionales*. Estas discusiones aparecen sobre todo en los espacios de supervisión de equipo y en las reuniones semanales cuando se asignan los casos. Según cuenta la CP:

*“Cuando se incorporó el primer trabajador al equipo igual creo que lo que fue una falla es pensar que, como lo hacía bien, lo desarrollaba bien, todos estaban en condiciones de trabajar de la misma manera. En realidad, lo que tendríamos que haber dicho es que todos estamos en condiciones de acompañar. Ahora, depende del caso, la singularidad, tener que intervenir o no un profesional y qué profesional también”. (Entrevista con la CP, julio 2020)*

“

Algo similar sucede con el trabajo social dentro del equipo. Al respecto se pregunta la TSP:

*“¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Por qué una trabajadora social o una antropóloga no puede acompañar un proceso penal? Digo, ¿quién dice que no? Por supuesto, quien dice que no, es la profesión que más peso tiene dentro del Sistema de Administración*

*de Justicia, pero bueno, esa es la discusión cotidiana que intentamos dar. Y en esa discusión estamos, cuál es el rol específico del trabajo social*” (Entrevista TSP, enero 2021).

Describir estas disputas entre las profesionales y trabajadoras intentan ilustrar las diferentes tensiones que aparecen dentro del campo jurídico que no se ciernen únicamente a lo disciplinar. Como hemos visto, las diferencias en las trayectorias y el compromiso con una causa como la erradicación de la violencia de género, como así también las diferentes posiciones en relación a lo profesional son variables subjetivas que entran en disputas y construyen distintas ideas de víctima.

### **3.3. Compromiso y nociones de víctima**

Como fue mencionado anteriormente, los aportes de autores como Barbot y Dodier nos permiten pensar desde una perspectiva de corte interaccionista y procesual hacia el interior de los propios dispositivos. Esto es, considerarlos entes heterogéneos, compuestos por una multiplicidad de componentes y variables en el tiempo. Los sujetos que los integran pueden percibirlos como pura coerción, o también pueden apropiarse de él e inducir modificaciones (Barbot y Dodier, 2013).

En este sentido, las trayectorias personales, el accionar cotidiano de las profesionales en el seguimiento de casos, como así también la disputa entre los saberes y disciplinas que operan dentro del dispositivo, contribuyen a la idea de que no existen dispositivos sin disposiciones (Fassin, 2016). Es decir, imponen formas normativas de conducta y comportamientos pero también son discutidos, impugnados, cuestionados. Son producidos y un producto de luchas en un campo donde hay agentes en conflicto que tienen diferentes capacidades para imponerse.

Es en ese proceso de estructuración, sumado al proceso de producción social de la víctima (Barthe, 2017, Schillagi 2017) en el que se construyen distintas nociones de víctima que pueden o no condecir con la que se plantea la Dirección en su Carta Orgánica. ¿Se puede pensar que sólo los dispositivos como instituciones y entes

abstractos son los que configuran socialmente la idea de víctima? O son las profesionales que integran y habitan esos dispositivos las que, desde sus trayectorias personales y políticas –sus técnicas morales- (Gatti, 2017) contribuyen a la consagración de su condición de víctima (Dodier, 2009). ¿Es la relación entre ambas cosas? ¿Cómo contribuye la propia idea de víctima y la agencia que tienen quienes son efectivamente damnificados?

Así, podemos pensar cómo las profesionales y *trabajadoras* de los distintos grupos y disciplinas a partir de sus trayectorias y su compromiso, movilizan distintas ideas de *víctima* en su accionar cotidiano, que se cristaliza en cómo llevan adelante los acompañamientos, cómo construyen la prueba, qué eligen poner en los oficios y en los informes y cuál es la orientación que le dan a la damnificada en relación a la causa penal.

Como ya hemos observado, las disputas dentro del campo jurídico no se reducen únicamente a lo disciplinar. El posicionamiento político en cuanto al rol que debe cumplir el dispositivo y la perspectiva feminista con la cual trabaja cada grupo de profesionales, nos permite empezar a dibujar ciertas nociones de víctima movilizadas. Para ello, nos remitiremos a la clasificación de las feministas del Programa que desarrollamos en el apartado 3.2.2 de este trabajo, en la que, en términos de tipos ideales y para facilitar el análisis, ubicamos tres grandes grupos distinguibles en función del tipo de acompañamiento que llevan adelante y sus expectativas en relación a las causas (ver cuadro 1).

El primer grupo –feministas centradas en el caso- está compuesto por las feministas profesionales cuyo objetivo es construir los mayores elementos contextuales del caso para poder conseguir penas altas para los agresores. El segundo grupo –feministas centradas en el trauma- es aquel que centra su estrategia de acompañamiento en las características y condiciones de la víctima para demostrar las violencias padecidas, de modo tal de conmover a los operadores judiciales y conseguir condenas cuantiosas. El tercer grupo –feministas centradas en el deseo de la víctima- se caracteriza por buscar en sus intervenciones, no la pena más alta, sino la mayor satisfacción posible para la víctima en términos de reparación, muchas veces, independientemente de la causa penal.



Teniendo en cuenta esta clasificación, intentaremos realizar un entrecruce entre el tipo de compromiso que desde el feminismo expresa cada uno de estos grupos, y los tipos de víctima que se construyen en sus intervenciones.

Para empezar se observa que las “feministas centradas en el trauma” consideran que la idea aceptada por el Poder Judicial de lo que es una víctima, tiene un valor en sí mismo. Esto es así, ya que para ellas hablar de “víctima” supone una avance en relación a lo que sucedía hasta hace algunos años, cuando en vez de hablar de víctimas –y con ello reconocerlas, y legitimarlas como tales- solo se hablaba en términos de “testigos”. Para este grupo, que lleva años trabajando en el Poder Judicial y entrecruzando sus saberes “psi” dentro del campo jurídico, esta categoría resulta una conquista y se aferran a esa idea, que encierra no sólo una noción de vulnerabilidad y pasividad sino también una idea de inocencia y pureza de las víctimas. A partir de ello, sus intervenciones van en el sentido de reforzar esa noción de “buena víctima”, aceptada por el poder judicial, para construir “victorias” en términos de la resolución de la causa. Para eso, hacen hincapié en que las víctimas muestren el daño, movilicen sus emociones y usen su cuerpo como instrumento de reivindicación, lo que Fassin denomina “biolegitimidad” (Fassin, 2016). Movilizan ideas de “buenas víctimas” porque eso es lo aceptado y lo conquistado, y con eso sí puede lidiar el poder judicial. Estas estrategias que movilizan las profesionales están asociadas a una idea de éxito en relación al castigo (Pita, Pereyra 2020) y podríamos asociarlo a un aparente pragmatismo en relación a lo que sirve y lo que no, en tanto y en cuanto el principal objetivo pareciera ser lograr una condena alta para los agresores.

El grupo de las feministas centradas en el trauma podría relacionarse a su vez con aquellos que desde las disciplinas “psi” se comprometieron con las causas de DDHH de la última dictadura militar en Argentina, quienes, al abordar la situación de las víctimas de terrorismo de Estado recurriendo al vínculo entre trauma e impunidad, contribuyeron a la inscripción de las mismas en una serie y una historia local en la que el Estado adquiere un papel central como actor de reparación (Zenobi, 2020).

De hecho, algunas de las feministas-profesionales que componen este grupo, además de trabajar en Hospitales públicos en servicios de salud mental, trabajaron o fueron partícipes del Centro Ulloa. Este dispositivo fue creado en 2010 como un espacio específico para el trabajo en salud mental con las personas que sufrieron las consecuencias de la dictadura, entrecruzando procesos jurídicos y procesos psíquicos para el abordaje de las víctimas (Zenobi, 2020).

Esta búsqueda de la articulación entre procesos jurídicos y procesos psíquicos, con el “éxito” del aspecto penal centrado en el castigo del agresor, se observa en numerosas reuniones de equipo a las que pude asistir, como así también supervisiones en las que se condensaban los debates entre los distintos grupos de profesionales.

Específicamente en una de las supervisiones, surgió un debate en torno a cómo debía ir vestida una damnificada a la audiencia de juicio donde iba a declarar. Mientras las feministas ubicadas en el grupo denominado “centradas en el caso” y aquellas “centradas en el deseo de la víctima” alegaban que no importaba la apariencia de la damnificada sino que la fiscalía llevara pruebas lo suficientemente contundentes como para lograr una condena, las feministas del tercer grupo sostenían que si la víctima se “*vestía bien*” podría causar una mejor impresión y generar empatía en los jueces. Esto, si bien a simple vista puede parecer superficial, muestra la importancia que se le da a lo performático de la víctima, a cómo se muestra y moviliza tanto sus sentimientos como su cuerpo como rastro y prueba del delito.

Retomando lo dicho anteriormente, se puede asociar estos posicionamientos de las “feministas centradas en el trauma” con un “pragmatismo” de la causa penal, en donde se coloca a la víctima y su cuerpo como un instrumento en el que quedan rastros de las violencias padecidas, y se considera que ello tiene una potencia privilegiada en relación a la posible resolución del proceso penal.

Por otra parte, tanto el grupo de las “feministas centradas en el caso” como el de las “feministas centradas en el deseo de la víctima” consideran que el lugar ganado en relación a la idea de “víctima” dentro del campo jurídico, no invalida cuestionar al

dispositivo en general y avanzar sobre ciertas cuestiones que hacen a repensar y ampliar la categoría como hoy se reconoce.

Al respecto, las “feministas centradas en el caso”, cuya trayectoria está asociada al activismo de géneros y las organizaciones de izquierda, por ejemplo, jerarquizan la relación con los familiares de víctimas de trans y femicidios en la pelea por el reconocimiento de su rol de víctimas secundarias y para que se les brinde apoyo y acompañamiento desde distintos dispositivos. Asimismo, en los casos que se configuran como causas públicas, estas profesionales aportan sus saberes produciendo material teórico –como por ejemplo ponencias y artículos<sup>46</sup> sobre el acompañamiento en el travesticidio de Diana Sacayán-, movilizándolo en las marchas junto a familiares y organismos y dando notas en los medios de comunicación para masificar los reclamos. Es decir, movilizan categorías propias de sus disciplinas y su expertise feminista para aportar a la construcción de las causas públicas y el reconocimiento de las víctimas como tales (Schillagi, 2017; Zenobi, 2014).

Al indagar en las nociones de víctima que movilizan y construyen las “feministas centradas en el deseo”, encontramos que muchas veces éstas se corren de la idea de “vulnerabilidad” al momento de tener que dar cuenta de las violencias padecidas de las personas damnificadas, aún corriendo el riesgo de sacarle peso a la demanda, para ofrecer otras variables –otras ideas de víctima- frente a las cuales la justicia también debería poder dar respuesta.

Nuevamente surge la idea de autonomía y del doble mandato de las profesionales de la Dirección. Las feministas de este grupo, mayoritario dentro de la dirección, pueden ubicarse más claramente como aquellas que buscan en sus intervenciones que las “víctimas dejen de ser víctimas”. Es decir, como ya hemos mencionado, aparece una encrucijada moral en la que se opta por construir nuevos “*proyectos de vida sin violencias*” aún cuando ello suponga restarle importancia a la resolución de

---

<sup>46</sup> El acompañamiento a los familiares de Diana Sacayán en la causa por su travesticidio fue paradigmático dentro del equipo de Género por la complejidad del caso, pero sobre todo porque a partir de ello, un grupo de profesionales junto con profesionales de otras instituciones y los familiares de Diana se organizaron como activistas en torno a una “causa pública”, demandándole al Estado que reconozca las figuras de Travesticidio y Transfemicidio, hoy no estipuladas dentro del Código Penal. A partir de ello se elaboraron artículos, ponencias e informes sobre la temática.

una causa, y correr el eje en las intervenciones con las damnificadas de si le darán una condena o no a su agresor.

Estas feministas suelen sugerir a las víctimas -en los casos que amerita-, diferenciándose del objetivo de las Fiscalías, que no avancen con la causa penal, o que desestimen la causa siempre y cuando ese sea la real voluntad de la persona damnificada. Esto es así ya que muchas veces tanto las formas asociativas como las personas que han sufrido daños individualmente no tienen como el foco de su agencia la acusación y la denuncia, sino la búsqueda de apoyo y reparación (Barbot y Dodier, 2015). Aparece aquí una vez más la idea de “divorcio” con las expectativas de las Fiscalías, como fue desarrollado en el capítulo precedente.

Podríamos pensar entonces, que cada uno de estos grupos, a partir de las intervenciones que busca movilizar, y el tipo de compromiso feminista que expresa, construye distintas nociones acerca de lo que debería ser y hacer una víctima:

- Las “feministas centradas en el trauma” movilizan las nociones de “buena víctima” y buscar construir con sus intervenciones aquellas víctimas ideales que el campo jurídico acepta (puras, inocentes, asexuadas, y obedientes con el proceso penal, dispuestas a poner su cuerpo como prueba del delito).
- Las “feministas centradas en el caso”, a partir de su activismo y el énfasis en el hecho ocurrido, buscan construir víctimas con expectativas en el proceso penal y el castigo a los agresores, para las cuales la única reparación posible consiste en la obtención de una sentencia condenatoria alta.
- Las “feministas centradas en el deseo de la víctima” construyen, en cambio, “no-víctimas”. Buscan con sus intervenciones hacer énfasis en la búsqueda de *nuevos proyectos vida sin violencias*. A partir de restarle peso a la resolución de la causa penal, y encontrar horizontes reparatorios alternativos, buscan “que las víctimas dejen de ser víctimas”.

Para finalizar, vemos que el entrecruce entre el tipo de compromiso que desde el feminismo expresan las profesionales del dispositivo, y los tipos de víctima que construyen en sus intervenciones muestra que las distintas nociones de víctima están en constante movimiento y en disputa.

Como se explicitó en la introducción de este trabajo, se considera que la categoría de víctima en sí misma no tiene riqueza analítica sino el cómo y el para qué es utilizada por los profesionales y expertos que las movilizan. Se buscó entonces entrecruzar los objetivos de las intervenciones, en este caso, en pos de un objetivo mayor que es la *erradicación de la violencia de género*, y cómo las ideas de víctima sirven instrumentalmente para los fines de las profesionales.

Podríamos pensar entonces, que se ponen en tensión dos grandes ideas de víctima, asociadas a la agencia vs. la pasividad pero también a las víctimas “ideales” –la buena víctima, la que el campo jurídico acepta- y las víctimas que priorizan sus deseos aún cuando estos no sean el avance de la causa penal o un fin punitivo para su agresor. Estas últimas víctimas no se ajustan a las expectativas de algunas profesionales, pueden llegar a resultar “incómodas”, son “volátiles”, algunas veces no se quieren reconocer como víctimas y otras simplemente rechazan el acompañamiento de cualquier tipo de dispositivo, o incluso deciden retomar el vínculo con el agresor.

Mientras que las “feministas centradas en el trauma” movilizan las nociones de “buena víctima” y construyen con sus intervenciones víctimas ideales, “las feministas centradas en el deseo de la víctima” se inclinan más por las “deseantes” o “no ideales”. Las “feministas centradas en el caso”, podríamos pensar, se encuentran en un intermedio: por un lado, intentan romper con lo establecido al respecto de las nociones aceptadas sobre las víctimas dentro del poder judicial, y trabajan por la “autonomía” de las mismas, pero a la vez, van trazando estrategias que tienen que ver con el éxito punitivo en las causas. Por esta razón suelen identificarse con las víctimas que conciben el proceso penal como un proceso de lucha. Estas feministas-profesionales consideran, en su camino por la *“erradicación de la violencia de género”*, que la reparación de las víctimas irá de la mano

necesariamente de una condena alta para los agresores y a la vez que el castigo a aquellos forma parte de un paradigma de justicia.

## CONCLUSIONES

### La “autonomía” como ideal

#### ¿Acompañar a las víctimas o auxiliar a las fiscalías?

La presencia de las víctimas en la escena actual va de la mano con una preocupación en el campo estatal de darles contención, asistencia, refugio, acompañamiento. En ese marco, las reformas implementadas en el campo jurídico se han preocupado por darles voz, ubicarlas como parte del interés de atención a los grupos vulnerables. En ese contexto de proliferación de áreas de atención a víctimas, surge la Dirección.

Como hemos visto, desde el 2014 el Ministerio Público Fiscal de la Nación se dieron una serie de modificaciones en su estructura interna en favor de una nueva política criminal que pudiera abordar con especificidad los distintos ámbitos de criminalidad. A la vez, se buscó consolidar un rol activo respecto de la protección y el acompañamiento de las personas que habían sido víctimas de delitos y para ello “se crearon dispositivos que pudieran procurar investigaciones eficientes y respetuosas del debido proceso, y atender la situación de aquellos afectados directamente por la comisión de ilícitos penales.”<sup>47</sup> Entre ellos se creó la Dirección como dispositivo interdisciplinario de atención a víctimas de distintos tipos de delitos.

La Dirección es la materialización de un dispositivo en el que se entrelazan profesionales psi, y del trabajo social, en un dispositivo atravesado por lo jurídico. Desde su *expertise* estos profesionales contribuyen a la consagración de la condición de víctimas (Dodier, 2009, Zenobi y Marentes 2020; Zenobi 2020, Barthe, 2018). Tal como hemos mencionado, dentro del campo jurídico la división del

---

<sup>47</sup> Res N°1105/2014 creación de DIRECCIÓN

trabajo entre los agentes y las instituciones comprometidas se configura muchas veces en términos de disputa (Bourdieu, Teubner, 2000). Se observa, en este sentido cómo aparecen tensiones entre el tipo de dispositivo jurídico-penal y el tipo de saber –“psi” y del trabajo social- que se materializa en las tensiones entre las distintas disciplinas.

El valor de la interdisciplina para ellas está relacionado con legitimar las intervenciones y darle un sentido y un valor a la Dirección. ¿Qué es lo que diferencia a la Dirección del resto de las procuradurías, y oficinas que abordan la cuestión de la víctima? Una de ellas, sin dudas, es que en sus intervenciones hay profesionales del derecho, de la psicología y del trabajo social, que son específicamente las que busca la Dirección a la hora de cubrir su planta. Y a su vez, estas tres disciplinas son las que están legitimadas dentro del poder judicial, las entendidas, cuyas intervenciones son inteligibles al día de hoy para el sistema de administración de justicia.

Sin embargo, aparecen distintas valoraciones sobre lo que entienden por *interdisciplina*. Si bien por un lado la creación de la Dirección buscó corregir algunas cuestiones que la Comisión consideraba como *falencias* en el abordaje interdisciplinario de la OFAVI debido a la extrema “*compartimentación*”, en la nueva forma de construir interdisciplinariedad advierten sin embargo, un riesgo de “*aplanamiento*”, es decir que como “todas hacen todo” muchas veces se pierde la especificidad de los aportes disciplinares que es valorado negativamente. Asimismo, se advierte una acepción de la categoría de *interdisciplina* relacionada con el contexto en el que la utilizan las protagonistas. Al ser un dispositivo jurídico-penal la valoración positiva está dada por la capacidad de construcción de prueba para aportar a las causas en las que intervienen, más que a la integralidad de los acompañamientos a las víctimas. Así, nuevamente el éxito en la construcción de prueba para las causas a partir del abordaje intredisciplinario, pareciera estar relacionado con la necesidad de constituir a la Dirección como una “*voz legitimada*” para hablar de las víctimas en el marco del campo jurídico.

Vemos que en un dispositivo atravesado por lo penal, lo psicológico ocupa ese lugar jerarquizado, complementando al derecho en tanto “objetivador de la categoría de



víctima” por excelencia. Considero que esto puede ser así ya que, incluso pensando en términos de producción de prueba para la “teoría del caso” de las Fiscalías, se espera de un dispositivo de atención a víctimas, que la respuesta sea en términos de acreditar el daño sufrido, buscando rastros de trauma psíquico (Fassin, Didier y Rechtman, 2010; Fassin 2014; Zenobi, 2017b; Sarti, 2009) a través de distintas pericias e informes.

Con la creación de la Dirección, pareciera que las Fiscalías buscan, por un lado “que se aporte a la teoría del caso”<sup>48</sup> a partir de la construcción de prueba. Por otro lado, según lo relevado pareciera que otro de los objetivos no tan explícitos fue que le solucionen a las Fiscalías la dificultad que representaba que la víctima no pudiera declarar, la ausencia de herramientas por parte de los operadores judiciales para *contener* a las víctimas angustiadas y que la Dirección oficie como “auxiliar” en términos de “*alcanzar el pañuelito*” a las víctimas cuando lloran. Esta última idea, si bien no está estipulada en la resolución de la creación de la Dirección, se puede inferir a partir de la categoría de “*las chicas de la Dirección*” mencionada en el primer capítulo. Esta frase, de circulación generalizada en el MPF, encierra algunos presupuestos que tienen que ver con una subestimación a su tarea y un rol de cuidado asociado históricamente a las mujeres, y a las disciplinas que componen la Dirección.

A lo largo del trabajo, se observa que las expectativas de las profesionales muchas veces exceden ese rol asignado al dispositivo de “auxiliar” ya que a partir de su lugar de profesionales comprometidas (Vecchioli, 2009) pareciera que buscan muchas veces en sus intervenciones, un objetivo relacionado a la “*erradicación de la violencia*” y la construcción de “*proyectos de vida autónomos y sin violencias*”. Entonces, las profesionales en función de su compromiso con la erradicación de la violencia, sus expectativas relacionadas con las trayectorias militantes y sus disciplinas, se desvían de los objetivos institucionales originales de la Dirección y traspasan las fronteras de lo que originalmente se estipuló como tareas del dispositivo. Esto se cristaliza muchas veces en la búsqueda de reparación hacia la víctima a partir de alternativas al proceso penal. En ese mismo marco, por ejemplo,

---

<sup>48</sup> Estipulado en los objetivos del Protocolo de actuación de los Programas Especiales de DIRECCIÓN

se le puede recomendar a la víctima que no haga la denuncia. Esto implica poner en juego la *escucha* de las expectativas de las víctimas y a su vez remite directamente a la idea de reparación de las persona damnificadas.

Es en ese punto donde aparece una primera tensión en el trabajo del dispositivo con respecto a lo esperado por las Fiscalías. Si las profesionales que componen la Dirección evalúan que la reparación no irá de la mano del avance de la causa penal, desarrollan y movilizan distintas estrategias para acompañar a esa persona “*divorciadas*” de la institución a la que pertenecen. Esto muestra cómo los dispositivos no sólo configuran subjetividades sino que además las personas hacen a los dispositivos, les dan forma y vida. Las personas mueven y transforman los dispositivos: tanto las profesionales, a partir de sus trayectorias, impugnaciones y expectativas en relación a los lineamientos del sistema judicial, como las propias víctimas que introducen sus deseos y expectativas en relación a las causas, y hasta algunas deciden abandonarlas.

En función de ello, la *metodología de intervención* que en un primer momento parecía esquematizada -según muestra el Protocolo de actuación<sup>49</sup>- y orientada exclusivamente a la satisfacción de las expectativas de las Fiscalías, empieza a encontrar algunas fisuras, algunos márgenes por donde las profesionales satisfacen sus propias expectativas en relación al dispositivo que, pareciera, tienen que ver con la *erradicación de la violencia*.

A partir del compromiso que tienen con ciertas causas y luchas, las profesionales muestran su *vocación transformadora*. Ellas buscan que los operadores judiciales tengan otra perspectiva. A partir de ello, las profesionales se colocan muchas veces en un lugar de “educadoras” frente a los operadores de la justicia que, sospecho, tiene que ver con que es un dispositivo de mujeres feministas, asociadas a los roles de cuidado, e inmerso en un contexto político donde el feminismo se coloca -o es colocado- muchas veces en un lugar de enseñanza, a veces no buscado por ellas mismas. Para ellas es “*como un juego*” en el que por un lado “*traducen*” a la persona damnificada lo que ocurre en la causa, sus derechos y posibilidades, y por el otro

---

<sup>49</sup> [https://www.mpf.gob.ar/dovic/files/2019/09/protocolos-de-DOVIC\\_7-08.pdf](https://www.mpf.gob.ar/dovic/files/2019/09/protocolos-de-DOVIC_7-08.pdf)

intentan *hablar el mismo idioma* que los operadores judiciales para hacerles inteligibles otras miradas posibles sobre los casos que no solo recaigan en la urgencia o lo asistencial sino que contribuya a promover la autonomía de las víctimas.

Es posible, en ese sentido, “traducir” un acompañamiento, *hablar el mismo idioma*, y eso lo pueden realizar a partir de los aportes de disciplinas que vienen pujando hace tiempo para estar valoradas dentro del campo jurídico -la psicología, el trabajo social y el derecho-. Podríamos pensar entonces, que para las protagonistas, la *interdisciplina* es una manera de fortalecerse como una “voz autorizada” en términos del acompañamiento a víctimas en el proceso penal, es decir, una forma del dispositivo de legitimarse a sí mismo (Das, 1995).

Al valorar positivamente la autonomía, las profesionales contribuyen a que ciertas personas atraviesen un proceso reflexivo (Barthe, 2018) y se vean como víctimas de una determinada forma y no de otra. Esto es, fomentar lo que ellas denominan como la construcción de *proyectos de vida autónomos*. Pareciera que se trata de un dispositivo de atención a víctimas que trabaja para que dejen de serlo (Zenobi, 2020). Esto puede ser analizado a la luz del concepto de “paradoja de la víctima” de Barthe (2018), según la cual se asume que la víctima es pasiva, en una sociedad que valora la autonomía. Sin embargo vemos cómo, en el proceso de producción del estatus de víctima (Lefranc y Mathieu, 2009) o de victimización (Barthe, 2018) aparecen distintos intereses y prácticas de los agentes y de las propias personas damnificadas que van moldeando esa tensión entre pasividad y agencia (Zenobi y Marentes, 2020). Un ejemplo de ello es la idea que propone Laura de “*proyecto de vida autónomo*”, a partir del cual según ella, se busca dentro de la Dirección trascender lo puramente “*asistencial*” propio de la urgencia en casos de violencia para pasar a construir la “*autonomía*” de las víctimas. Y ello es en nombre de jerarquizar “*la voz de la víctima*” cuando las profesionales consideran que no está siendo tenida en cuenta por las Fiscalías.

Es decir, que frente a esta supuesta pasividad de las víctimas, las profesionales y *trabajadoras* de la Dirección, en calidad de “feministas profesionalizadas” (Álvarez, 1998) con compromiso con las “causas públicas” pueden considerar que ellas deben

“pasar al acto”, “empoderarse”, o “ganar agencia” (Zenobi, Marentes, 2020) y justamente a través de sus intervenciones en los casos buscan promocionar su “agenciamiento” (Roggeband, 2010).

Afirmar que a las profesionales del dispositivo, no les interesa entrar en los cánones de lo aceptado por el Poder Judicial sería incorrecto. Pareciera que las profesionales están atrapadas entre dos mandatos: “auxiliar” a las fiscalías como ordenan los protocolos y la carta orgánica, y por otro lado asistir a las víctimas, ya que como hemos visto, muchas veces estos intereses pueden no ir de la mano. Esto puede resultar contradictorio en términos morales (Gluckman, 1972), y serán las propias profesionales, respaldadas por la autonomía que gozan los programas especiales, las que a partir de sus propias técnicas morales (Gatti, 2017) evalúan qué hacer según cada caso, el contexto y su compromiso con la causa de la erradicación de la violencia. Asimismo, por sus trayectorias personales y sus disciplinas (retomando la disputa entre el dispositivo jurídico y los saberes “psi” y del trabajo social) pareciera que están atrapadas entre los procesos jurídicos tradicionales, y su compromiso en darle lugar a la víctima en ellos.

Por último, resulta interesante retomar la pregunta inicial sobre si es posible hablar de un “campo de víctimas” (Gatti y Martínez, 2017) que surge por la convivencia de víctimas de distintos delitos dentro de una misma dirección: desde secuestros extorsivos, hasta abuso sexual infantil y femicidios. La idea de campo a priori, supone pensar en tensiones, lucha, pugna por el sentido dentro del propio “mundo” de quienes se identifican como víctimas. Esta gran clasificación de “víctimas de delitos” nos habla del Estado como un constructor de relaciones y diferencias entre víctimas, y a la vez responde a una moral relacionada con el daño que debe ser reparado (Fassin, 2014).

A pesar de la “expropiación del delito” propio del derecho penal, la creación de la encarna la idea de que hay una víctima que necesita “ser oída” por parte del Estado, y que ha sufrido un daño. Es decir, hay un reconocimiento por parte del Estado de que hay víctimas que son pasibles de ser asistidas. Sin embargo, no todas las víctimas entran en esa categoría. Vemos que, a pesar de que la respuesta de la Dirección frente al agrupamiento de distintos tipos de víctimas tenía que ver con

mandatos institucionales, hay una especie de jerarquización o *ranking* propio de aquellas víctimas que son pasibles de ser atendidas por la Dirección, en especial, aquellas que según el propio dispositivo son consideradas *vulnerables socialmente*. Esta idea de vulnerabilidad es la que podría cohesionar el posible “mundo de víctimas” que atiende la Dirección, aunque no sea el que se encuentre explicitado en sus Programas.

La perspectiva que se abordó en el presente trabajo apuntaba a pensar a los dispositivos no como entes estáticos sino en constante movimiento, heterogéneos, compuestos por una multiplicidad de componentes y variables en el tiempo. En este sentido, las trayectorias personales, el accionar cotidiano de las profesionales en el seguimiento de casos, la disputa entre los saberes y disciplinas que operan dentro del dispositivo, y la diversidad de los propios sujetos que son asistidos, unos con sus demandas de reconocimiento como víctimas y otros con sus resistencias e impugnaciones; son parte del dispositivo.

Los intersticios, lo no dicho, lo que no se pone en los oficios judiciales es lo que muchas veces construye la idea de víctima. En los papeles, muchas veces se sigue un guión, un “deber ser” dentro del Poder Judicial, pero en los márgenes, en las conversaciones en la sala de entrevistas, en los llamados por teléfono y en los mandatos que las propias profesionales y *trabajadoras* -como parte de un dispositivo- imponen a las personas que han sufrido delitos, también se están construyendo “ideas de víctima” en disputa. Pero ¿Esas ideas de víctima perduran? ¿Dónde queda lo no dicho, lo marginal de la experiencia con las “víctimas”, más allá de un vínculo particular en el que las profesionales pueden hacer hincapié en que una sanción punitiva no es lo que va a resarcir el dolor de lo sufrido, o en el que le recomiendan a la víctima que no haga la denuncia porque en la balanza costo-beneficio, van a salir perdiendo? Podríamos pensar que entre las propias profesionales hay una conciencia sobre que sus acciones cotidianas contribuyen, más allá del dispositivo en sí, a construir algunas nociones de víctima. ¿Cómo se materializan entonces, estas ideas de víctima que claramente están en disputa?

Por último, dejo planteado, para algún futuro trabajo, un interrogante que propone Lowenkron al respecto de las tensiones entre vulnerabilidad, consentimiento y

pasividad para pensar las políticas públicas orientadas a reparar a los sujetos dañados: “*¿Es posible reconocer la vulnerabilidad sin asumir como dadas las ideas de irracionalidad, inocencia y pasividad, así como imaginar la posibilidad de agencia sin asociarla inmediatamente al ideal político liberal de autonomía o resistencia, ni a las nociones legales de responsabilidad y culpa?*” Esta pregunta abre un campo de interrogaciones que espero poder abordar en un futuro cercano.

## Bibliografía

Althabe, G., & Hernandez, V. A. (2004). Implication et réflexivité en anthropologie. *Journal des anthropologues*. Association française des anthropologues, (98-99), 15-36.

Alvarado Velloso, A. (2002) El debido proceso de la garantía constitucional, capítulo III titulado "Los sistemas procesales", Ed. Zeus, Rosario, Argentina.

Alvarez, S. L. (1998). Aspectos socio-culturales de la sexualidad como factores obstaculizantes de la prevención secundaria del cáncer cérvico uterino. *Cadernos de Saúde Pública*, 14, S33-S40.

Balbi, F. A. (2007). Entre el futuro del recurso y el futuro de los hijos: usos de términos y expresiones ambientalistas entre los pescadores del Delta del río Paraná. *Cuadernos de antropología social*, (26), 87-105.

Balbi, F. A., & Boivin, M. (2008). La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. *Cuadernos de antropología Social*, (27)

Barbot, J., & Dodier, N. (2013). Investissement et contournement des dispositifs judiciaires parmi les victimes d'un drame collectif. *Congrès du Research Committee on the Sociology of Law*.

Barbot, J. and Dodier, N. (2014) "Rethinking the Role of Victims in Criminal Proceedings. Lawyers' Normative Repertoire in France and the United States", in *Revue française de science politique*, Volume 64, Issue 3, 2014 | from 407 to 433

Barbot, J., y Dodier, N. (2015). Face à l'extension des indemnisations non judiciaires. Le cas des victimes d'un drame de santé publique. *Droit et société*, (1), 89-103.

Barbot, J., y Dodier, N. (2016). La force des dispositifs. In Annales. Histoire, sciences sociales (Vol. 71, No. 2, pp. 421-448). Cambridge University Press.

Barbot, J., y Dodier, N. (2017). Se confronter à l'action judiciaire. L'Homme, (3), 99-130.

Barroso Griffiths, R. D. (2014) Chubut, organización y gestión del trabajo de los jueces por la oficina judicial. Colegios de jueces y sistema de audiencias. Material de la fase virtual del “Programa Argentino de Capacitación para la Implementación de la Reforma Procesal Penal”, año 2014, organizado por el CEJA, el INECIP y el Ministerio de Justicia de la República Argentina.

Barthe, Y. (2018). Elementos para uma sociologia da vitimização. En Theophilos Rifiotis y Jean Segata (Comps). Políticas etnográficas no campo da moral (119-144). Porto Alegre: UFRGS.

Barthe, Y. (2019). Elementos para uma sociologia da vitimização.

Beck, U. (1998). La política de la sociedad de riesgo. Estudios demográficos y urbanos, 501.

Binder, A. (2002). “La Reforma de la Justicia Penal: entre el corto y el largo plazo”, en Sistemas Judiciales, Centro de Estudios de la Justicia de las Américas -CEJA- Año 2 – n° 3.

Binder, A. M. (2000) Iniciación al proceso penal acusatorio (para auxiliares de la justicia), Editorial Campomanes Libros, Argentina.

Binder, A. M. (2014) Elogio de la Audiencia Oral, material de la fase virtual del “Programa Argentino de Capacitación para la Implementación de la Reforma Procesal Penal”, organizado por el CEJA , el INECIP y el Ministerio de Justicia de la República Argentina.



Bourdieu P., y Teubner G. (2000) "La división del trabajo jurídico". En "La fuerza del derecho" (p.160-181). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Bourdieu, P., Chamboredon, J. C., & Passeron, J. C. (2010). Le métier de sociologue: Préalables épistémologiques. Contient un entretien avec Pierre Bourdieu recueilli par Beate Kraus (Vol. 1). Walter de Gruyter.

Chaumont, J. M. (2000). Du culte des héros à la concurrence des victimes. *Criminologie*, 33(1), 167-183.

Châtel, V., & Soulet, M. H. (2003). Agir en situation de vulnérabilité. Presses Université Laval

Das, V. (1996). Language and body: transactions in the construction of pain. *Daedalus*, 125(1), 67-91.

Daich, D (2015) "Publicitando el sexo: papelitos, prostitución y políticas anti-trata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" en Daich, D. Y Sirimarco, M. *Género, violencia en el mercado del sexo. Política, policía y prostitución*, Biblos, Buenos Aires.

Dodier, N. (2009). Experts et victimes face à face. En Sandrine Lefranc, y Lilian Mathieu (Ed), *Mobilisations de victimes* (pp. 29-36). Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Eser, A. (1992). Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal, en Maier, J. et al. *De los delitos y de las víctimas*. Ad Hoc, Buenos Aires.

Fassin, D. (2014). De l'invention du traumatisme à la reconnaissance des victimes. Genèse et transformations d'une condition morale. Vingtième siècle. *Revue d'histoire*, 123, 161-171.

Fassin, D. (2014). From the Invention of Trauma to Victim Recognition. Vingtieme Siecle. *Revue d'histoire*, (3), 161-171.

Fassin, D. (2016). "El gobierno humanitario". En: La razón humanitaria. Una historia moral del tiempo presente. Prometeo Editorial, Buenos Aires.

Fassin, D., & d'Halluin, E. (2005). The truth from the body: medical certificates as ultimate evidence for asylum seekers. *American anthropologist*, 107(4), 597-608.

Fassin, D., & Rechtman, R. (2010). L'empire du traumatisme: enquête sur la condition de victime. Flammarion.

Foucault, M. (1991), La Verdad y las Formas Jurídicas, 2ª edición, trad. de Enrique Lynch, Gedisa, Barcelona, 1991, conferencia segunda, ps. 35 y sigs.

Garland, D. (2005). La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Gedisa, Barcelona, España.

Gatti G. y Martínez, M. (2017). El campo de las víctimas. Disensos, consensos e imaginarios compartidos en el nacimiento del ciudadano víctima. En Gabriel Gatti (Ed): Un mundo de víctimas (pp. 73-90). Anthropos, Barcelona.

Gatti, G. (Ed) (2017) Un mundo de víctimas, Anthropos, Barcelona, España.

Gluckman, M. (1972). Moral crises: Magical and secular solutions. The allocation of responsibility, 1-50

Grinberg J. (2014) "Entre la pediatría, el psicoanálisis y el derecho: apuntes sobre la recepción, reelaboración y difusión del "maltrato infantil" en Argentina" *Revista Estudios Sociales* n 53

----- (2008) "Transformaciones en el tratamiento de la niñez en riesgo. Reflexiones sobre un dispositivo de protección a la infancia en la Ciudad de Buenos Aires", *Cuadernos de Antropología Social* N° 27

Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano: reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo (pp. 111-112). Buenos Aires: Paidós.

Gutiérrez Gómez J (2020) “De víctimas de trata a madres entregadoras: Cuando la expectativa de rol esperado conduce a la sospecha del delito”. En Entre márgenes, intersticios e intersecciones. Diálogos posibles y desafíos pendientes entre género y migraciones. (M. J. Magliano (compiladora)

Houdart, S., Manceron, V., & Revet, S. (2015). Connaître et se prémunir. La logique métrique au défi des sciences sociales. *Ethnologie française*, 45(1), 11-17.

Iraola, V. P., & Zenobi, D. (2016). Familiares de detenidos y abogados de derechos humanos. Trayectorias en la construcción de una causa pública. *Runa*, 37(2), 25-40.

Irazusta, I., y Gatti, G. (2017). El gobierno de las víctimas. Instituciones, prácticas, técnicas y oficios que hacen a las víctimas. En Gabriel Gatti (Ed.), *Un mundo de víctimas* (pp. 183-208). Anthropos, Barcelona, España.

Iyer, L., Mani, A., Mishra, P., & Topalova, P. (2012). The power of political voice: women's political representation and crime in India. *American Economic Journal: Applied Economics*, 4(4), 165-93.

Jelin, E. (2007). Víctimas, familiares y ciudadanos/as: las luchas por la legitimidad de la palabra. *Cadernos Pagu*, 29, 37-60.

Lefranc, S. (2017). La venganza de las víctimas. *Revista de Estudios Sociales*, UNIANDES, 59, 140-144.

Lefranc, S., y Mathieu, L. (2009). Introduction. De si probables mobilisations de victims. En: Sandrine Lefranc y Lilian Mathieu (Eds), *Mobilisations de victimes* (pp. 11-26). Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Lowenkron, L. (2015). Consentimento e vulnerabilidade: alguns cruzamentos entre o abuso sexual infantil e o tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. *cadernos pagu*, 225-258.

Luzzi, M. (2015). Pagar para reparar. Debates públicos y dilemas privados ante las políticas de reparación económica a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. *Muerte, política y sociedad en la Argentina*, 251-276.

Manikis, M. (2019). Contrasting the Emergence of the Victims' Movements in the United States and England and Wales. *Societies*, 9(2), 35.

Martuccelli, D. (2017). Semánticas históricas de la vulnerabilidad. *Revista de estudios Sociales*, (59), 125-133.

Morcillo, S., & Varela, C. (2017). "Ninguna mujer..." El abolicionismo de la prostitución en la Argentina. *Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro)*, 213-235.

Neiburg, F. G., y Plotkin, M. B. (2004). *Intelectuales y expertos*. Buenos Aires: Paidós.

Pereyra, S. (2010). Detrás de la justicia: la figura de los familiares de víctimas en los procesos de movilización contemporáneos. En Astor Massetti, Ernesto Villanueva y Marcelo Gómez (Eds.), *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario* (pp. 297-304). Buenos Aires: Nueva Trilce.

Pita, M. (2004). Violencia Policial y Demandas de Justicia: acerca de las formas de intervención de los familiares de víctimas en el espacio público. En Sofía Tiscornia (Comp): *Burocracias y violencia. Ensayos sobre Antropología Jurídica* (pp. 435-464). Buenos Aires: Antropofagia.

Pita, M. (2005). 'Mundos morales divergentes'. Los sentidos de la categoría de familiar en las demandas de justicia ante casos de violencia policial. En Sofía Tiscornia y María Victoria Pita (Eds): *Derechos humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Estudios en antropología jurídica* (pp. 205-235). Buenos Aires: Antropofagia.

Pita, M. V., y Pereyra, S. 2020, Introducción "La centralidad de las víctimas en la movilización social contemporánea" en *Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires.

Pitt-Rivers, J. (1973). Race in Latin America: the concept of 'raza'. *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie*, 14(1), 3-31.

Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica. *Historia y cultura en los procesos educativos*, 171-184.

Roggeband, C. (2010). The Victim-Agent Dilemma: How Migrant Womens Organizations in the Netherlands Deal with a Contradictory Policy Frame. *Signs*, 35(4), 943-967.

Roggeband, C. (2010). The victim-agent dilemma: How migrant women's organizations in the Netherlands deal with a contradictory policy frame. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 35(4), 943-967.

Roseberry, J. L. (2000). Concluding remarks: the research perspective. In *National Quail Symposium Proceedings* (Vol. 4, No. 1, p. 64).

Roxin, C. (1992). "La reparación en el sistema de los fines de la pena", en AA.VV., *De los Delitos y de las Víctimas*, Meier, J.B.J. comp., Ad-Hoc, Buenos Aires.

Rua, R. J. (2009) El principio acusatorio y la necesidad de una reforma legislativa, Ed. Infojus [en línea], Id Infojus DACC090075, Octubre de 2009. [Consulta 13/10/15]. Disponible en: [http://www.infojus.gob.ar/doctrina/dacc090075-ruaprinzipio\\_acusatorio\\_necesidad\\_una.htm](http://www.infojus.gob.ar/doctrina/dacc090075-ruaprinzipio_acusatorio_necesidad_una.htm)

Sarrabayrouse, M. J. (2011). Poder judicial y dictadura: el caso de la Morgue Judicial. Buenos Aires: Del Puerto.

Sarti, C. A. (2009). Corpo, violência e saúde: a produção da vítima. *Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana*, (1), 89-103.

Schillagi, C. (2017) "Rosario arde. Familiares de víctimas y su relación con el Estado en el marco de una catástrofe", *Papeles del CEIC*, vol. 2017/1, papel 165, CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), UPV/EHU Press. Versión electrónica: <http://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/article/view/16937>

Schillagi, C., & Zenobi, D. (2018). Produciendo víctimas: dispositivos y especialistas en el Gobierno de dos tragedias. In II Congreso Internacional de Victimología (Ensenada, 2018).

Tiscornia, S. (2008) El activismo de los derechos humanos. El caso Walter Bulacio, Buenos Aires, Editores del Puerto y Centro de Estudios Legales y Sociales.

Ulloa, A. (2005). Las representaciones sobre los indígenas en los discursos ambientales y de desarrollo sostenible. Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, 89-109.

Varela, C (2013) "De la "letra de la ley" a la labor interpretante: la "vulnerabilidad" femenina en los procesos de judicialización de la ley de trata de personas (2008-2011)". *Cadernos Pagu*. N°41

----- (2012) Del tráfico de las mujeres al tráfico de las políticas. Apuntes para una historia del movimiento anti-trata en la Argentina (1998-2008) *Revista Publicar-En Ciencias Sociales y Antropología*

Varela, C. y Gonzalez, F. (2015) "Tráfico de cifras: 'Desaparecidas' y 'rescatadas' en la construcción de la trata como problema público en la Argentina". *Apuntes de investigación del CECYP*. N° 26

Vecchioli, V. (2005). La nación como familia. Metáforas políticas en el movimiento argentino por los derechos humanos. Cultura y política en etnografías sobre la Argentina, 241-270.

Vecchioli, V. (2009). Expertise jurídica y capital militante: reconversiones de recursos escolares, morales y políticos entre los abogados de derechos humanos en la Argentina. *Pro-Posições*, 20, 41-57.

Veloso, L., & Marques, A. C. S. (2018). Vulneráveis ou vítimas? A experiência das redes de luta antimanicomial em Belo Horizonte e a construção relacional de biopotências. *Lumina*, 12(2), 59-78.

Walker, L. (1979). La teoría del ciclo de la violencia. *The Battered Woman*.

Wieviorka, M. (2003). L'émergence des victimes. *Sphera publica*, (3), 19-38, (UCAM), Murcia, España.

Zenobi, D. (2011). La politización del movimiento cromañón entre los 'modelos caseros' y los 'modelos del observador'.

Zenobi, D. (2014). Familia, política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado. *Antropofagia*, Buenos Aires, Argentina.

Zenobi, D. (2017a). "Políticas Para La Tragedia: Estado y expertos en situaciones de crisis". *Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies* (Special Issue: La contribución de la Antropología al estudio de crisis y desastres en América Latina), 46(1), 30-41.

Zenobi, D.. (2017b). "'Esperando justicia'. Trauma psíquico, temporalidad y movilización política en la Argentina actual". *Papeles del CEIC-International Journal on Collective Identity*, (1).

Zenobi, D. (2020). El sufrimiento como valor: expertise y compromiso en las reparaciones económicas a las víctimas de una "tragedia" argentina. *Revista Colombiana De Antropología*, 57(1), 71-97. <https://doi.org/10.22380/2539472X.1312>

Zenobi, D., y Marentes, M. (2020). Introducción "Panorama sobre la producción social de las víctimas contemporáneas" en *Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires (Pita, M. V.; Pereyra, S editores).



*1821 Universidad de Buenos Aires*

## Adjuntar Documento

## Hoja Adicional de Firmas

**Número:**

**Referencia:** Adjuntar Documentación- Firma ológrafa

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 110 pagina/s.

Digitally signed by GDE UBA  
Date: 2021.11.09 18:50:39 -03:00

Digitally signed by GDE UBA  
Date: 2021.11.09 18:50:39 -03:00